DEBATE HISTORIA




Cuando creíamos que ya todo estaba dicho sobre la historia de Colombia, llega este libro para demostrarnos que todavía hay territorios nuevos por explorar. ¿Sabías, por ejemplo, que hubo españoles que estuvieron a favor de la independencia?, ¿que la Conquista fue apoyada por comunidades indígenas?, ¿que la primera huelga obrera en el país fue liderada por una mujer?, ¿o que el gran nivel de resistencia de los ciclistas colombianos se debe a un proceso microevolutivo que data de miles de años atrás?

Esto y mucho más es abordado en estas páginas por Felipe Arias Escobar, quien nos invita a recorrer el pasado desde una perspectiva distinta y a entender el origen de los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Además de presentar un panorama general de nuestra historia, el autor incluye al final de cada capítulo sugerencias bibliográficas y audiovisuales para que los lectores puedan ampliar sus conocimientos sobre lo que es y ha sido el devenir de nuestra sociedad.



penguinlibros.com


ISBN 978-958-5132-78-8

#¿OtraHistoriaDeColombia?
Penguin Colombia
@penguinlibrosco

FELIPE ARIAS ESCOBAR ¿OTRA HISTORIA DE COLOMBIA? DEBATE

FELIPE ARIAS ESCOBAR

# ¿OTRA HISTORIA DE COLOMBIA?

De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulos

DERECHOS DEL HOMBRE

DEBATE



## FELIPE ARIAS ESCOBAR

(Bogotá, 1983). Investigador, divulgador de patrimonio cultural, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha sido docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Uniminuto y Autónoma. Actualmente trabaja en Señal Memoria, una estrategia dedicada a la conservación y difusión del acervo audiovisual de RTVC.

**Diseño de cubierta:** Penguin Random House Grupo Editorial / Lorena Calderón Suárez
**Imágenes de cubierta:** Getty Images (créditos completos en la página legal)
**Fotografía del autor:** archivo particular


# ¿Otra historia de Colombia?

# ¿Otra historia de Colombia?

*De tiempos prehispánicos a hoy:*

*lo fundamental en 12 capítulos*

**Felipe Arias Escobar**

DEBATE



Título de la presente edición: *¿Otra historia de Colombia?*
Primera edición: marzo, 2023


Carrera 7 # 75-51, piso 7, Bogotá, D. C., Colombia
PBX (57-1) 7430700

Imágenes de cubierta:
Hojas de plátano: © mikroman6, Getty Images
Cañón: © CSA Images, Getty Images
Papel: © pleshko74, Getty Images
Mazorca y rana: © NSA Digital Archive, Getty Images
Bandera: © Pimpay, Getty Images
Barco de vapor: © Luisa Vallon Fumi, Getty Images
Ciclista: © PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY, Getty Images
Cadenas: © ElegantSolution, Getty Images
Votante: © Malte Mueller, Getty Images



Impreso en Colombia *Printed in Colombia*

ISBN: 978-958-5132-78-8

Compuesto en caracteres Garamond

Impreso por Editorial Nomos, S.A.

# CONTENIDO

CÓMO CONTAR ESTA HISTORIA .......... 9

1. LOS PRIMEROS POBLADORES (16000 A. C.-500 A. C.) .......... 13

2. LA PRIMERA SOCIEDAD AGRARIA (500 A. C.-1540) .......... 31

3. EL PRIMER CONFLICTO CON LA GLOBALIZACIÓN (1499-1621) .......... 51

4. LA PRIMERA IDEA DE PAÍS (1550-1810) .......... 69

5. LA PRIMERA MODERNIDAD (1761-1824) .......... 87

6. LAS PRIMERAS CIUDADANÍAS (1821-1861) .......... 105

7. EL PRIMER ESTADO-NACIÓN (1861-1903) .......... 123

8. EL PRIMER GRAN TRÁNSITO CAPITALISTA (1900-1930) .......... 141

9. LA PRIMERA SOCIEDAD DE MASAS (1930-1958) .......... 159

10. Las primeras mayorías urbanas (1958-1985) .................. 177

11. El último contrato social (1985-2010) ......................... 195

12. Los desafíos contemporáneos ....................................... 215

Bibliografía ...................................................................................... 233

# Cómo contar esta historia

Si asumimos que Colombia es un país diverso, su pasado también debería serlo. No solo porque distintas culturas han habitado este territorio donde hoy nos identificamos como nación, sino porque merecemos una narración diversa de aquel pasado. Sin duda, hemos tenido conflictos y dificultades que obligan a mirar de manera crítica nuestro acontecer, de la misma forma en que necesitamos una amplitud de relatos sobre nuestras experiencias, para aprender a tramitar armónicamente nuestras diferencias, a administrar nuestras fortalezas y a edificar un futuro superior a nuestros problemas del presente. Para eso es que debe servir el aprendizaje de la historia en un país como el nuestro.

En esta narración corremos un primer riesgo. Para estudiar la historia se han creado etiquetas artificiales que, eso sí, han servido mucho para facilitar su enseñanza (Prehistoria, Edad Media, Renacimiento...). En Colombia solemos hacer esa tarea

iniciando con la historia indígena precolombina, luego marcando tres siglos de dominación española y finalmente nombrando un periodo republicano que ocasionalmente también partimos en dos siglos. Entre una y otra etiqueta nombramos nuestros antecedentes a partir de hegemonías partidistas, periodos presidenciales o cambios institucionales. Sin embargo, aquellos no dejan de ser rótulos arbitrarios y nadie, que sepamos, se ha inventado aún el reglamento para narrar el pasado. Otras formas de describirlo son posibles, sobre todo si requerimos darle sentido a esa narración dentro de lo que hoy somos.

Esta historia de Colombia, como lo verá el lector, conserva muchísimos rasgos de aquella periodización tradicional. Pero también he querido proponer, dentro de esa tradición, una mirada a procesos sociales, económicos y culturales mucho más amplios y diversos, los cuales a veces pasamos por alto no solo los colombianos en general, sino también quienes investigamos o divulgamos el devenir humano. Esta propuesta, una entre muchas que podrían hacerse en ese sentido, le da un nombre particular a cada capítulo, donde asumo que cada periodo o cada generación experimentó una característica hoy todavía vigente. Poblamos un territorio como nuestros antepasados de hace milenios, aprendemos a explotarlo como las sociedades prehispánicas, nos enfrentamos a un conflictivo contacto con el mundo como hace cinco siglos, formamos posteriormente unos límites políticos arbitrarios donde nos reconocimos colectivamente y nos manifestamos hoy con ideologías, regímenes socioeconómicos o experiencias culturales que fuimos construyendo en el tiempo. Esta propuesta, por supuesto, puede ser





tan prescindible como cualquier otra y dejo al público el juicio de cuán acertada o no fue mi decisión.

También quise escribir una historia que no fuera percibida como un recuento pesado de procesos políticos y económicos, mucho menos como esos viejos inventarios presidenciales que todavía afectan la reputación de la disciplina histórica entre el gran público. Por eso aquí también cuento historias que pasan por regiones, ciudades, pueblos, barrios, medios de comunicación, experiencias artísticas e incluso por anécdotas de hombres y mujeres cuya fama no ha sido tan grande como la de los gobernantes. Lo hice como un esfuerzo para que el lector entienda que la historia de su país ha ocurrido, y lo sigue haciendo, no solo en edificios públicos, campos de batalla, vías de comunicación o edificios monumentales, sino que también ha trascurrido en frente y al interior de nuestras casas. Esa también es una forma de señalar nuestra propia diversidad y de valorar la trascendencia que tiene cualquier historia humana.

Este libro, por último, jamás habría sido posible sin el esfuerzo previo de generaciones de profesionales de la historia y otras ciencias sociales. Por eso cada capítulo, incluyendo esta presentación, trae recomendaciones de libros y obras audiovisuales no solo para profundizar en cada tema, sino también para confrontar perspectivas de un pasado que reinterpretamos permanentemente. La gran mayoría de estas obras están disponibles en bibliotecas públicas o sitios web, y todas, más otras mencionadas al final, fueron fuentes de este libro.

**Para seguir aprendiendo**

El mercado editorial ofrece una gran diversidad de obras generales de historia de Colombia. Algunos clásicos son la monumental *Nueva Historia de Colombia* (1989-1997), dirigida por Álvaro Tirado Mejía; *Colombia: Una nación a pesar de sí misma* (1993) de David Bushnell, y *Colombia: País fragmentado, sociedad dividida* (2002) de Marco Palacios y Frank Safford, disponible en línea. También hay síntesis recientes como *Historia mínima de Colombia* (2018) de Jorge Orlando Melo; *Historia de Colombia: Lo que necesitas saber* (2021) de Mabel Paola López y Eric Duván Barbosa, e *Historia concisa de Colombia* (2013) de Germán Mejía y Michael J. LaRosa, dirigida principalmente a lectores extranjeros.

Sobre historias de temas específicos de nuestro pasado, se recomiendan *Breve historia económica de Colombia* (2015) de Salomón Kalmanovitz, disponible en línea; la clásica *Historia económica de Colombia* (2015), dirigida por José Antonio Ocampo; *Las mujeres en la historia de Colombia* (1995), editada por Magdala Velásquez; *Historia de la vida cotidiana en Colombia* (1996), dirigida por Beatriz Castro; el proyecto a cargo de Jaime Borja y Pablo Rodríguez *Historia de la vida privada en Colombia* (2009), y *50 días que cambiaron la historia de Colombia* (2005) de la revista *Semana.*

En series documentales hay un trabajo todavía por hacerse. Dentro de lo disponible en bibliotecas está *Viajes a la memoria: La huella de una nación* (Caracol TV, 2010), y sobre temas novedosos de estudio se recomiendan las series disponibles en RTVCPlay *Invisibles* (Señal Colombia, 2014), *Mujeres sin derecho y al derecho* (Cinex/Señal Colombia, 2021) y *Tesoros olvidados* (Señal Colombia, 2021).



# 1.

# Los primeros pobladores (16000 a. C.-500 a. C.)

Contar la historia de Colombia muchas veces implica tomarse atrevimientos, como el de remontarse muchos siglos en el tiempo a pesar de que esta nación sea un invento que tiene menos de doscientos años. Es decir que lo que llamamos Colombia —al igual que Argentina, Venezuela, Estados Unidos o entidades políticas aparentemente más antiguas como España o Italia— es una creación política muy reciente para los milenios de desarrollo histórico que ha tenido la humanidad. Sin embargo, uno de los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad está en la ocupación ancestral de un espacio específico, es decir, en las lecciones y experiencias que hemos heredado de los hombres y las mujeres que han habitado este territorio durante siglos. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya que remontar la existencia del país a mucho tiempo antes de que nos constituyéramos en un Estado independiente, ya que dar ese reconocimiento a

personas que jamás imaginaron o aspiraron a ser ciudadanos colombianos sería una enorme imprecisión histórica.

Pero a pesar de esa certeza, los colombianos del siglo XXI podemos y debemos reconocernos en las sociedades que durante miles de años ocuparon el espacio en el cual el Estado colombiano ejerce hoy su soberanía. En primer lugar, por la genética, ya que en mayor o menor medida somos descendientes de esos pobladores; en segundo lugar, por la cultura, ya que las primeras experiencias de adaptación a este territorio y el aprovechamiento eficiente de sus recursos se los debemos a ellos. Por último, identificarnos con esas personas también es un acto necesario de supervivencia, ya que esas sociedades del pasado remoto nos dejaron experiencias que enseñan muchísimo a un presente caracterizado por el consumo desmedido y amenazante de nuestros recursos naturales.

Lo que sigue es, pues, la historia de los más antiguos habitantes de lo que hoy es Colombia, tal vez no de lo que en un sentido político podamos llamar "los primeros colombianos", pero sí de los ejercicios más tempranos de ocupación del territorio que hoy reconocemos como país. De esta primera historia es relativamente poco lo que sabemos, a pesar de que se trata del periodo social, tecnológico y creativo más prolongado de nuestro pasado. El desconocimiento de esa memoria, tal como ocurre en el resto del mundo con sociedades que prejuiciosamente llamamos "prehistóricas" o "primitivas", muchas veces nos lleva a no valorar en su justa medida a las personas que vivieron hace milenios, a tratarlas como atrasadas, violentas y torpes, o a compararlas con individuos que en la actualidad





defienden ideas consideradas anticuadas. Una tremenda injusticia con hombres y mujeres de los que poco sabemos y que no están presentes aquí para defenderse de nuestro juicio. Este es, entonces, el tiempo que va desde las primeras oleadas migratorias que llegaron a nuestro territorio hace dieciocho milenios hasta la consolidación de los modos de vida agrícola en la Colombia prehispánica de hace dos mil quinientos años.

## EL PAÍS DE CAZADORES-RECOLECTORES

Uno de los primeros enigmas que experimentaron los europeos que hace cinco siglos invadieron el continente americano fue el de cómo llegó a poblarse un territorio separado del resto del mundo por los extensos océanos Atlántico y Pacífico. Basándose en sus más antiguas creencias religiosas, los europeos tenían la certeza de que todos los seres humanos compartían un mismo origen, así que, por lo tanto, tuvo que existir un momento en el cual algunas personas habían migrado a esta parte del mundo, provenientes de otro continente.

En el caso de la actual Colombia, uno de los más antiguos intentos por responder ese enigma se lo debemos a Manuel del Socorro Rodríguez en 1808. Él era el bibliotecario de Santafé de Bogotá y años antes se había convertido en el director del primer periódico editado en el país. Así como hoy hacemos juicios excluyentes hacia las sociedades del pasado, nuestro protagonista debió enfrentarse al desprecio que numerosos intelectuales en Europa tenían hacia la cultura de las sociedades de América. Pensando en cómo enfrentar ese prejuicio y basándose

en los relatos de la mitología griega sobre el continente perdido de la Atlántida, Rodríguez planteó la posibilidad de que América hubiera sido poblada por quienes debieron abandonar esa isla legendaria antes de su desaparición.

Otra tesis expuesta por el bibliotecario, de base mucho más científica y que recogía la opinión de otros eruditos de su época, fue la de suponer que en un tiempo muy remoto América hubiera estado unida a otro continente, facilitando el tránsito de población. Aunque Rodríguez no vivió lo suficiente para confirmarlo, la arqueología y la geología terminaron por verificar su sospecha. El estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia, fue hace cuarenta mil años un extenso puente natural debido al descenso del nivel del mar durante la última glaciación. Eso permitió el tránsito de grupos migratorios provenientes de Asia que hicieron del continente americano un escenario más de la vida humana. Durante años también se planteó la posibilidad de un poblamiento proveniente de alguna de las regiones de Oceanía, sin embargo, el estudio genético y craneal de los pueblos de ambos continentes ha terminado por rechazar esa tesis y verificar el origen asiático de la gran mayoría de los indígenas americanos.

La ubicación geográfica de la actual Colombia, en el límite entre Sudamérica, América Central y el Caribe, tuvo un papel decisivo en ese proceso migratorio, al ser sus playas, valles, llanuras y ríos un paso obligado de especies animales, incluyendo el ser humano. Ese viaje —es importante aclarar— no fue breve, sino que tomaría miles de años, en un proceso accidentado si tenemos en cuenta los ambientes desconocidos a los que





se enfrentaron quienes migraron por el continente. Pero eso sí, una de las grandes virtudes de la naturaleza, a la cual no hemos dejado de pertenecer los hombres y las mujeres, es su capacidad adaptativa. Por lo tanto, miles de años después del arribo del primer ser humano a cada ecosistema de nuestro país, encontramos habitantes cuyos cuerpos responden hábilmente a los rigores del clima, la altura, el esfuerzo físico, el hambre o la sed que allí encontraron.

La historia de esa adaptación es compartida por los colombianos del presente desde lo cultural, por supuesto, pero también, y como ya lo decíamos, desde nuestra información genética. Un ejemplo vivo y actual de esa respuesta es la resistencia pulmonar, cardiaca y muscular que puede tener un ciclista boyacense o antioqueño, notablemente distinta a la de sus colegas europeos. Pero no hay que ganar el Tour de Francia para comprobarlo, ya que la presencia diversa de maíz en nuestra dieta o la intolerancia de muchos de nosotros a la leche son también rasgos de esa herencia que podemos hallar en nuestra vida cotidiana.

Pero volvamos a miles de años atrás: ¿Cómo eran y cómo vivían esos primeros habitantes de lo que hoy es Colombia? No es fácil responder esa pregunta, principalmente por los prejuicios que el presente tiene contra el pasado. Nuestro país, a diferencia de México o Perú, ha sido un territorio poco llamativo para la arqueología, dado el hecho de que aquí no se asentaron las sociedades que se han valorado como las "culturas clásicas" de América o los Estados expansionistas que encontraron los conquistadores. Esa valoración parte de creer que, porque una

sociedad tiene una cultura material o política en apariencia más rudimentaria que otra, sus creencias, instituciones o sistemas productivos son inferiores, lo cual es una burda simplificación de la dignidad que tiene cualquier comunidad humana. Ese ha sido el gran reto de investigar nuestro pasado más remoto: descubrir esa complejidad cultural en una modernidad más interesada en sociedades que hayan dejado grandes construcciones de piedra, tumbas con ajuares llenos de oro, descripciones abundantes de su mitología fantástica o narraciones heroicas sobre su expansión política.

Un estudioso clave para conocer ese pasado y liberarnos de prejuicios fue el naturalista Thomas van der Hammen, cuyo nombre hoy lleva una importante reserva natural de Bogotá. A él le debemos la primera investigación rigurosa sobre las transformaciones geológicas de la actual Colombia, la cual permitió establecer la cronología del cambio climático en este territorio durante el último millón y medio de años. Aquel estudio ha sido esencial para identificar las etapas de poblamiento temprano del país, hace aproximadamente veinte mil años. Por entonces el territorio americano tenía grandes diferencias respecto del actual, por ejemplo, lo que hoy es Canadá estaba cubierto con un enorme casquete de hielo mientras que la actual selva amazónica era una extensa llanura despejada, con pequeños bosques dispersos por toda la región. En el primer caso se forzaba la migración humana hacia el sur, en el segundo se favorecía el tránsito por corredores mucho menos agrestes que los que hay en el presente o por otros ecosistemas que hoy todavía identificamos, como sería el caso de las playas de la costa pacífica.





Al propio Van der Hammen, junto con Gonzalo Correal, le debemos el hallazgo de los más antiguos vestigios de presencia humana en el país. Ocurrió en 1993 en cercanías de Tocaima, Cundinamarca, donde se encontraron herramientas, fogones y restos de animales, intencionalmente dispersados por la comunidad humana que vivió allí hace dieciséis mil años. Otro hallazgo similar ocurrió en el sitio de Tocogua, en Duitama, Boyacá, donde se ha propuesto una datación de más de diecinueve mil años. Estos descubrimientos fueron complementarios a los que estos mismos investigadores encontraron en la hacienda El Abra de Zipaquirá, donde en 1967 se identificaron herramientas de piedra, o en la hacienda Tequendama de Soacha, tres años después, donde aparecieron vestigios de campamentos estacionales y esqueletos humanos de hace catorce mil años, con su correspondiente ajuar funerario.

Para ese entonces la altiplanicie de Cundinamarca y Boyacá era muy distinta, mucho más fría, y, por tanto, con una vegetación de páramo y una fauna diferentes. Dentro de esta última se cuentan grandes animales hoy extintos, como el mastodonte o el caballo americano, cuyos restos se conocen desde hace más de dos siglos por los trabajos de la Expedición Botánica y de Alexander von Humboldt. Eso ha llevado a la ciencia a preguntarse cómo era la relación de esos hombres con la tierra fría donde hemos encontrado sus huellas: ¿La habitaban de forma continua o solo la visitaban para la obtención de recursos? ¿Basaban su subsistencia en la caza de esos grandes animales, contribuyendo eventualmente a su extinción? El estudio de la tecnología de estas sociedades, es decir, de sus mecanismos

materiales para adaptarse al medio, permite esforzarnos por dar algunas respuestas.

Por ejemplo, los artefactos hallados en Tequendama, mucho más elaborados y con materias primas disponibles en tierras de menor altitud, contrastan con las sencillas herramientas de piedra de El Abra. Eso ha sido respondido por la arqueología como una probable adaptación al medio muy rápida, que no exigía un mayor esfuerzo en la fabricación de objetos para la caza de animales grandes, pues se prefería el consumo de especies más pequeñas dentro de la diversa fauna de la región: venados, armadillos o roedores, como el conejo y el cuy. Esa dieta diversa de nuestros antepasados también se puede verificar para la época de la llegada de los españoles, quienes en sus descripciones de la fauna de la Sabana de Bogotá también enumeraban zorros, perros de monte, comadrejas, garzas, patos, ranas y multitud de insectos. Hoy algunos de estos animales siguen siendo parte de las especies endémicas que se resisten a desaparecer bajo la desordenada expansión de la zona metropolitana de Bogotá.

Pero ¿cómo era esa gente de hace milenios? Es indiscutible que se trataba del sistema más antiguo de organización socioeconómica humana, el cual la ciencia simplificó con el nombre de cazadores-recolectores. No es mucho lo que podamos saber de ellas y ellos, pero puede darnos algunas luces el conocimiento de los pueblos nómadas que practican ese modo de vida en el presente. El nomadismo es una respuesta necesaria al ciclo periódico de las especies vegetales y la trashumancia de los animales que genera un amplio conocimiento de





la naturaleza: un nómada conoce la diversidad de frutos incluso más que las personas sedentarias, ya sea para su alimentación, la curación de sus enfermedades o sus prácticas mágico-religiosas; al mismo tiempo, construye sus relaciones sociales a partir de la obtención de recursos, asignando funciones a cada miembro de la comunidad; además, al someterse a las transformaciones drásticas del medio, tiende a la conservación y a un consumo exclusivamente centrado en su subsistencia.

Al tratarse de pueblos adaptados a los más variados ecosistemas, sería impreciso describir a estas sociedades como homogéneas; de hecho, la evidencia arqueológica habla de formas muy variadas y excepcionales de relacionarse con el medio. Por ejemplo, el arqueólogo Cristóbal Gnecco, quien ha estudiado estas sociedades tempranas en el suroccidente del país, ha encontrado cómo estas comunidades transformaban el medio ambiente a partir de sus propias necesidades y conocimientos. Los sitios de La Elvira y San Isidro, cerca de Popayán, dejan ver esa singularidad en los restos de nueces, aguacates y alucinógenos como muestra de la dependencia principal de plantas no solo en estado silvestre, sino también, a pesar del nomadismo, en forma de alimentos transformados por el hombre.

Ese conocimiento de la naturaleza, determinante en su economía, debió ser complementado por el ser humano con su capacidad de organizarse conforme a sus necesidades. Al desarrollo técnico y material de un pueblo nómada debemos agregar una organización social donde la solidaridad es imprescindible, o donde la diferenciación social apenas se limita a roles asignados por sexo y edad. Estos pueblos son, por supuesto, sociedades

vulnerables, que no controlan sus recursos a profundidad, y para las que una transformación drástica del medio puede ser fatal, a lo cual se responde, precisamente, con el auxilio mutuo y la permanente distribución e intercambio de bienes entre toda la comunidad. Salvo que un hallazgo extraordinario nos evidencie lo contrario, no es iluso suponer que así era la vida aquí hace catorce mil años.

Hablando de esos cambios drásticos en el medio, el clima aumentó dos mil años después de que murieran aquellos cazadores que fueron enterrados en Tequendama, convirtiéndose la sabana en un típico bosque andino, hecho que permitió el poblamiento de zonas más altas. De lo anterior se han hallado vestigios en zonas como Tibito, en cercanías de Tocancipá, o el parque Piedras del Tunjo, en Facatativá, dos sitios arqueológicos que además evidencian una ocupación permanente del espacio durante milenios. Así, para el año 8500 a. C. había actividad humana en todas las regiones del país, lo cual demuestra que la capacidad adaptativa del ser humano había podido integrarse a los ecosistemas más variados. La población, por supuesto, seguía siendo muy baja, lo cual garantizaba una enorme cantidad de recursos naturales sin consumir, permitiendo de este modo la apropiación permanente y desarrollada del territorio hasta el siglo XVI, cuando, según los cálculos más moderados, los europeos encontraron los mismos cuatro millones de habitantes que vivían entonces en el Reino de Castilla, en una Colombia dos veces más extensa que España. Y aunque en su momento no les interesara mucho a los conquistadores europeos, también hallaron una enorme diversidad cultural, resultado de la





compleja serie de cambios tecnológicos y productivos que experimentaron los pueblos indígenas.

## Nuestra primera revolución

Para el año 7000 a. C. finalizaba en la actual Colombia un proceso de unos tres milenios en los cuales coexistieron el nomadismo y las experiencias más tempranas de sedentarización. Los cambios ambientales alteraron la subsistencia humana, pero también pusieron a prueba la adaptación de los habitantes al medio; por lo tanto, la economía continuaba siendo de subsistencia, pero se fue haciendo cada vez más variada. En un lugar podía haber un pueblo especializado en la pesca y en otro empezaba la recolección de semillas para intervenir en la reproducción de plantas, mientras que en todas partes se desarrollaba una división de roles sociales a partir de la diversificación de herramientas y técnicas de trabajo, como es el caso de la elaboración de textiles con fibras de palma o el uso como recipiente del fruto del *crescentia cujete* (lo que llamamos totumas). Acudimos así a un modo de vida mixto, en el que la recolección y la caza seguían siendo esenciales, pero en el cual también se ensayó la domesticación de especies como el cuy en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño —el primero de nuestros animales domésticos, desde hace diez mil años—, el cultivo de raíces en las zonas selváticas o la recolección de moluscos en las costas.

Lentamente se transitó hacia un proceso de transformación de la naturaleza más drástico, aunque, antes que el hombre,

fue el propio medio el que indujo al cambio. El aumento de la temperatura, por ejemplo, hizo que las grandes llanuras se convirtieran en selvas, generando también sequías que en la Sabana de Bogotá detuvieron el hasta entonces ininterrumpido aumento de población. Esas situaciones obligaron al ser humano a desarrollar conocimientos avanzados para seleccionar y procesar los recursos, siendo la comunidad de Peña Roja —un terreno en el río Caquetá, estudiado desde los años 80— un ejemplo notable. En ese lugar de la selva amazónica se encontraron vestigios de sociedades nómadas que intervinieron espacios específicos para que en ellos se desarrollaran las plantas y los animales esenciales para su subsistencia. Así, hace ocho mil años este pueblo ya utilizaba tubérculos, calabazas e incluso árboles para la extracción de madera.

Dos milenios después —es decir, para el 5000 a. C.— podemos datar en nuestro país la existencia de las primeras aldeas, el principal signo de que la sedentarización se ha consolidado en un territorio. Un rasgo de esa vida lo hallan los arqueólogos en zonas donde los desechos se acumulan no necesariamente como basureros convencionales, sino como depósitos en los que las comunidades erigieron sus propias viviendas. En ellos también hallamos una roturación del suelo para la explotación agrícola, la producción de cerámica, el cultivo en huertas pequeñas y la expansión de ese modelo productivo hacia otras comunidades de la misma región. Los hallazgos más emblemáticos de ese periodo se los debemos a Gerardo Reichel-Dolmatoff, uno de los principales referentes de la antropología en Colombia, quien a mediados del siglo pasado se





interesó en excavar la región Caribe, un área hasta entonces considerada marginal por la arqueología colombiana. Allí las sociedades de la costa aprovecharon la diversidad de recursos que ofrecían la desembocadura de los ríos, los manglares y las ciénagas en un uso también variado, por ejemplo, de la carne de los moluscos como alimento y de sus conchas como material para herramientas y viviendas.

Una de esas aldeas fue hallada en Puerto Hormiga, muy cerca de Cartagena. Hacia el año 3000 a. C. ese lugar fue habitado por una sociedad matriarcal —es decir, con un liderazgo político ejercido por las mujeres— que complementaba la caza con el cultivo de huertas y que producía cerámica. En arqueología, esta tecnología se considera el signo de una notable transformación económica, ya que su uso señala la necesidad de disponer de recipientes para almacenar los excedentes que deja la actividad agrícola y para procedimientos complejos de transformación y conservación de los alimentos, y es incluso vista como una evidencia de la complejidad de la vida religiosa, dado el uso ritual que también pueden tener estos objetos. La importancia de Puerto Hormiga, además, también se da por tratarse de uno de los vestigios de cerámica más antiguos de América, lo cual hace que sea un área clave para investigar el desarrollo de las culturas prehispánicas de todo el continente. A pesar de su datación, posiblemente este proceso sea mucho más antiguo y extendido, como se puede constatar con la cultura Valdivia, que por la misma época trabajaba esta técnica en el actual Ecuador.

La sedentarización también significa una revolución tecnológica y una evidencia de las diversas soluciones que aporta

el ser humano para permanecer en un mismo lugar. El sitio de Aguazuque, en los mismos terrenos de Soacha donde se encontraron los restos humanos de Tequendama, vivió esa situación hace cinco mil años, al ser habitado por aldeas en forma de colmena construidas por familias que alternaban la caza del venado con el cultivo de calabazas y la domesticación de cuyes, diversificando progresivamente el consumo de vegetales. Pero no se trata del único vestigio de ese proceso, ya que al norte del país están Monsú, Canapote y Barlovento como muestra de las variadas secuencias tecnológicas y culturales que sucedieron al pueblo de Puerto Hormiga, para un momento en el cual alejarse del mar se convirtió en una posibilidad mucho mayor de aprovechamiento de recursos. La agricultura, de este modo, cada vez se hacía más viable.

Para el segundo milenio antes de nuestra era, la yuca se convirtió en la principal protagonista de esa revolución social y económica, y su domesticación se extendió por buena parte de las zonas cálidas del país. El suelo de Malambo, en el departamento del Atlántico, guardó por siglos las huellas de una sociedad que produjo objetos de piedra y cerámica cada vez más diversos, entre los que se encuentran los tiestos, aquellas planchas de piedra o barro para tostar los panes hechos con harina de yuca. Algunas generaciones después, empezaría la ocupación de Momil, en Córdoba, otro lugar emblemático para la arqueología colombiana y también descubierto por Reichel-Dolmatoff. La importancia de este sitio radica en que nos permitió por primera vez apreciar las adaptaciones de la cultura material a los productos agrícolas que estas sociedades iban





descubriendo, especialmente con el fruto más representativo de la alimentación en América: el maíz.

Los habitantes de Momil, hacia el año 500 a. C., utilizaron esos tiestos para consumir también derivados de maíz, con mucho menos esfuerzo que el que requería la yuca. A esos usos les agregarían la producción de metates de piedra para moler y vasijas para la producción de bebidas fermentadas. Es decir que, atreviéndonos a llevar esos vestigios del pasado a la realidad productiva de nuestro presente, desde hace dos mil quinientos años se pueden datar las evidencias más antiguas de consumo de chicha y arepa, además de rodillos para el estampado de telas y figuras cerámicas de uso ritual. No quiere decir, eso sí, que allí encontremos a los primeros cultivadores de maíz en nuestro territorio, ya que el estudio de restos óseos y dentales en el altiplano cundiboyacense ha concluido que allí también se consumía este producto al menos desde mil años antes. Momil, sin embargo, tiene la ventaja de mostrarnos los vestigios materiales más diversos de cómo este producto se aprovechaba.

Pero ¿por qué fue tan extendido y generalizado el consumo de maíz no solo en Colombia sino en toda América? El maíz nació hace diez mil años en el centro de México, de la manipulación humana de espigas de una planta silvestre llamada teocinte, que poseía una extraordinaria capacidad para crecer en diferentes climas. La yuca, base primigenia de nuestras comunidades sedentarias, es un fruto que no puede permanecer enterrado mucho tiempo y debe consumirse de inmediato cuando se extrae; el maíz, por su parte, se conserva mucho más y se produce en mayor cantidad con una menor inversión de fuerza y horas de trabajo,

generalmente con solo dos cosechas al año. Un cultivador de yuca no produce excedentes, mientras que uno de maíz acumula buena parte de su producción, lo cual le permite comercializarla y desarrollar otro tipo de oficios, circunstancia que favorece la especialización, la diferenciación social y el consecuente rediseño de las estructuras políticas.

Lo anterior no solo indujo a un cambio de las sociedades, sino también de los cuerpos de sus integrantes. El primer milenio antes de Cristo, el de esta revolución agrícola, también es la constatación de una apariencia física diferente de nuestros ancestros, reflejada en la forma de su cráneo y sus dientes y hasta en las enfermedades que contrajeron. Por ejemplo, con el consumo intensivo de carbohidratos apareció la caries, imperceptible entre los cazadores-recolectores, al tiempo que cambiaron la estatura y los rasgos faciales. Esa percepción ha llevado a que algunos arqueólogos concluyan desde hace décadas que los cambios físicos y culturales de la actual Colombia fueron el resultado de migraciones tardías provenientes de México o América Central, pero esa posibilidad es debatida por la tesis de que los cambios en la morfología indígena se debieron más a un proceso microevolutivo acelerado por los cambios de estilo de vida que trajo la sedentarización.

Así fue como hace dos mil quinientos años se generalizó la agricultura en todos los climas del país, permitiendo la ocupación generalizada de terrenos alejados de la costa y los grandes ríos. La diversidad regional, tan característica de nuestro medio actual, entonces también se vio reflejada en lenguas, prácticas políticas y culturas materiales únicas, según el lugar donde las





estudiemos. Por eso mientras se abandonaron las aldeas de Momil, aparecieron las primeras evidencias de sedentarización en San Agustín, Huila, o los primeros registros de alfarería en el Valle del Cauca y en la población de Ráquira, Boyacá, famosa en el presente por seguir practicando esa misma técnica. De igual forma, hallamos en zonas tan distantes como Cundinamarca, la Sierra de la Macarena, los Montes de María y la Serranía de Chiribiquete en el Guaviare técnicas muy parecidas de arte rupestre practicado durante milenios, pero que a la vez expresan respuestas estéticas a sistemas de creencias radicalmente distintos entre sí. Todos estos pueblos desarrollaron un respetable grado de intercambios culturales y comerciales, extendiendo saberes y tecnologías y definiendo la vocación agraria que tuvo la economía colombiana durante la mayor parte de su historia.

Eso sí, como un rasgo fascinante de esa diversidad, las sociedades de cazadores-recolectores no desaparecieron, siendo el nomadismo una práctica que resistió hasta hace pocas generaciones en pueblos como los cuiba en los Llanos Orientales, o los nukak en el Guaviare, a quienes su exitosa forma de vida les permitió subsistir sin mayores problemas durante un tiempo muy prolongado. La tragedia de estas comunidades vino luego por sucesos insospechados que pusieron a prueba su resistencia: la Conquista del siglo XVI, la fiebre del caucho del XIX, la colonización mestiza y el narcotráfico del XX, y las economías extractivistas y el cambio climático del XXI.

**Para seguir aprendiendo**

El poblamiento temprano del actual territorio colombiano es un tema en permanente construcción. Cuatro fuentes disponibles en línea son los clásicos *Cruzando el tapón del Darién* (1991) de Warwick Bray y *Arqueología de Colombia* (1997) de Gerardo Reichel-Dolmatoff, más los archivos del *Boletín de Arqueología* y el *Boletín del Museo del Oro*. Sobre una riqueza arqueológica profundamente relacionada con su medio natural, se destaca *Chiribiquete: La maloka cósmica de los hombres jaguar* (2019) de Carlos Castaño-Uribe.

La anterior información se amplía en el primer tomo de la *Historia de América Andina* (1997) de la Universidad Andina Simón Bolívar, *Más allá de la forma y la función* (2009) de Elizabeth Ramos, *Arqueología en el área intermedia* (2011) de Víctor González y Cristóbal Gnecco, y la síntesis actualizada *Antes de Colombia* (2021) de Carl Langebaek. Por su parte, *Las enfermedades en las condiciones de vida prehispánica* (2006) de José Vicente Rodríguez permite apreciar aportes interdisciplinarios al tema, mientras que el estudio del pasado remoto del país puede evaluarse en *Arqueología colombiana: Ciencia, pasado y exclusión* (2003) de Langebaek y *Arqueología al desnudo* (2003) de Gnecco y Emilio Piazzini.

Las sociedades nómadas y hortícolas de Colombia pueden conocerse en los documentales *Cerro Nariz* (Gloria Triana, 1985) —de la serie *Yuruparí*, disponible en RTVCPlay— y *Nukak Makú* (Jean Lamy y Carlos Rendón, 1993) —conservado en la Biblioteca Luis Ángel Arango—. Las cintas *Apaporis* (Antonio Dorado, 2012) y *Colombia: Magia salvaje* (Mike Slee, 2016) complementan este tema con el estudio de la diversidad biológica del país y el impacto que sobre ella ha ejercido la presencia del ser humano.



# 2.

# La primera sociedad agraria (500 a. C.-1540)

Un grupo de europeos armados llegó hace cinco siglos a la actual Colombia, encontrando un conjunto muy diverso de sociedades, el cual les fue imposible clasificar y describir con el criterio de un científico del presente. La mentalidad del invasor, proveniente de una sociedad aislada del resto del mundo, como lo fueron muchas comunidades de Europa occidental hasta el siglo XVI, respondió a este encuentro con una serie de prejuicios que fueron decisivos en la forma como todavía hoy nos acercamos a los pueblos indígenas. El exterminio, pero también el aprendizaje; la exclusión junto con la eventual integración; la negación avergonzada de su herencia junto con la admiración ingenua; tanto las experiencias de maltrato como las de reconocimiento, todo eso ha compuesto la herencia que nos dejaron los conquistadores sobre cómo leer aquel pasado.

Es así como cada 12 de octubre las redes sociales y algunos medios de comunicación se inundan de reclamos bienintencionados

sobre la desaparición de aquellas culturas, lo cual, sin embargo, no deja de ser un ejercicio lleno de simplificaciones y estereotipos. Con frases como "imperios poderosos", "civilizaciones misteriosas" o "pueblos sabios" creemos hablar en nombre de gente de la que muy poco sabemos. Nos apropiamos, desde una lectura occidental, nacionalista y moderna, de unas creencias políticas, religiosas o sociales que jamás nos pertenecieron y que hoy acaso nos llegan en fragmentos. Creemos que compartimos la misma nacionalidad o que, en su defecto, en ese pasado está el germen de la identidad política de nuestro presente. Como en esa vaga imagen del conquistador, seguimos saqueando un mundo que ignoramos, para nuestro provecho moral y político.

Si solemos tener una imagen falsa o fragmentada del pasado indígena, ¿qué había entonces en lo que hoy es nuestro país hace quinientos años? Había hombres y mujeres, cuya simple condición humana ya merece respeto, sin que para eso tengamos que ponerlos en una escala intelectual, política o moral superior a la de otros. Hubo aquí, por igual, saberes avanzados para la supervivencia y colapsos derivados del desconocimiento del medio; hubo individuos arraigados profundamente a sus comunidades, al mismo tiempo que se dieron desigualdades políticas que desencadenaban conflictos violentos. En medio de esa diversidad de relaciones humanas, ¿cuál puede ser entonces la importancia de ese pasado para nuestra sociedad contemporánea? Nos vamos a arriesgar con la siguiente definición: lo que ocurrió en esta parte del mundo antes de la llegada de los europeos fue la consolidación de la vocación agrícola que históricamente ha tenido el territorio colombiano. A pesar de





la distancia temporal y cultural con esos pueblos, tenemos ante nosotros el vestigio de la primera sociedad agraria que habitó lo que hoy es nuestro país. Y, siguiendo esa idea, contaremos aquí parte de su historia, la cual transcurrió durante un poco más de mil años.

## Los campesinos milenarios

Muiscas, taironas, quimbayas, zenúes... son los rótulos que entre nosotros han perdurado por costumbre para llamar a esa gente del pasado, los cuales usamos al lado de los de otros pueblos de historia más remota asignados según el nombre actual de su territorio (Tumaco, San Agustín, Tierradentro, Calima) o según la región en la cual se han hallado sus restos arqueológicos (Nariño, Urabá, Chocó, Tolima). Esos nombres inciertos se refieren a las sociedades —o, de forma más exacta, a regiones de estudio— cuya cultura material apreciamos en el célebre Museo del Oro. No eran ni "tribus" ni "civilizaciones misteriosas", además de que carecemos de elementos de juicio para concluir que tenían una etnia común.

A estos pueblos, más allá de estériles consideraciones nacionalistas, podemos valorarlos desde su dimensión humana y su legado, el cual no solo está en la cerámica, en los textiles y en la orfebrería que vemos en anticuarios y museos, sino también en la plaza de mercado, en la parcela, en el carro de frutas de la esquina, en técnicas artesanales de cultivo aún vigentes, en la pesca y la extracción minera, o hasta en el comercio de artesanías producidas con técnicas idénticas a

las de hace siglos. Esa diversidad de legados prehispánicos, tan presente como imperceptible en nuestra cotidianidad, termina, por fortuna, incluyendo también a pueblos de los Llanos Orientales, el Amazonas, La Guajira o el Magdalena Medio y Bajo, regiones que no figuran en el canon educativo de lo que solemos aprender sobre las culturas prehispánicas. Por otro lado, esa presencia y perdurabilidad de parte de esa cultura material del pasado es lo que nos puede permitir valorarla en su justa dimensión humana, más allá de las volubles consideraciones ideológicas de turno. En los objetos utilitarios que aún se usan en el campo o en las especies vegetales y animales que se consumen en la ciudad está viva la huella de personas semejantes a nosotros, tan hábiles como frágiles en su relación con el medio.

Al hacer la anterior consideración, resulta oportuno preguntarnos: ¿Cómo vivían los hombres y las mujeres que integraban esas primeras sociedades agrarias? La respuesta es que no había una única forma de vida, pues la diversidad cultural, el acceso variable a recursos y las distintas densidades de población imposibilitaban que todas las prácticas productivas, las formas de pensamiento o las instituciones sociales fueran iguales. Desafortunadamente, esos contrastes han influido en la manera como hemos representado ese pasado: primero fueron los conquistadores, para quienes el respeto por una sociedad indígena dependía del parecido que creían tener con ella (jerarquías políticas, diferenciación socioeconómica, vida en ciudades o aldeas) y de los privilegios políticos que podían recibir al someter a un pueblo con aquella imagen; luego vino





la república, con la delirante imaginación del nacionalismo, la cual prefirió recordar culturas que le resultaban mucho más "civilizadas", creyendo, por ejemplo, que los llamados muiscas comandaban un poderoso Estado expansionista.

Ambas imágenes han sido obstáculos considerables para conocer y comprender ese pasado, el cual en la arqueología ha encontrado otro tipo de testimonios, para un provecho menor en la política, pero para dar ideas más enriquecedoras a la posibilidad de valorar el legado productivo de nuestra historia. Aquel proceso se remonta, por lo menos, a los últimos cuatro mil años, cuando, según el profesor Carl Langebaek, existen evidencias arqueológicas del aprovechamiento de plantas como complemento de la caza. En ese proceso tan prolongado en el tiempo, ha quedado el registro de unas sociedades que estuvieron muy lejos de ser estáticas, y que más bien evidencian un aumento de población y de control territorial que se fue haciendo cada vez más amplio, como ocurrió en la Sabana de Bogotá, Boyacá, la Sierra Nevada de Santa Marta o los valles inundables de Córdoba y Sucre.

Además de esos ejemplos, la domesticación del medio fue una experiencia extendida por todo el actual territorio colombiano. El conocimiento del medio natural, luego de milenios de presencia humana, permitió el desarrollo de las más variadas tecnologías de pesca y siembra, al igual que de las prácticas nunca abandonadas de caza y recolección. Con el tiempo se impusieron los beneficios productivos del policultivo, las técnicas de rotación y conocimientos adicionales de la naturaleza para el empleo de abonos y pesticidas. Así

que con aquel desarrollo, ¿qué salió entonces de la tierra? La mayor variedad la dieron los tubérculos: yuca, ñame, batata, arracacha, papa, cubio e hibia; pero también se dieron fríjol, ahuyama, chontaduro, maní, achira, quinua, numerosos árboles frutales, miel de abejas y, por supuesto, el adaptable y sagrado maíz. La dieta prehispánica se complementó con la pesca, la crianza en las zonas altas de cuyes y llamas, junto con la caza regulada de animales de monte como venados, zorros, armadillos, conejos, tortugas y babillas. Una dieta tan completa como balanceada, resultado de la abundancia de recursos de cada región y de la milenaria capacidad de adaptación de no pocas especies foráneas. Al lado de la alimentación se cultivaron fique y algodón, para la elaboración de textiles, y coca, como parte de la farmacopea y las prácticas rituales de las comunidades. También se sembraron vegetales silvestres como el yopo y, en la región amazónica, el yagé.

El primer paso en ese dominio del suelo se dio mediante la ocupación de terrenos con menos necesidades de riego, cerca de ríos caudalosos. En estas primeras sociedades agrícolas la densidad de población era baja, lo cual no las privó de un crecimiento continuo en el tiempo, como ocurrió hasta el siglo XX entre los pueblos indígenas de la región amazónica, dominadores de los ciclos de productividad de las tierras inundables de la zona. Otros pueblos fueron más lejos en la intervención del entorno, diseñando hace dos mil ochocientos años canales navegables e islas cultivables en los ríos Sinú y San Jorge, al noroccidente del país, en una idea que se fue reproduciendo por toda la región durante los siguientes dos milenios. Esa capacidad





de transformar radicalmente el espacio natural continuaría en los siglos siguientes, mediante la construcción de terrazas elevadas en los valles del Magdalena y el Cauca, o, cada vez más lejos de los grandes ríos, mediante el conocimiento y control de los pisos térmicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los altiplanos de Nariño y la cordillera Oriental.

Así fue como durante generaciones este sistema resistió y creció ante sus propias contingencias: el sistema hidráulico del Sinú se fue ampliando a medida que la población aumentaba, el poblamiento de la Sierra Nevada se intensificó al afianzarse el control del territorio costero, mientras que, en el Huila, las terrazas de cultivo se complementaron con canales de riego y desagües que previnieron inundaciones y erosión. De hecho, muchos lugares que durante la dominación española y el siglo XIX se mantuvieron despoblados eran hace mil años territorios con agricultores que proveían de recursos a otras comarcas: el Chocó, el Urabá, La Guajira, el Magdalena Medio o el actual Eje Cafetero. Además, no todo lo que salía de la tierra era para comer, por lo que también se desarrollaría la actividad minera: oro en los valles interandinos y el Pacífico (donde también se extrajo platino), sal en el Caribe y la cordillera Oriental, y, en el occidente de Boyacá, las mismas esmeraldas que han escrito la gloria y la tragedia de sus mineros modernos. Tenemos, por lo tanto, un conjunto de personas que vivieron bajo condiciones de vida adecuadas para su época histórica, nada diferente a la calidad de vida de las sociedades europeas o mediterráneas donde florecieron las ciudades e imperios que tanto exaltan los viejos libros de historia de las civilizaciones.

Sin embargo, y a pesar de esos notables logros materiales, las limitaciones tecnológicas existieron y afectaron muchas veces a las sociedades prehispánicas. El obstáculo más recurrente fue la falta de animales de tiro, esenciales para el desarrollo de formas complejas de transporte y procesamiento de los recursos; otras dificultades tenían que ver con su propio estilo de vida, como el escaso control de enfermedades producidas por el intenso trabajo manual o por la concentración de población en una misma vivienda o aldea. Otro problema mucho más fatal tuvo que ver con contingencias ambientales inesperadas. Por ejemplo, poco después del año 1200, los canales del Sinú fueron abandonados por el acelerado descenso de sus aguas, en una dispersión demográfica que, paradójicamente, evitó la propagación de enfermedades recurrentes entre una población numerosa que se enfrentaba a ciclos climáticos extremos. Una generación después, otra sequía mucho más devastadora pudo haber desertificado a La Guajira, obligando a sus pobladores a rehacer de cero su supervivencia.

Las dificultades, aun así, no imposibilitaban la capacidad de comunicación entre muchos de estos pueblos en un territorio tan extenso. El comercio, por lo tanto, fue una práctica esencial para la vida de estas sociedades, en un esfuerzo de integración económica cuya magnitud no se repitió durante la época colonial, ni mucho menos en las sucesivas crisis económicas de la Colombia del siglo XIX. El ajuar de la tumba de un jefe indígena de la Sabana de Bogotá puede confirmar la dimensión de aquellas redes de intercambio: oro del Alto Magdalena y Antioquia, alucinógenos y cueros de felinos de las llanuras del





oriente, conchas marinas de las costas del norte, plumas de aves y totumas de los bosques de tierras cálidas. La conexión de estas comunidades, aparentemente aisladas por enormes fronteras naturales, se logró mediante eficientes redes de trueque, las cuales propagaron tecnologías, productos agrícolas o afinidades lingüísticas y estéticas a territorios distantes, con el apoyo de redes de caminos cuya eficiencia nunca pudo ser reproducida por los españoles ni por los colombianos.

## CREAR Y PENSAR EN EL MUNDO INDÍGENA

Según el relato tradicional, esos mismos intercambios materiales formaron unidades culturales y políticas dentro de lo que comúnmente llamamos muiscas, taironas, zenúes o quimbayas. Si bien es muy difícil corroborar esa idea, podemos encontrar que, por lo menos, hace quinientos años existían gobernantes de pequeñas localidades que lograban una fuerte cohesión de su comunidad; se trataba de individuos que, al asimilarlos con los jefes indígenas que Cristóbal Colón conoció en las islas del Caribe, hoy reciben el nombre de caciques.

Un rasgo común de estas sociedades agrarias fue la presencia de un líder político o religioso permanente dentro de sus comunidades. Como resultado de la producción de excedentes en la agricultura, las sociedades humanas han pasado a lo largo de la historia por procesos de especialización, es decir que empiezan a aparecer nuevos roles distintos al trabajo de la tierra. Es así como surgen en los pueblos sedentarios hombres o mujeres que se dedican al culto religioso, a la producción de objetos utilitarios

(o a la orfebrería, como ocurrió en los pueblos andinos y costeros), al comercio y a detentar el poder político, a veces de forma independiente o combinando esa labor con los oficios anteriores. Toda sociedad que construye formas de gobierno debe, por lo tanto, legitimar de alguna manera el ejercicio de este. De ahí que entre las ideas que sobre sí mismos y su mundo tenían los indígenas prehispánicos también había formas de ideología política.

El origen de ese ejercicio jerárquico del poder en los señoríos indígenas dependió de la singularidad de cada grupo y cada época. Por ejemplo, entre más intenso fue el intercambio comercial, hay evidencias de un fortalecimiento del liderazgo, dada la alta productividad de las tierras y la necesidad de llevar esos excedentes a otros lugares. Los conquistadores que dejaron testimonios escritos sobre estos pueblos interpretaron la circulación de esas maneras de ser, hacer y ver el mundo como un proceso de expansionismo político; en apoyo a esa idea, el crecimiento demográfico y el deseo de controlar fuentes de recursos a veces derivaron en el sometimiento violento de pueblos vecinos. Si nos atenemos al testimonio de aquellos cronistas españoles, eso habría pasado en Antioquia con la llegada de los llamados quimbayas o también con los indígenas de las tierras cálidas de Cundinamarca y los Llanos, que aparentemente eran sacrificados por orden de los caciques muiscas. En contraste, hubo otras sociedades en las que la abundancia de su producción agrícola y minera las hizo depender mucho menos del intercambio o del expansionismo, como ocurrió en Nariño, o, siglos antes, en las comunidades autónomas y dispersas de lo que llamamos San Agustín.





Lo anterior nos señala la enorme complejidad económica pero también política y social que tuvieron estos grupos humanos. Es decir que en sus relaciones de intercambio, organización y pensamiento se integraron elementos numerosos y diversos. Si bien la jerarquía política fue un fenómeno generalizado, su origen no fue igual en todas partes, por lo que en cada pueblo y época los gobernantes diseñaron estrategias muy distintas para diferenciarse del resto de la población. Generalmente se cree que el liderazgo político lo detentan quienes poseen un mayor poder económico, pero hace dos mil seiscientos años en la cultura San Agustín, por ejemplo, este lugar en la sociedad se reconocía más por motivos estrictamente religiosos, pues el ajuar de las tumbas de los caciques es muy parecido al del resto de la población.

Pero, dando la razón a quienes sospechan orígenes económicos en las formas de control político, también tenemos el caso de lo que pasaba hace mil quinientos años en el Valle de Leyva, en Boyacá. Allí, la arqueología ha notado cómo la acumulación de privilegios y propiedades en las aldeas iba dirigida a la formación de una élite, tal como también ocurrió en la etapa tardía de la cultura de San Agustín un poco después. Hace mil años, en este último lugar, ese proyecto se acentuó mediante la ocupación de las mejores tierras para el cultivo, lo cual terminó por afianzar el lugar que tuvo el control de la economía en la formación de las jerarquías políticas. De hecho, frente a la agricultura, la diversificación de los productos también está relacionada con las dependencias políticas, en la medida en que una sociedad que produjo más cosas requirió

de menos tributos y, por lo tanto, no se preocupó por someter a comunidades vecinas.

Pero no basta con disponer de una población numerosa o de un poder político aparentemente sólido. También fue necesario controlar el espacio físico, el que finalmente alberga esa naturaleza que ha sido intervenida durante milenios. Ante nosotros existe la percepción de áreas naturales poco transformadas, ya que las exclusiones propias de la mentalidad de los conquistadores les dieron más valor histórico a las ciudadelas peruanas o a las pirámides de México y Centroamérica. Sin embargo, y a pesar del acomplejamiento que nos hizo ignorar esa riqueza, allí está la monumentalidad, no solo en los ya mencionados montículos, canales y terrazas para el cultivo, sino también en estatuaria, monolitos y complejos funerarios. De eso hablan sitios como El Infiernito, Tierradentro, la extensa necrópolis de San Agustín y, por supuesto, las intervenciones ambiciosas de la Sierra Nevada, donde en lo que hoy es una selva agreste se levantaban hace quinientos años pequeñas ciudades rodeadas de cultivos e interconectadas por redes de caminos. Muy cerca de esos sorprendentes escenarios, aparecieron aldeas de agricultores que experimentaban su propia evolución social y económica, desarrollándose de acuerdo con su ritmo y sus necesidades.

Pero, de nuevo, la mentalidad colonialista y occidental puede llevar a malentendidos en la comprensión de esa monumentalidad. ¿Fueron estos lugares la sede de poderosos Estados expansionistas? ¿El albergue de sabios recopiladores de avanzados conocimientos religiosos y científicos? Es difícil saberlo,





dadas las nubes de imposiciones ideológicas que han caído durante cinco siglos sobre ese pasado. Para los conquistadores era útil magnificarlo, en su afán de narrar en España la hazaña que significaba derrotar a un monarca poderoso. Luego llegó el nacionalismo moderno, acomplejado y con una idea bastante simple sobre el progreso, el cual deseaba hallar las raíces de sus naciones en ese modelo político imaginario, al cual incluso se le agregó la idea de que también —en ese signo arbitrario de civilización— los muiscas tuvieron escritura, según la invención de un dudoso estudio del siglo XIX.

La realidad que alcanzamos a reconocer, en concordancia con la diversidad que tanto hemos tratado, es que no todos estos pueblos se organizaban igual. Las aldeas, aunque siempre fueron importantes evidencias de desarrollo, en algunos casos no eran necesariamente ejes de control político, sino simples formas de adaptación al medio para una sociedad que vivía mejor en una comunidad extensa. Una situación similar pudo ocurrir con los grandes centros funerarios de San Agustín y Tierradentro. Existieron, eso sí, jerarquías matriarcales como en los yalcones de Timaná que, liderados por la Gaitana, protagonizaron una resistencia a la Conquista tan agresiva como memorable; hubo también fusiones de poderes políticos y religiosos como en el cacicazgo de Sogamoso, igualmente respetado en toda la región muisca; y, como un signo valioso de esa diversidad, hubo alternativas excepcionales como las diarquías que gobernaban en el altiplano nariñense, en respuesta a la misma visión dual de la vida y el mundo que esas culturas representaban en sus objetos artísticos. Esa misma producción de artículos ceremoniales

también trascendió en lo institucional, ya que podemos encontrar, como en la región calima, una jerarquía que controlaba no solo la circulación de alimentos, sino también de sus objetos de oro y cerámica.

Pero la idea de sólidos poderes políticos y económicos concentrados en un grupo social es algo que solo podemos identificar de forma permanente en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el altiplano cundiboyacense, por lo menos al momento de la llegada de los europeos. En el primer caso, no hay de todos modos un modelo único, debido a la enorme diversidad étnica de la región. En el segundo caso, se ha concluido ese poder en la eficiente administración de redes de intercambio cultural, económico y político por medio de los mercados periódicos que se celebraban entre las aldeas, los cuales llegaron hasta sitios tan remotos como el valle del Magdalena, sobre las actuales ciudades de Neiva y Barrancabermeja, cuyo avistamiento sirvió de ruta de encuentro para los conquistadores que arribaron a la región en el siglo XVI. La complejidad de la comunicación y de la especialización se reflejó en la aparición de centros productivos locales capaces de surtir a todas las comunidades muiscas, como ocurría con los salineros de Zipaquirá, los orfebres de Guatavita y los alfareros de Ráquira.

Otro elemento de estudio importante de estas sociedades fue su sistema de pensamiento, reflejado en todas sus expresiones e instituciones. Si bien no puede hablarse de un conjunto homogéneo de ideas, hay una serie de rasgos comunes. El primero fue una visión del universo que establecía una unidad





entre mentalidades y acciones, es decir, una permanente interrelación entre las creencias religiosas y la ideología política junto con la producción, la tecnología y la estética. Por lo tanto, el desarrollo de estos pueblos debemos entenderlo como un proceso en el que se complementan el ser humano, la naturaleza y sus deidades, lo cual no solo se expresó en los pueblos indígenas del pasado, sino también en muchas de las sociedades actuales que resisten a los bruscos cambios de la modernidad. Había entonces un respeto profundo por el medio circundante, mediante la regulación continua de la producción, el consumo y el crecimiento poblacional.

Otra fuente privilegiada para el conocimiento de ese pasado es aquel conjunto de objetos que, por su valor documental y estético, el hombre moderno se ha atrevido a catalogar como producción artística. Allí encontramos la constatación, también general, de que estos pueblos no hacían representaciones literales del contexto. Su imaginería, abundante, diversa y tan difícil de clasificar, nos representa aspectos de su mitología y sus ideas acerca del mundo y su sociedad, con códigos aún en proceso de ser traducidos y de los cuales apenas se conservan en su gran mayoría los usados para fines rituales o funerarios. Cada cultura y periodo, por lo tanto, nos ha dejado visiones únicas del cosmos, como lo atestiguan las representaciones de arquitectura, sexualidad o vida cotidiana en los objetos de la región Tumaco; los instrumentos musicales con un profundo sentido ritual y las tumbas de pozo de las zonas altas de Nariño; los pectorales que representan las deidades astrales de la Sierra

Nevada, o el célebre poporo —aquel recipiente para mezclar y consumir la hoja de coca—, cuya apariencia va desde la imitación de formas de la naturaleza hasta complejas abstracciones geométricas.

Ese mundo de tan variadas manifestaciones emocionales y físicas lo hallamos también presente en caimanes, jaguares, peces o murciélagos que representan conceptos más amplios del cosmos: la dualidad entre la tierra y el agua, los ciclos del tiempo, o atributos animales pretendidos por el ser humano. Por su parte, podemos apreciar esfuerzos complejos de abstracción visual para representar la naturaleza y la sociedad: jerarquías, roles sociales u otras formas de clasificar el contexto a través de la geometría de tejidos, filigranas u ornamentos cerámicos. En visiones más amplias, por medio de lo que nos narran las figuras humanas o las prendas accesorias, encontramos lecturas de los ciclos de vida, desde su concepción hasta su fin. Como adición y en concordancia con ese significado de la vida, muchos de esos objetos tuvieron el uso de ofrendas, negociaciones rituales con la divinidad que se efectuaban en todo ámbito del día a día, ya que no solo han aparecido en tumbas, sino también en campos de cultivo, lagunas, cuevas y el suelo de las viviendas, como ocurrió extensamente en la región muisca.

Esos actos de recreación y renovación del mundo también estuvieron presentes en prácticas que no se convirtieron en objetos tangibles, por lo que se han perdido muchas de las pistas sobre su contenido o significado. A ese lugar pertenecen las desaparecidas expresiones del color en la estatuaria, la pintura corporal, la música, el número incalculable de lenguas





que se hablaban o el sentido preciso de las fiestas, las formas en que se hacía la guerra o en general las ideas, más allá de las descripciones fragmentadas y confusas que dejaron los cronistas españoles. En contraste, nos queda una poderosa persistencia de los usos que los indígenas han dado hasta hoy a la hoja de coca, con el fin de estimular la memoria y el habla en sus rituales, al tiempo que ese consumo durante sus faenas de trabajo les permite disminuir el hambre y el cansancio, lo cual no tiene nada que ver con la cocaína, el alcaloide moderno que el narcotráfico extrae de esa planta.

Así fue como, más allá de las ficciones creadas por la modernidad y el nacionalismo, esta sociedad agraria consolidó en la actual Colombia las condiciones para asegurarse un mundo estable, con todo y sus limitaciones, desigualdades y eventuales episodios de crisis. Por supuesto, todo eso solo podía romperse con una amenaza insospechada y externa: la colonización europea con su irreversible fractura cultural, como también con la miseria que para los pueblos indígenas significó el abandono de redes de intercambio, el olvido de técnicas y productos agrícolas, el cambio de modelos de integración social y, en algunos casos, la urgente adaptación a nuevas formas de producción y supervivencia. Esa tragedia, nos recuerda el profesor José Vicente Rodríguez, indujo en los siglos posteriores la absurda creencia de que antes de la Conquista los indígenas constituían pueblos atrasados y de costumbres torpes y malsanas. La plena recuperación económica y cultural del indígena colombiano es una historia que apenas han escrito las generaciones recientes, al lado de una sociedad mestiza con la que han compartido la

tragedia de cómo volver a aprender a adaptarse tan hábilmente a la naturaleza. Lo retrasada que está esa tarea lo constatamos en las consecuencias que para el campesino colombiano del presente tienen las emergencias naturales y los cambios abruptos en la economía.





**Para seguir aprendiendo**

Para profundizar en la historia prehispánica de la actual Colombia existen, entre varias obras clásicas, *Colombia antes de Colón* (1988) de Armand Labbé e *Introducción al pasado aborigen* (1990) de Luis Duque Gómez, mientras que el desarrollo moderno de los pueblos indígenas puede conocerse en *Herederos del jaguar y la anaconda* (1982) de Jaime Arocha y Nina de Friedemann e *Introducción a la Colombia amerindia* (1987) del ICANH. Por su parte, el legado productivo y cotidiano prehispánico puede examinarse en la extensa *Historia de la cultura material en América Equinoccial* (1993) de Víctor Manuel Patiño. Otras síntesis de fácil acceso sobre el periodo se encuentran en la serie *Arte de la tierra* (1992) del Museo Arqueológico y en el catálogo del Museo del Oro (2008).

De igual forma, la cultura prehispánica más estudiada del país puede profundizarse en la obra de la Universidad Javeriana *Muiscas: Representaciones, cartografías y etnopolíticas* (2005) y *Los muiscas* (2019) de Carl Langebaek, mientras que para conocer los orígenes de las exploraciones del pasado indígena se recomiendan *El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia* (2006) de Clara Isabel Botero y *Arqueología y etnología en Colombia* (2009). Además, en *Caminos precolombinos* (2000), editado por Leonor Herrera, podemos indagar sobre el legado arquitectónico indígena.

También existen algunas piezas audiovisuales que aluden a la memoria indígena en la modernidad, de las cuales se destacan los episodios *El país de los wayúu* de la serie *Yuruparí* (1985) —disponibles en la Biblioteca Luis Ángel Arango— y las aclamadas cintas *El abrazo de la serpiente* (Ciro Guerra, 2015) y *El sendero de la Anaconda* (Alessandro Angulo, 2019).

# 3.

# EL PRIMER CONFLICTO CON LA GLOBALIZACIÓN (1499-1621)

En 1574 dos hermanos ejercían la autoridad política y económica del pueblo de Turmequé, un viejo cacicazgo muisca. Uno era el encomendero Pedro de Torres, heredero de las tierras recibidas por su padre tras haber participado en la conquista de este lugar del mundo para el rey de la lejana Europa, donde nació mientras su padre viajaba en barco a América. El otro era Diego de Torres, hijo de una princesa indígena, sobrino del cacique de la comarca y, siguiendo las leyes prehispánicas, proclamado cómo su sucesor por los habitantes del pueblo. Entre ambos había un conflicto que llevó a años de pleitos para que las nuevas instituciones del país reconocieran su autoridad, llegando el caso incluso a la corte del rey de España. Los hermanos Torres resumían un suceso externo y fortuito que transformó radicalmente la historia que durante los dos mil años anteriores se había forjado en el actual territorio colombiano, cuando diversas oleadas de invasores europeos ocuparon,

mediante la fuerza, las tierras anteriormente dominadas por los agricultores indígenas.

En 1610, pasados setenta y tres años del primer contacto entre los indígenas de Turmequé y los invasores españoles, un funcionario del Gobierno colonial describió la complejidad de ese mundo nuevo: sobre un antiguo asentamiento de aldeas ahora existía la ciudad de Tunja, cuya actividad política y económica era controlada por los ocupantes foráneos. Allí, la vocación agraria de los indígenas persistía, a pesar de que su lengua y su credo ya eran muy distintos a los de sus abuelos, además de que la fractura de sus antiguos mercados los había empobrecido; sin embargo, la invasión europea no era un éxito consumado, pues su ciudad estaba doblemente asediada, en conflicto con indígenas de otras etnias que amenazaban la seguridad del nuevo sistema político desde el río Magdalena y los Llanos Orientales.

Once años después, en la costa Caribe, otra realidad cultural demostraba el cambio drástico que acababa de tener la historia. En 1621 un hombre de la lejana Guinea, territorio localizado al otro lado del océano Atlántico, era ahorcado por las autoridades de Cartagena, una ciudad que apenas hace un siglo era una bahía de pescadores con color de piel, lengua, creencias y actividades económicas que en nada se parecían a los de sus actuales habitantes. Al ejecutado se le acusaba de liderar los alzamientos que, durante más de veinte años, habían emprendido en su provincia hombres y mujeres que llegaban allí por millares degradados a ser la mercancía de un poderoso mercado mundial de esclavos…





¿Qué ha pasado en este territorio para que la vida en 1574, 1610 o 1621 sea tan distinta a la de un siglo antes? América, el extenso hemisferio que incluye a Tunja y Cartagena, se ha incorporado por primera vez a una economía global que erigió como su centro a los países de Europa occidental, de donde venían los invasores. Para ese momento una serie de condiciones demográficas y comerciales incentivaron la exploración del resto del mundo por parte de los poderes políticos y económicos de ese lejano continente, provocando una larga sucesión de alteraciones en las sociedades americanas y africanas que encontraron a su paso, a las que intentaron homogeneizar, a pesar de su diversidad, y desarticular, a pesar de su aparente prosperidad.

Así transcurrió la historia de un conflicto de grandes proporciones y muy larga duración, el cual involucró a la mitad del planeta donde se encuentra el actual territorio colombiano, cambiando para siempre su cultura y sus habitantes, y decidiendo así buena parte de su historia durante los cinco siglos siguientes.

## MANUAL PARA INVADIR AMÉRICA

Hoy el mundo tiende a convertirse en una sola comunidad económica, donde las decisiones que una sociedad tome acerca de su productividad pueden repercutir en otro punto remoto del planeta. Muchas de las cosas que consumimos se han fabricado en lugares insospechados, obedeciendo a una constante circulación de mercancías, servicios, tecnologías y capitales en un solo mercado mundial. Ese presente tiene un pasado

remoto en las casualidades que llevaron a Europa occidental a imponer su cultura, sus poderes políticos y su economía alrededor del mundo en lugares como la actual Colombia. Lo que ahora es este país, así, se convirtió en una fuente de recursos que empezaron a sostener ese naciente sistema económico, una transformación ocurrida en medio de la violencia, pero también de una sucesiva integración cultural, la cual desplazó las formas de vida de muchas de las sociedades agrarias que habitaban el país hace quinientos años.

Todo comenzó en el siglo XV, durante la última de las sucesivas crisis que experimentaban la agricultura y el comercio en Europa occidental. Una sociedad históricamente aislada, dependiente de los controles que árabes y ahora turcos tenían sobre la economía del continente, veía cómo otra vez disminuía su población, se reducían sus mercados y se restringía la producción artesanal en sus ciudades. Sin embargo, por entonces surgían agentes de cambio que hicieron que esa crisis no fuera una más: la dinamización de la vida urbana, el desarrollo científico y la revolución tecnológica de su tiempo les permitieron a los europeos un despegue comercial y la posibilidad de explorar nuevas rutas de navegación. Fue así como los portugueses exploraron las costas africanas y las flotas financiadas por España exploraron América.

Esa España era el resultado de la integración de dos estados sostenidos por procesos históricos esenciales en la forma como se asumió su incursión en América: Castilla, un territorio poblado por una enorme masa de campesinos y artesanos sin empleo y donde la Iglesia poseía un amplio poder político, resultado





de siglos de luchas entre cristianos y musulmanes; y a su lado estaba Aragón, potencia comercial y artesanal del Mediterráneo que veía cerrados sus mercados por la expansión del Imperio otomano. Ambas eran formaciones políticas derivadas de la guerra, donde el poder político cada vez era más centralizado, y Castilla ya había explorado en las islas Canarias la posibilidad de conquistar otros territorios y transformar radicalmente la cultura de sus habitantes. Con esos antecedentes llegaba Cristóbal Colón a las Antillas en 1492, imitado poco después por otros navegantes que recorrieron las costas continentales de América. Esas exploraciones afirmaban un modelo de ocupación del territorio en el que un grupo cada vez más grande de españoles asumía el riesgo de viajar a un continente desconocido, dominar a su población y explotar sus recursos. Detrás suyo, en medio de un prolongado conflicto con esos aventureros, llegaban los funcionarios del rey a afirmar jurídicamente esa ocupación.

Desde 1499, cuando vieron las playas de La Guajira, esos navegantes explorarían la actual Colombia, a pesar de no ocupar formalmente el territorio. Las expediciones comandadas por Rodrigo de Bastidas fueron un ejemplo de esa táctica invasora: la costa era un lugar de asalto, donde se saqueaban productos agrícolas y algunos indígenas eran esclavizados para surtir los mercados de la isla de Santo Domingo, al otro lado del Caribe. Diez años después, la ambición de nuevas expediciones y el cierre de las fuentes de enriquecimiento en las Antillas cambiaron la estrategia y, desde entonces, Alonso de Ojeda lideraba campañas de ocupación violenta de las aldeas indígenas, como aquella en la que los nativos de Turbaco se defendieron con

flechas envenenadas y mataron a los españoles comandados por el cartógrafo Juan de la Cosa.

Desde 1510 se establecieron los primeros asentamientos europeos en el actual territorio colombiano. Ese año cerca de Unguía, en el Urabá chocoano, Vasco Núñez de Balboa fundó el que pretendió ser el centro de ocupación más importante de todos: Santa María la Antigua del Darién. Era el primer experimento de los conquistadores para ocupar Sudamérica: un asentamiento estable con pretensiones de convertirse en una ciudad, es decir, un espacio formal de gobierno algunas veces en conflicto con la población indígena, otras con la capacidad de ofrecer un intercambio amistoso. Pero una década después Santa María la Antigua fue abandonada en medio de la comprensible resistencia indígena, la difícil productividad de un espacio en conflicto y la rivalidad por el poder político entre los líderes de las expediciones. Para 1520, con el hallazgo del océano Pacífico, la fundación de Ciudad de Panamá y la identificación de que América era mucho más extensa, los conquistadores se aventuraron a explorar el interior del continente. Las Antillas, hasta ese momento, eran ocupadas por una comunidad que redujo y esclavizó a la población nativa, pero ahora los europeos que seguían llegando debían emprender una estrategia muy distinta de ocupación. Como consecuencia de lo anterior aparecieron en escena personajes como Cortés en México, Pizarro en Perú y los múltiples nombres que acompañan los relatos tradicionales de la conquista de la actual Colombia: Pedro de Heredia, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federmán, Gonzalo Jiménez de Quesada, Jorge Robledo...





Los anteriores eran líderes de grupos de hombres que emprendían juntos una misma empresa, pero con desigualdad de resultados, pues no todos recibían la misma recompensa, lo cual obligaba a los de menor rango a liderar sus propias expediciones en otros lugares. Cada conquistador era así, la prometida cabeza de una nueva estructura social, pero que discriminaba hasta a sus semejantes, al tiempo que pretendía la explotación del suelo y las gentes de América. Pero mientras el europeo sometía al americano mediante la fuerza, también necesitaba de él para sobrevivir en un proyecto tan costoso como peligroso, de sus alimentos, sus caminos, su arquitectura y su mano de obra. Los conquistadores en general eran jóvenes, de variados orígenes profesionales y sociales, pues en Europa habían sido unos ricos y otros pobres, de lo cual dependía su rango en una expedición nacida de la inversión que muchos de ellos hacían de su propio dinero. Con la promesa de enriquecerse estaban dispuestos a correr los riesgos y cometer la violencia que consideraran necesaria.

Eran muy pocos en número, comparados con la población indígena, lo cual hizo creer durante siglos que su éxito había sido una admirable hazaña militar. No, los europeos consumaron su invasión —sin lograr nunca ocupar todo el territorio que aparecía en sus mapas— porque al lado de su hueste venía un grupo aún más nutrido de acompañantes: esclavos negros, indígenas forasteros anteriormente sometidos e incluso indígenas locales a los cuales se les prometían alianzas para enfrentar a un poderoso enemigo común. La Conquista también transcurrió así, como una prolongada guerra interna

entre sociedades indígenas en la que uno de los bandos tenía la ventaja de ser reforzado con una hábil comandancia de invasores extranjeros. Así fue como, por ejemplo, los caciques de Suba y Chía, aliados con los españoles, acompañaron a Jiménez de Quesada en su guerra contra los caciques de Bogotá, de quienes eran dos insatisfechos subordinados. Pero poco después, en medio del mismo conflicto, los indígenas de Bogotá y los europeos viajaron juntos al valle del río Magdalena para derrotar a los vecinos panches. Las ideas de los siglos XIX y XX —especialmente el nacionalismo y la unificación política de los pueblos en Estados fuertes— nos dificultan entender por qué los indígenas habrían peleado entre sí favoreciendo a un invasor extranjero. Pero eso es comprensible si miramos la realidad del mundo prehispánico: un conjunto diverso de pueblos y formas de organización política y social que en muchos aspectos rivalizaban entre sí. Para un tairona de la Sierra Nevada, un indígena del Sinú o un guna del Urabá podían ser tan extraños a su cultura como lo era un español.

Mientras tanto, otro factor insospechado incidió en el éxito rápido de la Conquista: aislados durante milenios del resto del mundo, los indígenas americanos se convirtieron en blanco fácil de una involuntaria guerra ecológica en la que los europeos llegaron portando enfermedades imposibles de contrarrestar por parte de las defensas naturales de la población americana. Gracias al impacto inesperado de la viruela, el sarampión, la malaria y la gripa, la Conquista pudo ser un éxito generalizado. De cuatro millones de indígenas que pudieron habitar la actual Colombia en 1540, solo quedaban un poco más de un millón





veinte años después, disminuyéndose esta cifra aún más en las epidemias de tifus que llegaron en el siglo XVII. Solo hasta 1905 el país volvería a registrar un número de habitantes parecido.

A pesar de la catástrofe que significó la Conquista para el diverso mundo cultural indígena, este no fue un proceso rápido ni pleno, pues las guerras se prolongaron por varias generaciones e incluso siglos, mientras que las regiones periféricas del continente nunca se sometieron. Aunque homogeneizada por la lectura que hicieron los propios conquistadores de su historia, la Conquista fue una suma de intereses de invasores e invadidos en la que ambos grupos debieron desarrollar múltiples estrategias de adaptación y aprovechamiento de una nueva realidad política, económica y social. Una realidad en la que, nominalmente, este territorio se convirtió en la pretendida propiedad de un rey lejano, cuya legalidad derivaba, sin embargo, de la habilidad que unos invasores privados tuvieron para eliminar a la población local o negociar políticamente con ella. La idea de un mundo feliz que fue destruido por la sevicia de unos invasores violentos es igual de falsa a la imagen de una sociedad indígena ruda e inculta, salvada por unos héroes civilizadores de Europa.

## El mundo nuevo del Nuevo Mundo

Los viajes emprendidos por los europeos en América rompieron las creencias que durante siglos tuvo su civilización sobre la naturaleza y sobre el mundo más allá de sus fronteras. Con la invasión, Europa occidental tuvo el privilegio de reconocer una diversidad que le permitió replantear sus ideas, controlar

recursos esenciales para su economía y liderar una sólida hegemonía cultural, mercantil y política sobre el resto del mundo durante los siguientes siglos. Sin embargo, la complejidad de ese proceso fue más allá de una lucha de vencedores y vencidos, pues desde entonces nuestro continente aportaría al resto del mundo nuevas prácticas productivas y nuevos hábitos alimenticios, los cuales pusieron fin a las crisis económicas y alimentarias tan frecuentes en muchas sociedades del otro lado del mar.

En América, como evidencia de ese cambio cultural, la colonización era ley en los territorios donde cesaba la violencia de los conquistadores. Mediante el establecimiento de asentamientos urbanos permanentes, el territorio invadido se poblaba con europeos, indígenas —locales y foráneos— y negros —esclavizados y algunos otros libres—. La existencia de una ciudad afirmaba el nuevo poder político y ofrecía seguridad a los conquistadores, precisamente, por la certeza de que su proyecto no se había consumado. Por eso se fundaron ciudades sobre espacios despoblados o antiguos asentamientos prehispánicos, en la costa y en el interior, sobre arterias fluviales o en lo alto de las montañas… decisiones necesarias para dispersar y multiplicar al invasor. Primero fue Santa Marta en 1525, punto inicial de incursión de los conquistadores por el río Magdalena, quienes llegaron buscando las riquezas que otros españoles traían de más al sur, en el Perú. Luego apareció Cartagena (1533) en la barrera natural de una bahía y cercana al istmo de Panamá, condiciones ideales para formar un puerto próspero. Los que venían del sur también fundaban ciudades en el camino, como Popayán (1535) y Cali (1536), creando una hábil jerarquía de





asentamientos en los que también se poblaban centros urbanos más pequeños en las zonas de frontera, como Pasto, Anserma, Neiva y, años después, Cartago, Santa Fe de Antioquia y Buga. Siguiendo ese mismo modelo, en 1539 aparecieron Bogotá, Tunja y Vélez, desde donde partieron varios de los primeros residentes de Mariquita, Honda, Ibagué, Pamplona y hasta la población venezolana de San Cristóbal. En total, recuerda el profesor Fabio Zambrano, noventa y tres de los mil ciento veintidós municipios de la actual Colombia ya existían en el siglo XVI, resultado de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de toda América y quizá de la historia humana.

Esas ciudades fueron espacios que aspiraban a la autosuficiencia socioeconómica, ejes alrededor de los cuales se nutrían las demás actividades económicas: los oficios artesanales tan necesarios en urbes cuya construcción física tomó varias generaciones, al igual que el comercio, el abastecimiento de las propiedades rurales o, para mal de los oprimidos, el tráfico de esclavos. La ciudad se volvió un polo de crecimiento social, político y económico, especialmente para una nueva élite de conquistadores y sus descendientes, que mediante el reparto de lotes y tierras recibían el premio a años de expediciones peligrosas. Pero también se trataba, en muchas ocasiones, de una élite que basaba su lugar en la sociedad en su imposición violenta y en su capacidad de control social sobre los vencidos, a través de un ejercicio de poder que llegó a extenderse en el país casi hasta el presente.

Así, en lo que Jiménez de Quesada bautizó como Nuevo Reino de Granada, se impondría una relación tensa entre

la nueva élite y el Estado, pues con la colonización llegaron también funcionarios del rey a implantar una autoridad cuya legitimidad era permanentemente puesta en duda por unos conquistadores que creían justa su violencia al haber sido los forjadores de ese imperio, como ocurrió con los alzamientos de Álvaro de Oyón en 1553 y Lope de Aguirre en 1561. Era una pelea perdida, pues a pesar del carácter privado de la Conquista, toda la estructura política de esta empresa terminaba siendo dirigida por el Estado: un Consejo de Indias que, desde la propia corte del rey, administraba el gobierno de todas las colonias en América; una Casa de Contratación que, desde Sevilla, autorizaba el comercio entre España y sus colonias para garantizar así su control de la economía colonial. También existía la Real Audiencia, el corazón local de la administración colonial, como máxima autoridad administrativa y judicial, la cual para la Nueva Granada se decidió instalar en el centro del país, muy lejos del mar, por ser la región con más indígenas y, por lo tanto, más tributos, siendo elegida en 1550 Santafé de Bogotá, pues, a diferencia de Tunja, esta ciudad poseía más y mejores caminos para llegar al río Magdalena.

Mientras se afirmaban las instituciones del rey, trascurría una invasión cultural que tomaría siglos: la conversión de los nativos al cristianismo. La evangelización no solo se trataba de una imposición que Europa occidental hacía de sus ideologías en América, sino que también logró ser la justificación moral que el Imperio encontró para contrarrestar el debate que desde entonces suscitaba la crueldad de la Conquista. Fue así como detrás de una hueste ya numerosa de conquistadores, sirvientes y aliados





indígenas, también venían sacerdotes, amparados en las leyes que prohibían esclavizar nativos y obligaban a enseñarles la doctrina cristiana. También se apoyaban en el Patronato, el acuerdo por el cual el papa entregaba al rey español la administración de la Iglesia en América. Esta presencia resultó clave en la afirmación del dominio cultural de los invasores mediante el bautizo de indígenas, la configuración de la cotidianidad de ciudades y pueblos alrededor de los templos católicos, el control religioso de la vida social e intelectual de las nacientes colonias y el poder alcanzado por las órdenes religiosas que asumieron esta tarea: dominicos, franciscanos, agustinos y, desde el siglo XVII, jesuitas. Las formas predominantes de asistencia social, educación y expresiones artísticas serían desde entonces una imposición de estas comunidades, más allá de que las prácticas tradicionales de los indígenas se negaron a desaparecer en las ciudades, durante décadas, y en las zonas de frontera, durante siglos.

Aquella invasión cultural, política y económica emprendida por los conquistadores, reiteramos, fue resultado de la formación de la primera economía global, una revolución que se extendió por medio mundo con un propósito: el control que la monarquía española quería tener sobre los recursos agrícolas y mineros descubiertos en América. En el caso de la Nueva Granada, los principales productos de inserción en el nuevo sistema fueron el oro y la plata que los indígenas usaban para su vida social y religiosa, y que circulaban entre las más diversas regiones, ahora exportados a Europa. Durante la etapa temprana de la Conquista, estos metales se extrajeron mediante el saqueo de los tesoros indígenas, pero al crearse el sistema colonial y al ser

destruidos los mercados prehispánicos, fue necesario promover la extracción de oro en ríos y minas, empleando a la fuerza a nativos y luego a población esclavizada de África.

Otro elemento importante de esta nueva economía fue la agricultura, debido al valor que tuvo para los españoles la propiedad de la tierra, al ser esta la fuente para abastecer de comida a la población. Los conquistadores que llegaron a nuestro país tomaron el control de zonas rurales, donde se formaron las primeras haciendas, también utilizando como trabajadores a indígenas y esclavos. El trabajo colonial de la tierra, se ha solido enseñar, se expresó mediante diferentes instituciones: una fue la encomienda, donde un grupo indígena era obligado a trabajar para un español —el encomendero— que lo recibía en recompensa por su participación en la Conquista, a cambio de no separarlo y garantizar su conversión al catolicismo; la mita, ya practicada en los actuales Ecuador y Perú por el Imperio inca, consistía en que grupos de indígenas eran desplazados a trabajar en haciendas, minas o ciudades, a manera de tributo. Con el debilitamiento del poder de los antiguos conquistadores, estas dos formas de trabajo desaparecerían en beneficio de las reducciones y resguardos, pueblos en los que se agrupaban las comunidades indígenas para tributar directamente al rey, pero también para facilitar su control por parte de las autoridades. Por su parte, el intercambio cultural abrió paso a espacios sociales y económicos mestizos, en los que los españoles eran una minoría numérica.

El régimen colonial también controlaba la naciente economía mediante el cobro de impuestos al comercio, al transporte





y a las actividades de la Iglesia, los puertos y las minas. También fue importante el control de algunas actividades agrícolas, con el monopolio de la explotación y el comercio de la sal, el tabaco y el aguardiente. El Estado, si bien nunca fue capaz de someter a toda la población y mucho menos a todo el territorio que pretendía, así lograba imponerse sobre la nueva realidad que habían dejado los conquistadores.

Por último, es necesario hablar del lugar de la esclavitud y su impacto en este conflicto. El descenso de la población indígena coincidió con el hallazgo por parte de los españoles de los yacimientos mineros de oro, especialmente en Antioquia, los cuales requerían de mano de obra para su explotación. Las prohibiciones recurrentes de esclavizar a los indígenas llevaron a los españoles a generalizar una práctica que entonces se limitaba a los comerciantes del Mediterráneo: la esclavización de hombres y mujeres provenientes de África occidental. Bajo este sistema, cientos de miles de africanos fueron capturados en los territorios de África occidental y trasladados a puertos controlados por flotas europeas: el golfo de Benín, dominado por holandeses; los ríos de Guinea y la isla de Goré, en el actual Senegal, de control español, y Santo Tomé, Angola y el valle del Congo, donde dominaban los esclavistas portugueses.

Con el crecimiento de la esclavitud, la historia de Colombia también pasaría desde entonces por África, cuestión que se incrementó aún más desde 1580, con la anexión de Portugal a la Corona española y la consecuente incorporación del comercio negrero controlado por sus navegantes. Cartagena se convertiría así en el centro mundial de esta práctica, recibiendo

en el siglo XVII cerca de dos mil africanos esclavizados al año. De Cartagena salían al resto del país para ser vendidos en las haciendas del Cauca y el Caribe, en las minas de Antioquia, Mariquita y el Chocó, y en el servicio doméstico de todas las ciudades. Con la esclavitud también existió la posibilidad de que los propietarios de esclavos les otorgaran la libertad, aunque a la mayoría de las personas liberadas por ese sistema se les prohibiera desplazarse a otras ciudades o provincias. Esta situación dio lugar a que con frecuencia la población esclavizada se rebelara en busca de la libertad.

Así fue como en 1529 sucedió la primera fuga de esclavos en la recién fundada Santa Marta, y siete años después ocurrieron los alzamientos en el valle del Sinú, razón por la que, desde 1540, se dictaron en Cartagena instrucciones sobre cómo contener a los cimarrones, nombre dado al ganado fugitivo y ahora extendido a los seres humanos que renunciaban a su esclavitud. Los cimarrones, al empezar el siglo XVII, fueron un tema frecuente de preocupación para las autoridades, pues para entonces asaltaban las haciendas del río Magdalena, las minas antioqueñas o los caminos de Cali y Tunja. Los pueblos fundados por ellos mismos recibieron en la Nueva Granada el nombre de "palenques", debido a que estaban defendidos por cercas de palo.

Uno de los líderes de esa rebeldía fue Benkos Biohó, un hombre que en 1599 emprendió con éxito su cuarto intento de fuga, escapó con su familia y otros esclavos hasta cercanías de Tolú, combatió las expediciones armadas por los esclavistas e inspiró a otros africanos a seguirse fugando y a fundar nuevos





palenques. El más célebre de todos, San Basilio, sobrevive hasta hoy como un recuerdo de esa lucha por la libertad y un poderoso polo de la diversidad cultural de la actual Colombia. La incapacidad de los españoles para derrotar a los "apalencados" los obligó a firmar la paz en 1613, aceptar la libertad de todos los fugitivos y acordar que sus poblaciones no podían recibir a más cimarrones.

Aprovechando que el acuerdo también le permitía ingresar libremente a Cartagena, Benkos fue apresado bajo el pretexto de haber reñido con la guardia de la ciudad. El gobernador García Girón lo condenó a morir ahorcado en 1621, acontecimiento que refleja las tensiones y la fragilidad del sistema de dominación política y económica que había sido impuesto por los españoles. El hecho ocurrió apenas seis años después de que el presidente Juan de Borja derrotara a los pijaos de Coyaima y Natagaima comandados por el cacique Calarcá, en la misma época en que los indígenas yariguíes hacían casi imposible el tránsito de embarcaciones por el Magdalena Medio. Y poco antes, recordemos, un cronista anónimo describía a Tunja como una ciudad en permanente asedio por otros pueblos indígenas. Definitivamente otro mundo se había forjado en una Nueva Granada que, entre la violencia y la paz, estaba siendo incorporada a la economía global.

**Para seguir aprendiendo**

Por ser un debate que aún despierta pasiones en nuestra cultura política, la Conquista es un tema recurrente en la literatura y la historia. Un ensayo sobre su trasfondo político y filosófico es *Legitimidad y sujeción* (1993) de Guido Barona. Por su parte, en *Los siete mitos de la Conquista* (2004) de Matthew Restall puede estudiarse su complejidad histórica.

Un clásico recomendado sobre la Conquista es *El establecimiento de la dominación española* (1978) de Jorge Orlando Melo, al igual que monografías como *La expedición de Sebastián de Belalcázar* (1992), *La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada* (1995), *Tierra firme* (2011), editada por Paolo Vignolo y Virgilio Becerra, y *El conquistador conquistado* (2016) de Marta Herrera y José Ignacio Avellaneda.

El proyecto urbanizador puede estudiarse en *Ciudad y territorio* (1993) de Fabio Zambrano y *La ciudad de los conquistadores* (2012) de Germán Mejía, mientras que *Tiempos para rezar, tiempos para trabajar* (2001) de Mercedes López aborda la evangelización. La situación indígena tras la Conquista puede abordarse en la obra colectiva *Los muiscas en los siglos XVI y XVII* (2008) y en *Costumbres en disputa* (2015) de Santiago Muñoz. Por su parte, sobre el arribo de las comunidades negras se recomiendan el tomo VI de la *Geografía humana de Colombia* (1998) y *Genealogía de la identidad cultural palenquera* (2014) de Rubén Hernández Cassiani.

Las obras audiovisuales sobre el tema son escasas en Colombia, sin embargo, se recomienda la serie española *Conquistadores: Adventum* (Movistar Plus, 2017), mientras que los choques culturales derivados de la Conquista se aprecian en la serie clásica *Los pecados de Inés de Hinojosa* (RTI, 1988) —disponible en RTVCPlay— y el largometraje documental *Del Palenque de San Basilio* (Erwin Göggel, 2003).



# 4.

# La primera idea de país (1550-1810)

En 1757 fray Juan de Santa Gertrudis, un sacerdote nacido en la isla mediterránea de Mallorca, fue enviado como misionero a la Nueva Granada. Durante los nueve años siguientes recorrió el país por encargo del colegio franciscano de Popayán, atravesando el sur andino, la costa pacífica y el borde de la selva amazónica, donde realizó la mayor parte de su obra religiosa. Su experiencia no solo se limitó a la labor pastoral, pues también se extendió a reconocer las características de la sociedad, las instituciones, la economía y los recursos del país visitado.

Fray Juan desembarcó con otros misioneros en una Cartagena que para entonces dominaba el comercio esclavista del Caribe y, vía España, conectaba a este país con el resto del mundo. Visitó la frontera mestiza de Mahates, cerca de donde tenían sus casas los descendientes de los esclavos fugitivos que ciento cincuenta años atrás protagonizaron una memorable resistencia. La vida comercial del reino la pudo conocer en

Mompox y en Honda, mientras que la complejidad social de la economía agraria la descubrió en su paso por Pasto y Tunja. Para el gusto de disciplinas científicas que no existían en su época, fue el primero en dejar descripciones escritas de los vestigios arqueológicos de las culturas Tumaco y San Agustín, además de que tuvo tiempo para narrar las costumbres de los indígenas del Caquetá y las comunidades negras del Pacífico. A su paso también encontró ciudades y villas dominadas por criollos, pueblos de indígenas desarrollándose y algunos otros abandonados, mientras intentaba alentar el comercio de sus habitantes a costa de conflictos con las autoridades religiosas. Todo esto pasaba mientras él mismo establecía y administraba un pequeño poblado en el Putumayo para asegurarse de que los nativos de ese lugar remoto del mundo no olvidaran que hacían parte de la cristiandad. Esas vivencias en América del fraile Santa Gertrudis, que también incluyen viajes hasta Quito y Lima, se pueden ver en su extensa obra *Maravillas de la naturaleza,* una colección de libros que narran los conflictos, las diversidades y los miedos de la sociedad neogranadina colonial por parte de un juicioso testigo.

Todo eso que maravillaba al sacerdote mallorquín integraba la realidad administrativa, económica y cultural que acabaría dándole forma a lo que hoy conocemos como Colombia. Se trataba de un estado de cosas muy extraño para el observador europeo, pero, en fin, era una realidad enormemente funcional para el establecimiento del dominio cultural y geopolítico que los españoles habían forjado dos siglos atrás. Era la Nueva Granada, un territorio delimitado por unas fronteras administrativas





creadas arbitrariamente por la Corona española en el siglo XVI, cuyos habitantes se vieron en la necesidad de integrarse política y productivamente por la fuerza de las circunstancias. Los alcances de esa integración constituirían la primera idea de país, de una sociedad cuya organización era imaginada bajo la tutela de un gobierno y una economía comunes.

Eso parecía ser la Nueva Granada que imaginó la Corona española al establecer sus límites y su sistema de gobierno entre los siglos XVI y XVIII. Se trataba, eso sí, de un territorio muy extenso, habitado por sociedades muy diferentes entre sí, caracterizadas por su propia segregación social, pero, a pesar de su aislamiento y sus ineludibles diferencias regionales y culturales, integradas por el hecho de que si se aislaban arriesgaban su supervivencia. Y a un observador proveniente de Europa, como lo era Santa Gertrudis, la Nueva Granada también le parecía un solo país homogéneo, compuesto por un conjunto de muchas cosas que le eran ajenas.

Era, por supuesto, un país de papel, que se establecía como tal para satisfacer los propósitos económicos de unos cuantos; pero esa idea, sin embargo, fue el germen de los límites (políticos, pero también culturales) de lo que hoy consideramos como Colombia. Una idea de país cimentada sobre las desigualdades de los pueblos que poco antes habían chocado violentamente por efecto de la Conquista, pero que en medio de esa situación debían emprender sus propias formas de subsistencia, sus propias estrategias de organización política y sus propias maneras de habitar y crear en medio de una diversidad cultural que sus élites ignoraban o negaban. Fue llamado Nuevo Reino

de Granada, con lo cual se extendió a casi todo el territorio el nombre de las tierras del centro del país, como si se estuviera subrayando el papel rector de la capital en la economía y la política, al tiempo que eso de "Nueva Granada" evocaba la dependencia de España, marca impuesta de forma inequívoca con la denominación de "Reino", en alusión al gobierno que sobre el territorio ejercía una monarquía con sede al otro lado del océano Atlántico. Así era y así funcionaba aquel país.

## Producir y gobernar en la Nueva Granada

El violento choque cultural de la Conquista tuvo como consecuencia la inserción de esta parte del mundo en una naciente economía global. Esa cuestión haría que la economía del territorio girara alrededor de las exigencias de un mercado internacional que aquí controlaba el Imperio español. Buscando su lugar en esa realidad, la Nueva Granada se convirtió en el principal productor de oro del continente, lo cual hizo de este metal el centro de la economía colonial. El mismo oro que, por su valor simbólico, era producido y consumido ampliamente por las sociedades prehispánicas para usos rituales ahora se convertía en un producto con otro valor, atesorado como una unidad de intercambio monetario cuya comercialización en el mundo debía ser controlada por los españoles.

La economía del oro generó nuevas dinámicas dentro de la sociedad colonial. La búsqueda de yacimientos mineros motivaría nuevas formas de colonización y apertura de fronteras, mientras que las características de cada yacimiento incentivaron





nuevos procesos de extracción, a veces mediante técnicas artesanales que perduraron por siglos o por medio de la innovación tecnológica. Por su parte, la migración de empresarios y trabajadores a las minas abrió paso a nuevos procesos laborales y sociales alrededor de esta economía, además de la necesidad de establecer un mercado de alimentos para abastecer a estas nacientes comunidades, algunas sustentadas en la esclavitud, otras en la cada vez más desprestigiada explotación de indígenas y, en una práctica que fue creciendo con el tiempo, a comunidades de trabajadores a quienes se les pagaba un salario.

Pero, a pesar de la aparente prosperidad que podía dar un producto tan atesorado por los europeos, la riqueza de este sector de la economía nunca fue constante. Al empezar el siglo XVII la expansión de las minas lograba su punto más alto, especialmente en las recién exploradas minas antioqueñas. Sin embargo, los cien años posteriores significaron un serio declive, del cual solo se recuperarían los mineros en el siglo XVIII. Entre un momento y otro, las minas de Cartago y el Alto Magdalena perdieron importancia hasta llegar a ser insignificantes para el grueso de las exportaciones, hecho que abrió paso a los yacimientos mineros del Chocó y el suroccidente. Solo Antioquia sería un productor minero de importancia durante toda la Colonia.

Además del lugar que tuvo la extracción de oro en la conexión de la Nueva Granada con la economía global, la tierra y su explotación fueron otro renglón importante. Lo fueron por necesidad de subsistencia, pues la nueva sociedad debía rehacer una economía indígena completamente destruida por la

Conquista, pero lo fueron también por razones políticas, pues la tierra se convirtió para los conquistadores y sus herederos en la fuente principal de sus relaciones de poder y privilegio. Controlar la explotación de la tierra era estar en la cima de una pirámide en la que la población indígena, esclava o mestiza llegaba en condición de mano de obra a las nacientes haciendas. Los españoles y sus descendientes nacidos en América se convirtieron así en los principales propietarios de un mercado de tierras que además era controlado por el Gobierno de cada ciudad y provincia establecidas. En esta relación de poderes políticos y económicos, se sintetizaba el pulso entre los migrantes europeos que hicieron la base material del Imperio y un Estado que imponía las instituciones que regulaban las formas de convivir en él. La tenencia de la tierra, eso sí, no se convirtió en un proceso inalterado durante la época colonial. El crecimiento de la población y el aumento del control del Gobierno sobre el mercado de tierras incidieron en que estas no fueran dominadas por unas pocas familias. Al finalizar la Colonia había una élite blanca, sí, pero mucho más numerosa que en el siglo XVI y de diversos orígenes. Por su parte, el crecimiento de la población mestiza y las transformaciones de la población indígena hicieron que, con excepción de la esclavitud, en el siglo XVIII desapareciera cualquier forma de trabajo forzoso contra la población libre. Así se desarrolló el sistema en el que una extensa población campesina surtía de alimentos a ciudades, pueblos y minas a lo largo de la Nueva Granada.

Otro renglón fundamental para la Nueva Granada fue el comercio, al ser la actividad que integraba a la sociedad colonial





con la economía global que la había formado. Si la tierra se convirtió en un principio en la mayor fuente de prestigio social, el comercio acabaría por erigirse en la actividad que más posibilidades daba para enriquecerse. Por esta razón, muchos terratenientes y empresarios mineros, al igual que no pocos funcionarios de la Corona, también se desempeñaron como comerciantes. En los puertos marítimos y fluviales interactuaban españoles ricos que ejercían como "mercaderes de la carrera" —empresarios vinculados al comercio trasatlántico— junto con un grupo más diverso y disperso por todas las ciudades del reino, como lo eran los minoristas que distribuían las mercancías europeas entre la población, actividad que también enriqueció a algunas familias mestizas. Nuestro mencionado fraile Juan de Santa Gertrudis supo recorrer ese mismo itinerario del comercio colonial al conocer la actividad portuaria de Cartagena, Mompox y Honda, como también al tener una comunicación permanente con habitantes de Tunja y Popayán, hacia donde él mismo se dirigía para comercializar los productos de los indígenas a los que evangelizaba en el piedemonte amazónico. Él era otro tipo de vendedor, similar a los hombres y las mujeres que conectaban el mundo rural con el urbano y que resultaron tan útiles en Bogotá para levantar al pueblo contra las autoridades el 20 de julio de 1810.

Para el control de todas estas actividades, pero también para su sostenimiento, el Estado colonial dispuso un riguroso sistema de impuestos, el cual no pocas veces sería un foco de conflictos entre la población y el Gobierno, especialmente en el siglo XVIII. Para ese momento los funcionarios del rey cobraban

la alcabala, un gravamen a la venta de mercancías, comparable con el IVA contemporáneo; el almojarifazgo, destinado a las importaciones; y el sostenimiento de la defensa del Imperio mediante la avería y la Armada de Barlovento. Los empleados del Estado, en momentos de necesidad, cedían su sueldo mediante el llamado valimiento; quienes recibían prebendas especiales, como títulos nobiliarios o tierras, pagaban "gracias del sacar"; las minas pagaban el llamado quinto real, es decir, un veinte por ciento de su explotación, mientras que la producción agraria sostenía a la Iglesia mediante el diezmo. Pero a pesar de este rigor, las economías coloniales se caracterizaron por ciclos continuos de irregularidad e informalidad, lo cual favoreció muchas veces el contrabando y la evasión, situación sumada a la incomunicación de muchas comunidades y a la limitada capacidad de controlar el territorio tan extenso que tenía una Corona española en permanente conflicto con otros países europeos como Francia, Inglaterra u Holanda.

Con todo y esas dificultades, la administración colonial se esforzaba por imponerse y por funcionar. Al terminar la Conquista, las diferentes gobernaciones establecidas por la Corona española dependían de los Gobiernos de Santo Domingo (Santa Marta, Cartagena y Santafé de Bogotá) y Lima (caso de Popayán), por lo que fue necesaria una centralización del poder local, que tuvo como consecuencia la unificación de esos territorios en lo que hoy, aproximadamente, conforma la actual Colombia. Así fue como en 1550 se estableció la Real Audiencia de Santafé, la máxima instancia política del reino, integrada por funcionarios españoles de muy alto prestigio y





con una reconocida formación jurídica, denominados oidores. Sin embargo, la extensión del territorio y las dificultades para gobernarlo indujeron en 1564 a la creación de la Presidencia, con lo cual se separaron parcialmente las funciones administrativas de las judiciales, estas últimas delegadas a la Audiencia. La evidencia de que aún no era fácil establecer un Estado fuerte se mostró en los diferentes perfiles de los presidentes del siglo XVII: cuando había conflicto con una potencia extranjera o cuando seguía siendo incierto el sometimiento de algún pueblo indígena, los presidentes eran militares; en tiempo de paz, eran abogados. Por su parte, a los oidores también se les delegó el control de los Gobiernos locales, al nombrar y, en ocasiones, al convertirse ellos mismos en gobernadores provinciales.

Para el siglo XVIII varios factores incidieron en una reforma del Gobierno colonial: este dependía del virrey del Perú, en la lejana ciudad de Lima, lo cual dificultaba las comunicaciones y el ejercicio de la autoridad. También existía un permanente conflicto entre la Presidencia y la Real Audiencia por la poca claridad acerca de qué autoridad estaba por encima de la otra, mientras los oidores de Santafé tenían sus propias diferencias con los de Quito y Panamá. Al mismo tiempo, la población había crecido y el reino volvía a experimentar un anhelado crecimiento económico. Lo anterior indujo a que se estableciera el virreinato, inicialmente en 1717 y en 1739 de forma definitiva, con un Gobierno centralizado bajo la autoridad de un virrey, que integraba no solo al actual territorio colombiano, sino también a los actuales Panamá, Ecuador y, brevemente, Venezuela. La idea de un representante directo del rey planteaba por fin superar la ingobernabilidad de

estos lejanos dominios. Aquella meta se lograría con éxito sobre los funcionarios reales, pero no mucho sobre el extenso territorio que hoy, tres siglos después, sigue lamentando la supuesta falta de presencia efectiva del Estado.

Más allá del fortalecimiento institucional, las amenazas a este sistema fueron permanentes. Las principales ocurrían desde afuera, cuando los puertos neogranadinos, especialmente Cartagena, se convertían en lugares de asalto de emisarios de Inglaterra o Francia. Así fue como pasaron a la historia los asedios de Francis Drake (1586), el Barón de Pointis (1697) y Edward Vernon (1741), haciendo de la costa Caribe un teatro predilecto de las guerras entre las potencias europeas. Y desde adentro también venían amenazas, en forma de levantamientos de comunidades que expresaban su descontento contra el poder político o económico: lo hacían en los palenques, que para el siglo XVIII ya no solo florecían en el Caribe sino también en el Pacífico y en las localidades andinas de Pacho, el valle del Otún, Cartago o el Alto Cauca. También se rebelaron los mineros del Urabá en 1732 liderados por el colono Luis García, al igual que los comerciantes de Honda en 1738, los artesanos mestizos y mulatos de Cali en 1765 o los indígenas de Tuta en 1752 y La Guajira en 1769.

Por otro lado, en la sociedad colonial el Estado no era el único sujeto de orden social que hacía presencia activa. La importancia de la evangelización de los indígenas hizo de la Iglesia uno de los actores más influyentes de toda la sociedad colonial, al permitírsele el control de los ciclos de vida y la cotidianidad misma de los habitantes. A cambio, el Estado colonial





administraba la organización religiosa en la Nueva Granada: el rey autorizaba el nombramiento de obispos y daba permiso a las comunidades religiosas que le solicitaran hacer su labor en América, al tiempo que los párrocos registraban a la población, ya que ellos eran quienes anotaban nacimientos, matrimonios y fallecimientos, como también ocurrió con la administración de servicios de asistencia social y hospitales. También como parte de ese papel, se estableció en Cartagena la Inquisición, un tribunal de justicia que perseguía ideas consideradas contrarias a la religión, personificadas en inmigrantes judíos y protestantes, o en general en individuos que expresaran opiniones distintas a las del catolicismo.

Otra institución que no siempre tuvo un control absoluto del Estado fue la educación. En la Nueva Granada los primeros colegios y universidades que se crearon fueron iniciativa de las órdenes religiosas que se establecieron en el país en los siglos XVI y XVII, principalmente dominicos, franciscanos y jesuitas, cuyas ideas influyeron decisivamente en los estudiantes que allí se formaban. También la educación era un reflejo de la división social colonial, pues a estas entidades solo podían ingresar los criollos y ocasionalmente mestizos, ya que la ley prohibía el acceso a indígenas y negros. Con la creación del virreinato, el Estado promovió la creación de los primeros colegios públicos, como fue el caso del Colegio de San Bartolomé, luego de la expulsión de los jesuitas en 1767. Igualmente, se intentó eliminar la influencia religiosa en las ciencias naturales y se fundaron los primeros colegios femeninos, manejados por comunidades de monjas.

## Habitar y crear en la Nueva Granada

Se ha hablado aquí de las instituciones y de la economía, pero no directamente de quienes habitaban el territorio, de cómo vivían en él. Los neogranadinos componían una sociedad intencionalmente dividida en grupos sociales denominados estamentos, cuyos integrantes tenían diferentes derechos y eran señalados de acuerdo con su origen o su color de piel, a pesar de que convivieran en el espacio físico de las ciudades, los pueblos, las haciendas o las minas. La sociedad colonial era jerárquica, es decir que las personas que controlaban el poder político y económico poseían mayores privilegios que los demás. Arriba estaban los nacidos en España, quienes dominaban las principales instituciones políticas y económicas; muy cerca estaban los criollos, descendientes de españoles, pero nacidos en América, quienes poseían beneficios económicos, pero no podían acceder a las principales esferas del poder político, y debían conformarse con el gobierno de las ciudades como miembros de los cabildos.

A poca distancia de ambos grupos se encontraba el grueso de la población de libres, es decir, mestizos, blancos pobres y negros que habían dejado la esclavitud (o sus descendientes), quienes se desempeñaban como artesanos en las ciudades o como colonos en el campo, sentando la composición cultural de las sociedades campesinas actuales. La población indígena, por su parte, se encontraba agrupada en resguardos o reducciones, ya libre de la servidumbre de las encomiendas establecidas en el siglo XVI, habitando en su gran mayoría pueblos y zonas rurales,





aunque algunos indígenas también desafiaron la prohibición a habitar ciudades, integrándose a la población de mestizos libres de Tunja, Popayán o Bogotá. Por último, estaban los esclavos negros, forzados a trabajar como mano de obra en haciendas, minas y en el servicio doméstico de ciudades, degradados a un estado de mercancía que podía ser comprada o vendida, atropello que, como ya se dijo, alentó dos siglos de rebeliones a lo largo de todo el reino.

Así es como cada uno de estos grupos experimentaba por igual maneras de expresarse y también de chocar con las restricciones que le imponía el sistema. Por ejemplo, uno de los principales conflictos más documentados y repetidos durante la Independencia fue el rechazo de los españoles a la participación de los criollos en las instituciones políticas de la Nueva Granada, a pesar de que para el siglo XVIII los criollos fueran el grupo más numeroso entre los propietarios de tierras y minas, es decir, la población más rica del país, al mismo tiempo que se empezaba a cuestionar el control que el Estado ejercía sobre sus actividades económicas. Otro caso era el de los indígenas, a quienes la Conquista les hizo perder su autonomía política y cultural, pero a quienes también el sistema colonial les otorgaba medidas para protegerlos de los abusos de españoles y criollos. Los resguardos, por ejemplo, reconocían la propiedad colectiva de sus tierras para que estas no fueran vendidas o despojadas; por su parte, algunas comunidades conservaron la autoridad tradicional del cacique, quien, a cambio de pagar impuestos y obedecer la autoridad de un sacerdote, recibía facultades administrativas y judiciales.

Y es que a pesar de que el sistema colonial pretendía dividir a la sociedad por su color de piel, la realidad siempre fue muy distinta. La integración de los diferentes grupos humanos que habitaban el país generó una sociedad culturalmente mucho más diversa no solo por la conformación de familias mestizas, sino por los permanentes intercambios culturales que existieron. Las ciudades y muchos espacios rurales terminaron siendo habitados por artesanos de diferentes orígenes étnicos, cuyos aportes gastronómicos, lúdicos y productivos siguen siendo hoy esenciales para el desarrollo cultural de la sociedad colombiana. Las ideas segregacionistas nunca terminaron por este motivo, pero la innegable presencia de esta población se convirtió en un aspecto esencial de las haciendas ocupadas por arrendatarios, las fronteras agrícolas expandidas por colonos y las comunidades que, como lo estudió el profesor Germán Colmenares, poblaron los barrios de San Victorino y Las Nieves en Bogotá, Getsemaní en Cartagena, El Ejido en Popayán o San Antonio en Cali.

La diversidad también fue una consecuencia del aislamiento geográfico de las comunidades, las diferentes composiciones étnicas y las singularidades económicas que se vivían en cada parte del país. Esta situación derivó en profundas diferencias culturales entre las regiones, las cuales se han extendido hasta la actualidad y cuyas tradiciones se remontan a la misma época colonial: el Caribe, el Pacífico, el Llano y las subdivisiones de unas sociedades andinas cerradas a su propia geografía, como lo han sido los valles del Magdalena y del Cauca, los altiplanos central y nariñense, la montaña antioqueña y la cordillera Oriental. Por su





parte, la economía y la cultura cambiantes se expresaban también al interior de cada región, con el surgimiento de nuevos núcleos poblacionales que lentamente empezaron a aparecer, apartados de las poblaciones fundadas por los conquistadores y que incluso rivalizaron con ellas y, en ocasiones, les quitaron su hegemonía en el siglo XIX. Ese fue el origen de las actuales ciudades de Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla y Sincelejo, como también de otros ejes poblacionales emergentes en el Chocó y Casanare.

Hablamos de la ciudad, porque, a pesar de que la población y la economía rurales fueron muchísimo más grandes, la vida urbana predominaba al habitar allí las personas e instituciones que detentaban el poder. Por lo tanto, también fue allí desde donde se proyectaron las prácticas culturales hegemónicas: la educación controlada por la Iglesia y el Estado, el ordenamiento del espacio urbano dirigido por las instituciones de gobierno y hasta el trabajo de los artesanos encargado por comunidades religiosas, entre el cual se encuentra la pintura religiosa de los célebres artistas del siglo XVII Gregorio Vásquez y Baltasar Figueroa. De igual forma, la influencia de la élite y de la Iglesia pretendió transformar a los demás estamentos. Indígenas y negros se vieron forzados a aprender la lengua y la religión de españoles y criollos, al tiempo que su integración generó una nueva sociedad con prácticas sociales heredadas de los europeos, en un proceso que recibe el nombre de aculturación. Esta influencia también marcó los conflictos cotidianos, expresados en los permanentes prejuicios sociales que, basados en el color de piel, abundan en los archivos judiciales de la Real Audiencia y las gobernaciones locales.

A pesar de que el poder insistía en separar a la población por su origen, muchas tradiciones de comunidades indígenas y negras no desaparecieron e incluso fueron adaptadas por los españoles, situación que permitió mantener aquella característica que han tenido los habitantes de este territorio desde antes de la Conquista: la diversidad cultural. Con este proceso, por ejemplo, la economía colonial no se comprendería sin los conocimientos que durante siglos tuvieron los indígenas sobre la explotación de recursos mineros, la domesticación de plantas y animales o la producción artesanal, a pesar del olvido de un mucho más amplio conjunto de técnicas y especies vegetales que se consumían en el país hace más de cinco siglos. Por su parte, a pesar de su sometimiento violento, el aporte negro a la vida doméstica fue esencial para la alimentación, la crianza de niños, las prácticas médicas y la colonización de nuevas tierras para la explotación agrícola y minera. Otro caso, mucho más aislado geográficamente, pero no por eso menos importante, estuvo en la posibilidad de crear nuevas formas de hablar, como son los casos de las lenguas criollas de las comunidades negras del Palenque de San Basilio o de las islas anglófonas de San Andrés y Providencia, incorporadas al virreinato en 1803 y en permanente comercio con Panamá y Cartagena desde la década de 1780.

Ese era el mundo extraño que visitaba el fraile Santa Gertrudis a mediados del siglo XVIII: una sociedad que expresaba su diversidad en múltiples actividades económicas y recursos naturales, en el reconocimiento de trapiches, alfarerías, talabarterías y expendios de bebidas tan diferentes como cada región





y clima podían serlo, de variadas manifestaciones de cocina o música folclórica, de ciudades en crecimiento y de pequeños pueblos, de grandes comerciantes y humildes vendedores, como lo era él mismo, de haciendas, parcelas de pequeños propietarios o tierras colectivas de indígenas como donde él predicaba. Con todo y sus innegables diferencias con el presente, el autor de *Maravillas de la naturaleza* estaba describiendo buena parte de los elementos esenciales en la vida campesina de los colombianos del siglo XX, y no pocas cosas de la identidad que han querido reconstruir los medios de comunicación del siglo XXI. Si bien para el Estado colonial aquel país no pasó en muchas ocasiones de ser una idea en papel, en la continuidad histórica de buena parte de esos rasgos culturales se encontraría la base material de algo que podía ir mucho más lejos.

De igual forma, para el momento en el que Santa Gertrudis recorría el virreinato, otros factores de cambio empezaban a aparecer. Los conflictos derivados de la segregación social, la circulación de nuevas ideas filosóficas y políticas entre las élites y esa inevitable influencia del mundo exterior al que España había conectado a la Nueva Granada iban a ser la causa de que se escribiera otra historia decisiva en la evolución de esa idea de país. La modernidad pronto llegaría a cambiar muchas cosas.

**Para seguir aprendiendo**

La historia colonial es un tema que ha interesado mucho a las últimas generaciones de historiadores colombianos, por lo que la bibliografía es abundante y diversa. Un ejemplo sobre cultura política es el clásico *Reclamos y representaciones* (1993) de Margarita Garrido, mientras que algunas obras sobre economía y sociedad son *Cali: terratenientes, mineros y comerciantes* e *Historia económica y social de Colombia* (1980), ambas de Germán Colmenares; *Colombia antes de la Independencia* (1997) de Anthony McFarlane, y *Ordenar para controlar* (2002) de Marta Herrera.

De igual forma, hay numerosas monografías que abordan la complejidad de la vida social y cultural de la época. Por ejemplo, se destacan *Mestizaje, comercio y resistencia* (2000) de Eduardo Barrera; *Alimentación e identidades en el Nuevo Reino* (2011) de Gregorio Saldarriaga; *La sociedad de Santafé colonial* (1990) de Julián Vargas Lesmes; *Esclavitud, región y ciudad* (2002) de Rafael Díaz; *Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino* (1997) de Pablo Rodríguez; *De la caridad barroca a la caridad ilustrada* (2006) de María Himelda Ramírez; *Un cuerpo para el espíritu* (2007) de María Piedad Quevedo, y *Hechicería, brujería e inquisición* (1994) de Diana Ceballos. Para aproximarse al arte colonial, se recomienda *Los ingenios del pincel* (2021) de Jaime Borja.

En cuanto a obras audiovisuales sobre la Colombia colonial, pueden verse los largometrajes *Amores ilícitos* (Heriberto Fiorillo, 1995), *El alma del maíz* (Patricia Restrepo, 1995) y *Bituima 1780* (Luis Alberto Restrepo, 1995), los tres de la serie *De amores y delitos*, un notable trabajo de investigación y ambientación de la época colonial, disponible en línea por RTVCPlay.



# 5.

# La primera modernidad (1761-1824)

En 1761 desembarcaba en Cartagena el marino Pedro Messía de la Cerda, recién nombrado virrey de la Nueva Granada. Lo acompañaba su médico personal proveniente de Cádiz, José Celestino Mutis, quien, al igual que muchos otros eruditos de su tiempo, también cultivaba la botánica, la geografía y las matemáticas. Establecido el nuevo gobernante en la capital, Mutis adelantó observaciones muy detalladas del territorio que visitaba, poniendo a su nuevo hogar en el mapa del mundo, que por entonces trataban de completar los científicos de Europa y las Américas. Este hecho contrasta con otro muy distinto, ocurrido sesenta y tres años después, al final de una cruenta guerra. Derrotado por las tropas leales a la República de Colombia, el coronel Agustín Agualongo era conducido a Popayán a mediados de 1824. Su delito fue comandar el último grupo armado que se mantenía fiel al rey de España en la aguerrida provincia de Pasto, en un tiempo en el que las instituciones

coloniales habían sido inesperadamente reemplazadas por un gobierno independiente. Con su fusilamiento ya no quedaba en el país ningún grupo relevante que se opusiera al nuevo sistema político.

¿Cuál es la relación entre ambos eventos? De forma directa y aparente, ninguna. Sin embargo, ambos episodios son los extremos de una profunda transformación que vivió entonces la actual Colombia, la cual desencadenaría las primeras experiencias de la modernización intelectual y política de sus dirigentes. El médico español que desembarcaba en 1761, sin proponérselo, sería un formador de los agitadores políticos a los que por quince años enfrentó el militar pastuso, quien murió defendiendo el sistema político que permitió la llegada del sabio de Cádiz. Así de extremos pueden ser los polos de la era que transformó a la sociedad y a las instituciones de la Nueva Granada: la primera modernidad, la de reformas al sistema colonial, agitaciones populares, innovaciones intelectuales, crisis inesperadas en el sistema político y, por supuesto, la construcción de esa utopía que llamamos Independencia. La modernidad, aquel proceso en el cual una sociedad tradicional, estática, cerrada y jerárquica, como lo era la colonial, empezaba muy lentamente a transformarse en una sociedad donde el pensamiento científico y las libertades individuales se convertían en el centro de la vida política, económica y cultural.

Con sus alcances limitados, pero también con sus irreversibles consecuencias para las instituciones y la sociedad del país, la Nueva Granada experimentó durante medio siglo una transformación radical de sus instituciones coloniales. Buscando





fortalecerse, pero también expresando cierto grado de debilidad, una sucesión de eventos relacionados con ese cambio desembocaría en una transformación política tan inesperada como irreversible: la Independencia.

Ese cambio fue una consecuencia del descontento de diferentes grupos sociales por las imposiciones políticas y económicas del sistema colonial: comunidades de blancos, libres, indígenas y esclavos tenían motivos para protestar contra el sistema imperante, si bien muchos otros de sus pares también contaban con razones para mantenerse leales al viejo régimen español. Al mismo tiempo, en las principales ciudades del virreinato circulaban ideas científicas, filosóficas y políticas entre los criollos, que llevaron a proponer nuevas formas de organización económica y política. Mientras esto ocurría, los conflictos que tenía España con otros países europeos condujeron a una inesperada crisis política en las colonias en América. De forma igualmente inédita, las regiones más pobladas del país se convirtieron en un trágico escenario de guerra. El desenlace de esa violencia determinó la imposición del gobierno republicano, cuya herencia histórica es reivindicada por las instituciones políticas que dos siglos después todavía nos rigen a los colombianos.

## Modernidad oficial: reformas e Ilustración

"El inicio de nuestra feliz Ilustración" era como, un cuarto de siglo después, llamaba Manuel del Socorro Rodríguez a la llegada de Mutis a la Nueva Granada, en 1761. Si bien el bibliotecario Rodríguez exageraba al atribuirle un origen único al desarrollo

intelectual de los criollos neogranadinos, su idea nos sirve para ver cómo los procesos que condujeron al cambio intelectual y posteriormente político del país no se dieron de un día para otro. Luego de la creación definitiva del Virreinato de la Nueva Granada, en 1739, desde España empezaron a importarse nuevas ideas filosóficas y científicas para reformar las instituciones coloniales, pero también para cambiar la educación y el pensamiento económico y político. Estas ideas están enmarcadas en el movimiento intelectual de la Ilustración, aquel sueño de los intelectuales de Europa occidental y sus discípulos en América, en el que la fe en el saber se trasladaba de Dios al hombre, en el que todo el conocimiento vigente debía replantearse y en el que la filosofía y la ciencia debían ocupar un lugar privilegiado en la organización social.

A pesar de ese carácter revolucionario, la monarquía española fue la primera en promover este nuevo modelo de pensamiento a lo largo del siglo XVIII. El rey Carlos III, coronado dos años antes de la llegada de Mutis, fue el más influyente reformador de la administración colonial por medio de las ideas ilustradas: centralizó el poder de las autoridades españolas del reino frente a los poderes locales, amplió la presencia militar en los reinos de América para garantizar su defensa en los constantes conflictos con franceses e ingleses, aumentó el control del Estado sobre la Iglesia, llegando incluso a expulsar a los jesuitas de sus dominios en 1767, reformó las instituciones educativas y estableció nuevos impuestos a la población. En la Nueva Granada, estas reformas también se reflejaron en el fomento a la colonización de nuevos territorios y la reorganización de los





ya establecidos, como fue el caso de la reforma administrativa que trazó nuevos barrios y calles de Santafé de Bogotá en 1776.

Como nunca en las ciudades, operaron las autoridades judiciales y las entidades educativas apoyadas por el Estado. Lo primero se aprecia en la multiplicación de juicios criminales atendidos por las gobernaciones y la Real Audiencia, no como un reflejo del aumento del delito, como lo creían las autoridades de la época, sino como evidencia de una mayor presencia de las instituciones en la cotidianidad de los neogranadinos. Lo educativo se vio reflejado en el plan de estudios impulsado en 1774 por Francisco Moreno y Escandón, en la creación de la Real Biblioteca en 1776, aprovechando los libros y la imprenta incautados por la expulsión de los jesuitas, y en la fundación en 1784 del Colegio de la Enseñanza, el primero de nuestra historia dirigido a niñas de la élite. Fueron también los años del primer censo poblacional del reino y de los primeros teatros y periódicos. En el ámbito privado, las familias ricas de Popayán, Cartagena y Bogotá también aprovechaban para discutir las nuevas ideas de su tiempo en tertulias literarias y sociedades de apoyo económico.

Junto con esas destacadas empresas intelectuales, hubo otra que tendría una enorme trascendencia: la Expedición Botánica, creada en 1783 y confiada a la dirección de Mutis, ya por entonces convertido en sacerdote y en profesor del Colegio del Rosario. La expedición fue una misión científica encargada de investigar los recursos naturales del virreinato para mejorar su explotación, pues, aunque se le llamó "botánica", también realizó estudios sobre animales, mineralogía, astronomía y

población. Al amparo de esta institución se dio a conocer el trabajo de jóvenes científicos criollos como Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Pedro Fermín de Vargas y José María Carbonell. Además, la presencia de integrantes criollos en los estudios de la expedición permitió que este grupo social asumiera un liderazgo en el conocimiento de los recursos de la Nueva Granada. Por su parte, esta entidad también dejó un importante legado para nuestro patrimonio cultural, reflejado en libros sobre recursos naturales, mapas de ríos y provincias o acuarelas en las que se representó la flora de la Nueva Granada.

Pero, ya se dijo, además de estimular la formación intelectual de los criollos, los monarcas españoles también deseaban fortalecer su autoridad sobre sus reinos en América, de ahí el apodo de "déspotas ilustrados" con el que se conocería posteriormente a estos reyes. En consecuencia, la tradicional alianza entre la Corona y las élites locales entró en crisis, afectando la lealtad de algunos grupos, especialmente los que, en las ciudades más poderosas política y económicamente, se verían influidos por otras ideas filosóficas y políticas de la Ilustración, las cuales pretendían cambios más profundos al sistema. Era la paradoja de la élite criolla formada a finales del siglo XVIII: por un lado, se educaba de la mano de las reformas de la Corona mediante expediciones científicas, tertulias y sociedades económicas; pero, al mismo tiempo, por esa vía también podía cuestionar el orden vigente y concebir la posibilidad de que era capaz de gobernar esas mismas riquezas que estudiaba. La Ilustración, en resumen, también era una vía para proyectar nuevos sistemas políticos, los cuales se enfrentaban a las instituciones coloniales.





Era comprensible que, a diferencia de los ejemplos de la Expedición Botánica, el proceso de circulación de ideas mucho más revolucionarias transcurriera en un escenario más privado: el de la minoría letrada, que accedía a la filosofía moderna y a las nuevas ideas políticas. En las ya mencionadas tertulias se leía a Newton, Pascal y Jean Bodin, pero también a John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau y los autores del *Diccionario razonado de ciencias* (la enciclopedia francesa prohibida por la Inquisición). El carácter secreto de estas lecturas reflejaba la peligrosidad que significaban muchas de esas ideas para el establecimiento político colonial: según esos autores, es la voluntad de la comunidad, y no la tradición, la que otorga el poder a los gobernantes y la legitimidad a las leyes; para garantizar el ejercicio transitorio del poder y la soberanía del pueblo, este debe dividirse en tres ramas autónomas y separadas (ejecutiva, legislativa y judicial). Pero las ideas subversivas se extendían aún más: el individuo goza de derechos que no pueden ser restringidos por el Estado, por lo tanto, debe garantizársele libertad de expresión, de culto y de comercio, principios opuestos a la regulación severa que sobre la sociedad ejercían la Iglesia y el régimen colonial. Como si fuera poco, el sistema político del virreinato era juzgado con dureza, pues se consideraba que promovía la tiranía, la ignorancia y la superstición; de hecho, ante la realidad de un imperio legitimado mediante la expansión del cristianismo, la religión debía pasar a un segundo plano en la organización social.

Sin embargo, la posibilidad de un movimiento que confrontara la crisis del sistema colonial no vino inicialmente de

tertulias intelectuales y lecturas prohibidas de la élite. Al contrario, el primer movimiento en amenazar de forma frontal al sistema vino de los sectores populares y comunidades alejadas de los centros de poder. La sublevación más famosa de todas se dio en 1781 en rechazo a las nuevas reformas económicas, al tiempo que sucesos similares ocurrían en Chile y Perú. En el oriente y el centro del país, criollos, mestizos e indígenas se unieron para protestar contra el control que el sistema colonial ejercía sobre sus actividades económicas, solicitando la abolición de los nuevos impuestos y la destitución de los funcionarios que los promovían. Por estar integrado por sectores populares, a este movimiento se le conoció como "la Rebelión de los Comuneros", y se originó en la población del Socorro, pero también se extendió a las provincias de Tunja, Santafé, Casanare y Antioquia.

Mientras marchaban hacia la capital, los comuneros del Socorro fueron detenidos en Zipaquirá bajo la promesa del arzobispo Caballero y Góngora de que el sistema de impuestos sería modificado. Entre los líderes comuneros estaba José Antonio Galán, quien desconoció el acuerdo, promovió nuevos alzamientos armados, repartió tierras entre los indígenas y liberó a los esclavos de las minas de Mariquita. El movimiento llegó a su fin cuando el virrey, radicado en Cartagena, anuló el pacto de Zipaquirá y ordenó la captura de Galán, quien fue condenado a muerte con sus principales seguidores el 1 de marzo de 1782. Otras insurrecciones populares ocurrieron en Neiva en 1767, en Palmira en 1788 y en Túquerres en 1800, pero la amenaza que representó Galán preocupó enormemente a las autoridades





de los años posteriores por la forma en que se extendió por el virreinato. La élite criolla no reaccionó de la misma forma ante los alzamientos. Algunos, leales a la Corona, secundaron los temores de las autoridades; otros compartían las preocupaciones por el sistema de impuestos, pero temían las represalias; unos pocos, especialmente en el nororiente del país, apoyaron decididamente la rebelión, y otros, más prudentes, adelantaron discusiones sobre la conveniencia de hacer reformas para evitar una crisis en las instituciones coloniales.

Y así, mientras esto ocurría, en Francia y Norteamérica se demostraba que era posible crear nuevos sistemas políticos inspirados en las ideas ilustradas. Fue así como la acción de un sector de la élite criolla regresaba al ámbito privado y a las reuniones secretas, de las cuales salieron dos escándalos ocurridos en 1794 en la capital. Uno fue por unos papeles publicados en las calles de la ciudad, con versos insultantes contra el virrey y los oidores de la Real Audiencia. En busca de sus autores, numerosos estudiantes y profesores de los colegios del Rosario y San Bartolomé fueron apresados y torturados, entre los que se implicó también al científico Pedro Fermín de Vargas. El segundo juicio, aún más escandaloso, fue por un documento salido de una imprenta: la traducción al español de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, uno de los textos con los que la Revolución francesa, iniciada cinco años antes, materializaba el ideario de la Ilustración. Antonio Nariño, promotor de la traducción, fue apresado junto con el impresor, su abogado y los contertulios a quienes compartió el impreso. Su decisión le costaría dieciséis años de prisiones y fugas entre

Bogotá, Cádiz y Cartagena. Desde entonces las conspiraciones se volverían un temor frecuente para las autoridades.

## Modernidad pública: agitación e Independencia

Además de agitación intelectual, la Revolución francesa también generó conflictos en Europa, ya que los gobernantes del resto del continente no querían renunciar a los privilegios abolidos en Francia, debido a lo cual hubo una serie de guerras entre este país y sus vecinos. En 1808 el francés Napoleón Bonaparte invadió España, destituyó al rey Fernando VII e instaló un gobierno que no fue reconocido por sus vasallos. Así, las revoluciones ilustradas generaban un inesperado vacío de poder que, sin embargo, invitaba a la expresión de esas mismas ideas en ambos lados del Atlántico: un gobierno que apelara al consentimiento de los gobernados. Bajo ese principio, en España se formó una junta con el fin de liderar la resistencia militar a la invasión y afirmar la lealtad al monarca destituido, invitando también a representantes de los dominios españoles en América. La representación minoritaria de los americanos en la junta fue protestada por el Cabildo de Santafé de Bogotá en cabeza del abogado payanés Camilo Torres. Si bien su reclamo finalmente no fue enviado a España, este reflejaba la circulación que tenían las ideas ilustradas en el lenguaje de la élite criolla y la percepción de que una nueva identidad política se estaba formando.

De este modo, fueron los poderes locales los que lideraron en América la reacción a la crisis política, estableciendo juntas





de gobierno a lo largo del continente. Los primeros brotes revolucionarios ocurrieron en 1809, en Casanare y la vecina Quito, ambos movimientos reprimidos por la fuerza, por orden del virrey Amar y Borbón. Como respuesta, otras poblaciones de la Nueva Granada establecieron sus propias juntas, consagrando el principio de que eran las provincias y ciudades las que debían aprobar su propia forma de gobierno: Mompox el 24 de abril de 1810, Cartagena el 22 de mayo, Cali el 3 de julio, Pamplona el 4 y Socorro el 16. Por su parte, la capital estableció su propia junta el 20 de julio, durante una movilización popular alentada por la élite criolla en rechazo a las autoridades españolas. El movimiento de Santafé de Bogotá significó la destitución de las autoridades del virreinato por parte de una élite local conectada con distintas regiones del país. La noticia motivó la expansión del movimiento a Antioquia, Tunja, Mariquita, Neiva, Valledupar y el Chocó.

A pesar de expresarse como un movimiento que reivindicaba la autoridad de Fernando VII, al poco tiempo este abrió paso a nuevas formas de organización política, tendientes a establecer en el país un Estado de derecho: la separación de poderes, un ejercicio transitorio del gobierno, la titularidad del poder cedida al pueblo y la consagración de estos principios en una constitución. Esas posturas dividieron a los grupos dominantes de cada provincia de la Nueva Granada: los Gobiernos de Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto y Popayán se declararon realistas, es decir, leales al rey, al igual que las poblaciones de las sabanas del Sinú, la costa sur del Pacífico y el valle de Cúcuta, mientras que en el resto del país se planteó la posibilidad del cambio político,

el cual, según sus promotores, solo sería posible desconociendo por completo cualquier autoridad proveniente de España, es decir, declarando la independencia. La primera provincia en tomar esa posición fue Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, ejemplo que fue seguido en 1813 por Cundinamarca (nuevo nombre de la provincia de Santafé de Bogotá), Antioquia y Tunja. Para los independentistas también era necesario sintetizar sus principios en una constitución, acción emprendida en las provincias que se independizaron, pero también en Socorro, Valle del Cauca, Neiva, Mariquita y Pamplona, con la esperanza de que en algún momento se estableciera una carta política común a toda la Nueva Granada.

Sin embargo, los realistas seguían siendo un grupo político muy fuerte y el conflicto se fue haciendo cada vez más agudo, una situación común en toda Hispanoamérica que derivó en la guerra entre realistas y patriotas, como se llamaban a sí mismos los independentistas; es decir, no fue un conflicto entre neogranadinos y españoles, pues en los dos grupos había partidarios de ambas causas políticas. La guerra inició en el sur del país, cuando en marzo de 1811 los independentistas de Santafé y el Valle del Cauca derrotaron al Gobierno de Popayán, en un conflicto que duró hasta 1813, cuando los realistas payaneses y pastusos vencieron a los patriotas de Cali. También había guerra en la vecina Venezuela, donde la derrota de los independentistas obligó al exilio de algunos de ellos en Cartagena. Los venezolanos, liderados por el joven oficial Simón Bolívar, convencieron en 1812 al Gobierno cartagenero de emprender una campaña para desalojar a los realistas asentados entre Mompox y Cúcuta,





con lo cual se inició una exitosa alianza entre los patriotas de ambos lados de la frontera.

Mientras combatían a los realistas, los independentistas también se dividieron por la forma ideal de gobierno republicano que debía establecerse: los leales al Gobierno de Cundinamarca y liderados por Antonio Nariño contra los organizados bajo las Provincias Unidas de la Nueva Granda y liderados por Camilo Torres. La adhesión de ciudades de otras regiones al proyecto de Nariño desencadenó la guerra entre ambos grupos, en el conflicto entre quienes posteriormente fueron llamados "centralistas" y "federalistas". Por causa de esta guerra, las calles de Santafé de Bogotá se convirtieron dos veces en un campo de batalla: en enero de 1813, cuando sus habitantes lograron rechazar a los federalistas, y dos años después, cuando Bolívar asedió la ciudad y la incorporó a las Provincias Unidas. La violencia se expresaba como consecuencia de la incapacidad que tenían las ideas, viejas o nuevas, para imponerse sobre la sociedad. Así, la Independencia se convertía en una prolongada guerra civil entre diferentes ideologías: viejos privilegios contra viejos resentimientos, enfrentamientos entre ciudades y provincias, neogranadinos realistas contra neogranadinos independentistas y, por supuesto, entre los llamados centralistas y federalistas.

Esa última división entre los partidarios de la independencia fortaleció al bando realista. El primero en ser vencido fue Nariño, quien lideró una campaña en el sur del país para ocupar las ciudades leales al Gobierno español y fue capturado en 1814 por las guerrillas de indígenas, negros y mestizos que defendían los alrededores de Pasto. Con el restablecimiento de

Fernando VII en el trono, el movimiento realista se fortaleció aún más, al enviar a Venezuela y la Nueva Granada un ejército comandado por el general Pablo Morillo. La reconquista realista del país se aseguró con la toma de Cartagena el 6 de diciembre de 1815, tras asediar la ciudad durante ciento dos días, con el apoyo de los realistas de las poblaciones vecinas. Se calcula que la tercera parte de la ciudad murió durante el asedio, producto del hambre y las epidemias.

Bajo el dominio de los realistas, en 1816 fueron fusilados la mayoría de los líderes independentistas neogranadinos: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonio Villavicencio, José María Cabal y José Fernández Madrid, entre muchos otros. En los siguientes tres años, continuaron los fusilamientos, extendidos a civiles acusados de colaborar con las guerrillas patriotas que se establecieron en el centro y el oriente del país, siendo las muertes de Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos los ejemplos más célebres de estas represalias. Lo que hasta ahora había sido una guerra de baja intensidad llegaba al límite de exterminar a toda una generación de militares y civiles, tanto de las élites como de los sectores populares.

La guerra, sin embargo, cambió de rumbo por una acción inesperada. Casanare se convirtió en el principal refugio de la resistencia patriota gracias a su distancia de las principales ciudades de la Nueva Granada y su cercanía con Venezuela, donde los independentistas continuaban la guerra en los valles del Orinoco. De este modo los independentistas de ambos países acordaron sumar esfuerzos en lo político con la adhesión de los neogranadinos al Congreso de Venezuela convocado en





Angostura el 15 de febrero de 1819, el cual nombró a Bolívar como jefe político y militar de la república. Debido al fortalecimiento de los realistas en Venezuela, Bolívar decidió continuar la guerra en la Nueva Granada, planeando una campaña conjunta para tomarse Santafé de Bogotá, en compañía de los independentistas que comandaba Francisco de Paula Santander en Casanare. Utilizando la ruta riesgosa del páramo de Pisba, el ejército independentista entró a la provincia de Tunja, donde se encontraba el grueso de las tropas realistas que defendían el centro del país. Lograron derrotarlas sorpresivamente en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, dos meses después de haber cruzado el río Arauca. Desde ese momento, la guerra se inclinó en favor de los independentistas, al poder controlar los recursos y la población de la capital. Además, con el triunfo de Boyacá fue posible iniciar las campañas que se desarrollaron en los meses posteriores en Antioquia, el Valle del Cauca, el Bajo Magdalena, el Sinú y los puertos del Caribe, culminando con la toma de Cartagena en junio de 1821.

Una paradoja de la causa independentista fue que, a pesar de pelear por un sistema que aspiraba a la fraternidad y la igualdad, las condiciones aptas para el cambio político o el ascenso social fueron dadas por la guerra. La sociedad estamental de la época colonial se vio amenazada por ambos bandos que, sin distinción, integraban a blancos con indígenas, mestizos y negros. A algunos los unía la defensa de sus ideales políticos, a muchos otros la lealtad a su provincia, a los esclavos los animaba la promesa de libertad que les ofrecían ambos bandos; de igual forma, a los indígenas de Pasto, Santa Marta y La Guajira los afectaba la

pérdida de la figura protectora del rey frente a los abusos de los terratenientes criollos, de la misma forma en que había españoles cuya simpatía por las ideas ilustradas los llevó a apoyar la independencia. En este último bando no faltaron mercenarios provenientes de Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Francia y las Antillas, motivados por las ideas revolucionarias, pero también por un salario que compensaba su lucha en Europa contra Napoleón. De igual forma, las mujeres, que integraban el sesenta por ciento de la población del país, se vincularon a esta historia como conspiradoras, agitadoras populares o auxiliares de las tropas al brindarles espionaje, dinero, alimentación, pertrechos o asistencia médica. Era una era inédita de mujeres fusiladas como combatientes, de indígenas y mulatos ascendidos a coroneles y, en general, de una sociedad completamente involucrada en esta revolución.

Portando esa diversidad social, la guerra continuó en el sur del país. Desde la derrota de Nariño, Pasto se convirtió en el principal foco de resistencia de los realistas. La violencia de la guerra hizo que la provincia viviera permanentemente asedios, saqueos y la estigmatización de sus habitantes. Los odios y la violencia entre ambos bandos eran permanentes, cuando la república, ahora triunfante en todo el resto del país, decidió apoyar los movimientos de independencia en Quito, Guayaquil y Perú, camino en el cual Pasto era un obstáculo enorme. Así fue como las autoridades realistas de la ciudad negociaron la paz con Bolívar en 1822, mientras las tropas de Antonio José de Sucre entraban a Quito. El realista mestizo Agustín Agualongo, al igual que muchos otros combatientes de origen popular, se sintió traicionado por sus





superiores, pues uno de los que entregaba la ciudad a Bolívar era el sacerdote Jiménez de Enciso, quien, a pesar de incitar por años a matar a los independentistas, se rendía a Bolívar a cambio de que se ratificara su cargo de obispo de Popayán. Decepcionado, Agualongo organizó nuevas guerrillas realistas durante dos años, lo cual sirvió de excusa a las tropas de Bolívar y Sucre para masacrar a los civiles de Pasto, saquear sus viviendas y violar mujeres, en un horror que reflejaba que las heridas de la guerra seguían abiertas. El jefe pastuso fue capturado y fusilado en 1824, finalizando así una guerra que se había recrudecido, en la cual los independentistas tomaban represalias tan violentas como las que hacía poco ellos mismos habían recibido.

Mientras tanto, con la Independencia triunfó el proyecto no solo de una constitución para la Nueva Granada, sino también de su unión con Venezuela. Este plan se hizo realidad el 17 de diciembre de 1819 con la Ley Fundamental de la República de Colombia, nombre dado al nuevo Estado. Luego, y con el fin de darle un gobierno estable a la naciente república, fue convocado un congreso en la Villa del Rosario de Cúcuta, con diputados venezolanos y neogranadinos, el cual promulgó la primera constitución perdurable de nuestra historia el 3 de octubre de 1821. A esa carta se adhirieron en noviembre los independentistas de Panamá, los de Ecuador tras la batalla de Pichincha en mayo de 1822 y la población de San Andrés y Providencia a mediados de ese mismo año. Mientras la guerra daba sus últimos episodios, el turno ahora era de las leyes para inventarse la ciudadanía en tiempo de paz.

**Para seguir aprendiendo**

Las causas y acontecimientos de la Independencia son un tema del que hay una bibliografía abundante y variada, debido al comprensible interés que ha despertado este periodo en los historiadores y en la enseñanza de la historia.

Sobre el movimiento de la Ilustración se recomiendan *Remedios para el Imperio* (2000) de Mauricio Nieto, *Los ilustrados de la Nueva Granada* (2002) de Renán Silva y *La Hybris del Punto Cero* (2005) de Santiago Castro-Gómez. Por su parte, el clásico de John Phelan *El pueblo y el Rey* (1980) es un gran texto para conocer el movimiento comunero. Sobre el proceso de independencia pueden leerse el clásico de Hans-Joachim König *El camino hacia la nación* (1994) y recopilaciones recientes como *El Nuevo Reino de Granada y sus provincias* (2010) de la Universidad Javeriana, *Del dicho al hecho* (2010) del Museo Nacional, *Historia que no cesa* (2010) de la Universidad del Rosario y *Bicentenario de la Independencia de Colombia* (2019) del Banco de la República.

Por su parte, el proceso militar puede estudiarse en *República en armas* (2003) de Clément Thibaud y *1819* (2019) de Daniel Gutiérrez, mientras que los conflictos políticos y sociales provocados por la Independencia pueden analizarse en *El fracaso de la nación* (1998) de Alfonso Múnera, *Los indios de Pasto contra la República* (2007) de Jairo Gutiérrez Ramos y *Mitos de armonía racial* (2013) de Marixa Lasso.

Hay numerosas producciones audiovisuales sobre el periodo disponibles en la aplicación RTVCPlay, de las cuales se destacan las series de televisión *Las heroínas* (Promec, 1982) y *Crónicas de una generación trágica* (Audiovisuales, 1993), además de los documentales *200 años después* y *Un Bicentenario de historias* (Señal Memoria, 2019).



# 6.

# Las primeras ciudadanías (1821-1861)

En 1849 un grupo de colonos se abría paso en Antioquia, con destino a las laderas del nevado del Ruiz. Quince años antes, esa misma vía había sido abierta por el señor Fermín González, que buscaba una zona para la explotación agrícola lejos de los terrenos controlados por los terratenientes de la región. Siguiendo esa ruta y extendiéndola más al sur, una numerosa cuadrilla de campesinos, entre quienes se encontraban Manuel María Grisales y Joaquín Antonio Arango, fundó un pueblo en el estratégico cruce de caminos que conectaba a las cumbres de la cordillera Central con el sur y el centro del país. La Asamblea de la provincia le concedió vida jurídica a la población, llamada desde entonces Manizales, junto con la posibilidad de elegir concejo municipal, alcalde y juez. Era una nueva forma de entender la ocupación del territorio y la fundación de ciudades, muy distinta a la practicada bajo la dominación española, pues ahora las motivaciones estaban en la expansión de la frontera agrícola

y en la adecuación del territorio colonizado a las instituciones políticas y económicas formadas luego de la Independencia.

Sin embargo, en la imaginación literaria encontramos una huella de los obstáculos a los que se podían enfrentar esas empresas colonizadoras. En 1856 Eugenio Díaz Castro describió en su novela *Manuela* el viaje de Demóstenes, un estudiante bogotano, a un pueblo a orillas del río Magdalena. Allí el estudiante conversa con la joven que da título al libro, quien le explica la imposibilidad de desarrollar en su comunidad el sueño de progreso que ofrecía la nueva república: sembrar nuevos productos era imposible por la falta de caminos y la persecución de los terratenientes; al Gobierno que debía protegerlos de ese abuso solo lo conocían cuando los muchachos de la comarca eran reclutados para la guerra civil o cuando aparecían los recaudadores de los Gobiernos local y nacional a cobrar, mientras que las promesas de brindar salud y educación eran para unos pocos y, en su pueblo, esa opción se limitaba a la heroica iniciativa del cura. Para ellos, aprender a leer significaba meterse de juez para que "lo frieguen los gamonales". "¡Bonita protección!", sentencia Manuela en la novela.

Ambos relatos, el heroico y el trágico, encierran las contradicciones que afrontó el país recién independizado. Existía la promesa de un desarrollo social y económico al que se adecuaba una sociedad que se sentía dueña de su destino, capaz de transformar el territorio y de transformarse a sí misma. Pero se trataba de un sueño que chocaba permanentemente con los obstáculos de la desigualdad, las crisis productivas y la violencia. En esa difícil dualidad se expresaba en la actual





Colombia por primera vez el concepto de ciudadanía, con la aparente intención de renunciar a las jerarquías e imposiciones del periodo colonial contra las que se había rebelado un sector de la generación anterior.

Se hablaba por primera vez, entonces, de la ciudadanía, ese conjunto de derechos y deberes que tiene cada individuo vinculado a la vida política de un Estado moderno. La Independencia estrenaba aquella idea, con las limitaciones de la sociedad excluyente donde nacieron sus gestores. Cada hombre y mujer del nuevo país poseía derechos inherentes a su dignidad humana, pero solo unos pocos poseían derechos políticos. Ya no había que ser español o vecino pudiente de una parroquia para acceder a un cargo público, pero sí había que ser hombre, mayor de veintiún años, saber leer y escribir o tener un determinado monto de recursos para poder elegir y ser elegido. Esa era la primera idea de ciudadanía, la cual se proyectó en las transformaciones políticas y sociales del país durante el primer medio siglo de vida independiente.

## Imaginar la ciudadanía: partidos y constituciones

La suma de esfuerzos de los independentistas de Venezuela y la Nueva Granada aseguró su triunfo, el cual se materializó en la República de Colombia, un Estado que unió a ambos países y al que posteriormente se sumaron los actuales Ecuador y Panamá.

La Gran Colombia (hoy llamada así para diferenciarla de la Colombia actual) existió entre 1819 y 1830, permitiendo que se

aplicaran los principios del Estado moderno consagrados en la Constitución de 1821, redactada en la Villa del Rosario de Cúcuta. La nueva carta política defendía el sistema centralista que hace poco había costado guerras entre los patriotas, con el fin de asegurar un gobierno fuerte en una sociedad debilitada por la guerra. A su vez, se establecía un gobierno elegido por representantes del pueblo, la soñada división del poder público en tres ramas y la designación de Santafé como sede provisional de gobierno, ahora llamada Bogotá, en una forma simbólica de renunciar al pasado colonial. Era el primer esfuerzo por darle forma y estabilidad a un Estado que seguía en guerra con la Corona española, pues las tropas independentistas continuaban en campañas por el Caribe, el sur de la Nueva Granada, Ecuador, Perú y el país que, en aprecio por el aporte de Bolívar a su lucha, se bautizó como Bolivia. Con este proyecto se le daba aire a la idea ilustrada de que solo los Estados poderosos tenían peso en la toma de decisiones de la política mundial.

Sin embargo, aquella idea de un Estado extenso y fuerte solo funcionó para la guerra. Hecha la paz, una serie de factores internos, provocados por los propios líderes de la Independencia, demostraría que la vida independiente era un camino lleno de tropiezos. Para el vicepresidente Francisco de Paula Santander, resultó muy difícil gobernar un territorio tan extenso, con una economía afectada por la guerra y con un pulso permanente con los poderes políticos locales, deseosos de ensayar una mezcla del sueño de la autodeterminación política con la ambición personal. En ese proceso, chocaron los dirigentes políticos de la Nueva Granada, en su mayoría jóvenes y civiles,





con los venezolanos, muchos de ellos oficiales del ejército, formados en la guerra de independencia y esparcidos por las principales ciudades del país. La rebelión en Venezuela del general José Antonio Páez, en 1826, sería la primera evidencia de esas dificultades. Su movimiento buscaba una mayor autonomía regional y se extendió al Ecuador, donde el conflicto estalló por el perjuicio de la liberalización de la economía al mercado local de manufacturas.

El regreso de Bolívar en ese mismo año, un hombre ilustrado, pero también de guerra, cuyo liderazgo se había cimentado en las campañas militares, no solucionó los conflictos. La crisis dividió a la dirigencia política entre partidarios de establecer un sistema federal y quienes deseaban fortalecer aún más la figura presidencial. Ambas posiciones se encontraron en la Convención de Ocaña, un nuevo congreso convocado en abril de 1828 para salvar la unión. Allí la mayoría, liderada por Santander y en representación de grupos emergentes de comerciantes y propietarios menores, planteó una nueva constitución federal, con el descontento de la minoría, simpatizante de Bolívar y aliada con la Iglesia, algunos jefes militares y las familias más ricas de las principales ciudades, deseosa de hacer más fuerte el régimen. La convención se disolvió sin lograr ningún consenso, facilitando que Bolívar asumiera una dictadura en la cual se revirtieron muchas de las reformas políticas y económicas prometidas bajo la Independencia e implementadas mientras Santander estuvo al mando.

La respuesta de los opositores fue también agresiva mediante la Conspiración Septembrina, un movimiento de detractores

de Bolívar que asaltó el Palacio Presidencial con el fin de asesinarlo, lo que desencadenó una fuerte represión por parte del Gobierno, la cual incluyó el destierro de Santander —cuya participación en los hechos hoy todavía se discute— y el fusilamiento del héroe naval José Prudencio Padilla, acusado meses antes de intentar levantar a los negros y mulatos de Cartagena. Posteriormente, en 1829, los aliados de Bolívar enfrentaron alzamientos en Cauca y Antioquia en defensa de la vieja Constitución, en los que fue asesinado otro general destacado de la Independencia, el joven José María Córdova. Para el momento en que Bolívar se convenció de que su retiro podía remediar la grave crisis política, Páez lideraba la separación de Venezuela y el también venezolano Juan José Flores la del Ecuador, en medio de las intrigas políticas en las que fue asesinado Antonio José de Sucre, el líder del partido bolivariano menos comprometido en los conflictos.

Cuando Bolívar murió, en diciembre de 1830, la Nueva Granada, que incluía al actual territorio colombiano más Panamá, ya tenía una vida separada. El país resultante llegaba a una nueva era afectado por la pobreza de la inmensa mayoría de sus habitantes, la fragmentación de su territorio y la incapacidad administrativa de sus gobernantes, mientras el general bolivariano Rafael Urdaneta establecía una nueva dictadura. A principios de 1832, luego de derrotar a este último, se estableció la Constitución de la República de la Nueva Granada, en un intento por conciliar los viejos conflictos: se restablecieron algunas reformas implementadas en 1821, se concedió una autonomía limitada a las asambleas provinciales (como aquella





en la que años después se ampararon los fundadores de Manizales) y continuaron algunas de las instituciones económicas coloniales. Así, una república frágil nacía de nuevo.

Además de experimentar cambios políticos, la Nueva Granada independiente debió adaptarse a las nuevas condiciones económicas que se implantaron en el país. Para sostener la guerra de independencia, el Gobierno de la Gran Colombia negoció préstamos a bancos en Europa, lo cual hizo que a lo largo del siglo XIX el país destinara buena parte de sus recursos a pagar esa deuda; de la misma forma, la guerra de independencia también generó el abandono de haciendas, minas y puertos, afectando su desarrollo, como fue, por ejemplo, el caso de Cartagena, escenario de devastadoras batallas. Bajo los gobiernos de Santander en 1833 y su sucesor, José Ignacio de Márquez, en 1837, se intentó solucionar ambos desafíos con el estímulo a la industrialización y a la banca privada, con empresas que quebraron debido a lo reducido del mercado.

La difícil situación material invitaría a acelerar las reformas económicas prometidas desde la Independencia. Así fue como a partir de 1847 se eliminaron la mayoría de los controles del Estado a la economía, garantizando el libre comercio con los mercados internacionales, lo que se conoce como librecambio. Esta medida favoreció el comercio y la agricultura, reemplazando esta última a la minería como la principal actividad exportadora del país, y permitió el primer gran cambio tecnológico en el transporte, al introducirse la navegación a vapor por el Magdalena, y la construcción en 1855 del ferrocarril que atravesaba el istmo de Panamá. Sin embargo, el librecambio también

afectó el mercado local de manufacturas, incapaz de competir con las mercancías importadas de Europa y Norteamérica. Los artesanos perjudicados vieron en esta época la posibilidad de convertirse en un nuevo grupo político activo, organizado bajo las Sociedades Democráticas, instituciones donde se impartía educación básica y capacitación técnica, además de que se organizaban allí grupos de resistencia a las reformas económicas.

Por la misma época, los cambios generados en la economía y la sociedad hicieron que a mediados del siglo XIX se formaran dos grupos antagónicos que se disputaban el control del Estado, los cuales serían el origen de los partidos políticos que durante siglo y medio dominaron la vida del país: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sus primeras ideas fueron publicadas en la prensa por Ezequiel Rojas en el primer caso y Mariano Ospina Rodríguez en el segundo, curiosamente dos participantes del atentado contra Bolívar de 1828. Los liberales defendían el librecambio, el federalismo y la abolición de la esclavitud, además de promover la separación entre el Estado y la Iglesia católica, y promovían la libertad religiosa y de expresión. Los conservadores creían que las reformas del Estado y la economía debían ser graduales, por lo que algunos defendían una economía proteccionista y, además, estaban convencidos de que era necesaria la influencia de la Iglesia en la educación y las leyes para mantener una estabilidad social y política.

El primer enfrentamiento electoral entre ambos partidos ocurrió en 1849, en el que, bajo la presión de los artesanos de Bogotá, resultó elegido el liberal José Hilario López. Las reformas implementadas por su Gobierno condujeron a la supresión





definitiva de las instituciones coloniales: se eliminó el control del Estado sobre la Iglesia, la esclavitud fue por fin abolida en 1851, se eliminaron los resguardos indígenas y el Estado renunció al monopolio que tenía sobre la explotación de tabaco, el cual se convirtió en el principal producto de exportación del país. Detrás de estos cambios también venían propuestas políticas tan excepcionales como breves, como el matrimonio civil, establecido en todo el país en 1853 pero abolido cinco años después, o el revolucionario derecho al voto concedido en 1854 a las mujeres de la provincia de Vélez, si bien no hay certeza de que alguna vez las ciudadanas veleñas hayan participado en algún proceso electoral.

A pesar de los logros en la modernización de las instituciones, las reformas liberales también reflejaban los conflictos entre los grupos políticos del siglo XIX. Aunque la Independencia estableció las elecciones, muchas veces sus resultados eran alterados por las autoridades, ante lo cual el medio elegido para acceder al control del Estado era la guerra. Esta situación reflejaba la debilidad del sistema político del país. La afiliación a un partido político no se daba siempre por preferencias ideológicas, sino que se aprovechaban las conexiones sociales de familias, pueblos o haciendas. De esta manera, terratenientes y jefes políticos locales aseguraban la lealtad de los sectores populares y movilizaban fácilmente a sus seguidores en tiempo de guerra o elecciones para que simpatizaran por su bando.

En 1830, tras la disolución de la Gran Colombia, se daría la primera de esas guerras civiles, entre los sectores militaristas y santanderistas, en la que los segundos se hicieron al poder;

en 1839, los poderes políticos regionales se dividieron entre partidarios del Gobierno y opositores en la llamada "guerra de los Supremos", lo cual reflejó el liderazgo y la capacidad de desestabilización que aún poseían los militares veteranos de la Independencia. Ya formados los partidos tradicionales, se sucedieron dos conflictos. En 1851 los esclavistas conservadores, con el apoyo de la Iglesia, se alzaron contra el Gobierno liberal, en protesta por las reformas adelantadas por José Hilario López. Pero el más complejo de los conflictos ocurrió en 1854, cuando los artesanos y algunos jefes militares proteccionistas depusieron al presidente José María Obando y establecieron una dictadura en cabeza del general José María Melo. Meses después, una alianza de caudillos regionales de ambos partidos derrotó a Melo y, siguiendo una constante herencia de venganzas políticas, reprimió a los golpistas. Así, los conservadores y la aristocracia liberal lograron imponer el librecambio.

Los poderes regionales, igualmente, terminaron inclinándose por el federalismo en las Constituciones de 1853 y 1858. Sin embargo, los roces entre ambos partidos continuaron por la cuestión religiosa y los límites de las autoridades locales respecto del Gobierno nacional, ahora en cabeza del conservador Mariano Ospina Rodríguez. La enorme dificultad por cohesionar una sociedad alrededor de la joven república no fue solucionada por el Estado, sino por el poder de convocatoria que en todo el país tuvieron los partidos políticos, incluso entre los sectores populares que se vincularon con ellos por familiaridad con su región, su vereda, su lugar de trabajo o su parroquia. Una nueva guerra civil puso a prueba ambas fuerzas a partir de 1860,





cuando Tomás Cipriano de Mosquera, expresidente y antiguo oficial de la Independencia, se alió con los jefes liberales, se rebeló contra el Gobierno conservador y lideró la única guerra civil de la historia colombiana donde resultó triunfante el bando sublevado.

## VIVIR LA CIUDADANÍA: EL TERRITORIO Y SUS HABITANTES

Mientras las constituciones y los partidos en disputa imaginaban un país regido por los nuevos valores republicanos, una sociedad empobrecida debía sobrevivir al margen de las decisiones de sus élites políticas. La Independencia había significado la destrucción de buena parte de la infraestructura portuaria, el abandono de haciendas, minas y caminos y el desplazamiento de población productiva, incluyendo a comerciantes y propietarios que se fueron del país al caer derrotado el bando por el cual simpatizaban. La consecuencia más imprevista del sueño independentista, tan admirado entre los ilustrados de Europa y Norteamérica, había sido, precisamente, desconectar al país del mercado mundial.

Para volver a integrar al país en el mundo fue necesario el impulso de nuevas actividades económicas, en un desfile de ensayos y errores que tomaría casi todo el siglo XIX. Así fue como cada cierto tiempo algún producto de exportación monopolizaba la tierra, el trabajo y el comercio, los cuales eran, sin embargo, ciclos fugaces que no favorecían la continuidad, ni mucho menos la modernización del sistema productivo. La

extracción de oro fue importante hasta 1860, y luego fue desplazada por el tabaco, que venía en auge desde la adopción del librecambio y que tuvo a la población de Ambalema como su epicentro. Incluso productos de extracción silvestre como la quina, utilizada para combatir la malaria, o el añil, empleado como colorante de textiles, lograban momentáneamente captar el interés de la economía global. Pero la nueva economía era un reino de la especulación donde, por ejemplo, el algodón experimentaría un auge temporal debido al cese de su producción en Estados Unidos por su guerra civil.

A pesar de todo, una élite agraria lograría beneficiarse de las reformas económicas. La eliminación de los resguardos permitió, por ejemplo, que muchos particulares accedieran a grandes extensiones de tierra, al tiempo que la decadencia del sector minero hizo que los Gobiernos promovieran la agricultura y la ganadería como principales actividades. Así, la tierra se consolidaba como la principal fuente de riqueza y poder material durante el siglo XIX. La misión que creían tener aquellas nuevas élites, además, era desarrollar el país cuanto se pudiera en tiempo de paz: "Después de tantas agitaciones, de tantos partidos y convulsiones terribles, ninguna profesión puede inspirarnos mejor que la agricultura", sentenciaba en 1833 el ministro y diplomático Rufino Cuervo Barreto.

En medio de este pulso por el desarrollo económico y por la acumulación de tierras, las empresas colonizadoras se convirtieron en un nuevo agente de cambio. Ocurrió en el valle del Magdalena, en los Llanos Orientales y muy especialmente en las selvas de las cordilleras Central y Occidental, las





cuales contaban con grandes extensiones de tierra despobladas. Debido al aumento de la población en Antioquia y a la concentración de la tierra en unas pocas haciendas, numerosos campesinos pobres migraron hacia esas regiones por entonces deshabitadas, en lo que hoy son los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y, posteriormente, algunos municipios del norte del Valle del Cauca y el Tolima. En esa migración participaron diferentes sectores sociales: a veces eran campesinos por su cuenta, marginados por la expansión de las haciendas; otras veces eran los mismos hacendados, quienes concedían terrenos a los campesinos con el fin de hacerlos aptos para la agricultura y la ganadería; y también era el Estado, que otorgaba permisos para la colonización de terrenos sin dueño. Con la colonización se expandió la frontera agrícola y se fundaron nuevas ciudades, como el ya citado caso de Manizales en 1849 o el de Pereira en 1863. La frontera agrícola experimentaba así una nueva expansión.

Pero ¿quién era y cómo vivía esa población que trabajaba conforme a los ciclos productivos y la ocupación de nuevas tierras? Pensemos en el caso de las comunidades que afrontaron los más drásticos efectos de las reformas liberales: indígenas y negros. La aspiración de libertad y autodeterminación de la Independencia reflejó también las desigualdades del país, que aún seguía anclado en los estamentos sociales de la época colonial. Aunque muchos podían estar inconformes, solo la clase dirigente vio asegurado un ascenso efectivo con la obtención de poder político. Por lo tanto, indígenas y afrodescendientes dividieron su apoyo a los dos bandos en contienda. Para algunos, el

viejo Gobierno colonial se consideraba una protección frente a los abusos de los terratenientes, muchos de los cuales lideraron la Independencia. Es por esto que los indígenas de provincias como Pasto y Santa Marta apoyaron a los realistas, al igual que los pueblos de negros del sur del país. Y, en general, algunos negros y mulatos libres hacían parte de los sectores populares que se movilizaban por todo el país en tiempos de agitación política. Los negros esclavizados, por su parte, se vinculaban al ejército que les prometiera su libertad.

Una generación después, el proyecto liberal prometía construir una comunidad de personas libres e iguales ante la ley. Pero implantar esos principios en una sociedad tan desigual implicó un esfuerzo que duró varias décadas. Ante la dificultad de eliminar las instituciones coloniales que a ojos de los dirigentes perpetuaban la desigualdad, se optó por realizar transformaciones graduales para desintegrar las comunidades indígenas y así incorporarlas a la nueva república. Se proyectaron la eliminación del tributo, la abolición de los resguardos y, en el caso de los Gobiernos conservadores, el impulso a misiones religiosas que estimularan el abandono de las prácticas culturales indígenas. La Constitución de la Gran Colombia de 1821 acabó con el tributo indígena, proyectando para el futuro la eliminación de las tierras de propiedad colectiva y autorizando su parcelación y su venta a particulares. A lo largo del siglo XIX los indígenas impulsaron protestas y demandas judiciales contra la aplicación de estas leyes, especialmente en las comunidades con mayor población aborigen como La Guajira y los actuales departamentos de Cauca y Nariño.





Las comunidades negras, por su parte, se enfrentaron a la cuestión de cómo la nueva república, con sus promesas de igualdad, iba a asumir que en el país se mantenía aún la práctica más reprobable que haya tenido la humanidad: la esclavitud. La Independencia favoreció las opiniones que condenaban esta actividad y se consideró su prohibición desde muy temprano, hecho que mostró el conflicto entre los partidarios de la abolición y los propietarios de haciendas y minas esclavistas. La solución de la Constitución de 1821 fue la llamada "Libertad de Vientres", según la cual los hijos de las mujeres esclavas nacidos desde ese año serían libres al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, aunque esta medida planteaba que la esclavitud terminaría en el mediano plazo, solo se garantizaba la libertad a un número muy reducido de personas esclavizadas, además de que los frecuentes cambios de constituciones aplazaron su aplicación.

En medio del aplazamiento, en 1842 el Gobierno de Pedro Alcántara Herrán autorizó el restablecimiento del tráfico esclavista, el cual había sido prohibido desde la Independencia. Ante esta situación, algunas comunidades respondieron con la fuga, tal como ocurrió durante la época colonial cuando los esclavos fugitivos formaron palenques, una práctica que se repitió con mayor intensidad en el siglo XIX. El comercio de seres humanos llegó a su fin con la Ley de Libertad de Esclavos sancionada el 21 de mayo de 1851, pero solo cuando se les garantizó a los amos que iban a recibir una indemnización. Desde el 1 de enero siguiente, cerca de dieciséis mil neogranadinas y neogranadinos se liberaron en cumplimiento de la abolición, sin contar el número incierto de rebeldes que durante los quince años

anteriores se levantaron en las islas de San Andrés y Providencia, los alrededores de Barranquilla y Valledupar y numerosas haciendas desde Cali hasta el nevado del Ruiz.

Luego de las aboliciones de los resguardos y de la esclavitud, el sistema económico incorporó a un grupo muy diverso de campesinos libres como mano de obra. No solo se trataba de comunidades negras, ya que a esa vinculación también llegaban los agricultores mestizos, los artesanos de ciudades y pueblos y los pequeños vendedores de mercancías, asentados por caminos y ríos de todo el país. Las haciendas se convirtieron en un laboratorio de formas variadas de dominación laboral, mediante el trabajo salarial, el arrendamiento de tierras o la aparcería (la entrega de parte de la cosecha de un campesino al dueño de la tierra). Estas haciendas abastecían de alimentos a ciudades y pueblos, en contraste con la autosubsistencia que se practicaba en las pequeñas propiedades campesinas de los colonos que abrían caminos en la zona andina. Es así como la primera generación de neogranadinos independientes experimentó la movilización de campesinos a las zonas de producción de materias primas y unas condiciones mínimas de control poblacional ejercidas por un Estado débil, pero también por una Iglesia con una mayor capacidad de penetración social y por unos partidos políticos que formarían poderosas subculturas en todo el país durante un siglo. Para entonces también se aceleraba el crecimiento de la población: en 1851 había 2.240.000 habitantes en la Nueva Granada, el doble que en 1821.

La transición en medio de experimentaciones, brotes eventuales de violencia y desigualdades sociales también reflejaba





un desconocimiento del territorio a gobernar. De ahí que otra medida para estimular el progreso material fuera la exploración del territorio, sus recursos naturales y su población. Con este fin se impulsó en 1850 la Comisión Corográfica, misión científica dirigida por el italiano Agustín Codazzi, un oficial de las guerras napoleónicas como los que, una generación antes, habían llegado al país a colaborar en la guerra de independencia. Ahora, en tiempo de paz, Codazzi recorría el país acompañado de jóvenes neogranadinos para el levantamiento de mapas y la redacción de tratados de botánica, geografía, mineralogía y descripción de grupos humanos. Bajo esta empresa se desarrollaron los primeros mapas del territorio colombiano con criterio científico, a la vez que se elaboraron valiosas fuentes visuales y escritas sobre los tipos humanos que habitaban el país a mediados del siglo XIX. La comisión se enfrentaría a la realidad de una fragmentación regional heredada de la Colonia y al esfuerzo del nuevo Estado por unificarla.

Al final, el sueño de un Estado fuerte que conciliara los intereses políticos locales parecía al fin lograrse bajo la Constitución de 1863, redactada luego del triunfo de los liberales contra el Gobierno conservador, cuando la Nueva Granada era renombrada como Estados Unidos de Colombia. Pero para saber si se lograba ese sueño, todavía faltaban otras crisis políticas, otro cambio constitucional y la secesión de una parte del territorio.

**Para seguir aprendiendo**

El periodo de las primeras décadas de vida independiente del país no ha sido objeto de la misma producción bibliográfica que ha tenido la Independencia; sin embargo, se destaca el trabajo *Colombia: La construcción nacional* (2012), editado por Beatriz Castro.

El contexto de formación de los partidos tradiciones también puede estudiarse en el clásico *El pensamiento colombiano en el siglo XIX* (1982) de Jaime Jaramillo Uribe; *Partidos, guerras e Iglesia* (2006) de Fernán González, y *La batalla de los siglos* (2016) de José David Cortés. Por su parte, la cuestión de las comunidades negras puede verse en la obra colectiva *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia* (2002) del Museo Nacional y *Esclavitud en la provincia de Santa Marta* (2008) de Dolcey Romero, lo cual puede complementarse desde el contexto socioeconómico con la extensa *Historia doble de la Costa* (2002) de Orlando Fals Borda.

Para profundizar en los avatares de la economía del siglo XIX están *Colombia y la economía mundial* (1984) de José Antonio Ocampo, *Que nos tengan en cuenta* (1994) de Hermes Tovar y *Un Estado a crédito* (2015) de Pilar López. La transformación del territorio podemos conocerla en *Dibujar la nación* (2017) de Nancy Appelbaum, sobre la Comisión Corográfica, y en *Colonización antioqueña y vida cotidiana* (2019) de Albeiro Valencia Llano.

La producción audiovisual también es comparativamente escasa, pero se destacan el documental *El mapa de los sueños inconclusos* (Universidad Nacional, 2010), sobre Agustín Codazzi, y las series *La libertad de los esclavos* (Promec, 1986) e *Invisibles* (Señal Colombia, 2014), disponibles en RTVCPlay.



# 7.

# El primer Estado-nación (1861-1903)

Es el año 1904 en el Teatro Municipal de Bogotá, donde una multitud se reúne para escuchar al controvertido conferencista Rafael Uribe Uribe. Desde joven, en su natal Antioquia, aquel hombre que va a dirigirse a la audiencia había acogido con pasión las ideas del Partido Liberal, llevándolas incluso a campos de batalla donde se había ganado el título de general. Con excepción de su apoyo al Gobierno en el alzamiento conservador de 1876, Uribe Uribe había perdido todas las guerras en las que había participado. Y en el momento en el que daba su conferencia, acababa de entregar las armas en el más devastador de todos los conflictos, uno que dejó al país arruinado, lleno de odios y con su territorio desmembrado tras la separación de Panamá. Por eso en sus palabras solo podía proponer la paz:

*En Colombia todo está por hacer. Como el siglo de vida independiente que pronto cumpliremos lo hemos pasado divertidos en el* sport *de la guerra,*

*estamos singularmente retrasados en todas las sendas del progreso. Tenemos toda una nación por reconstruir. Nuestros padres y nosotros mismos creímos hacer patria empleando los fusiles destructores. Necesitamos "hacer patria" con las herramientas fecundas del trabajo. Yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado, de una vez por todas y para siempre, a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas.*

Con ese discurso el general Uribe Uribe expiaba su participación durante buena parte de su vida en las guerras civiles que asolaron a Colombia en el siglo XIX. Su actitud resumía la historia de cuatro décadas de unas instituciones por cuyo fortalecimiento luchó toda una generación, en un esfuerzo lleno de conflictos sin resolver que se habían llevado por delante la estabilidad del país y la integridad de su territorio.

La república debía su formación al nuevo orden social que había sido creado con la Independencia, común al establecido en otras partes del mundo con la implementación del Estado moderno. Aclarado el consenso sobre el modelo político que debía tener el país, surgiría en la segunda mitad del siglo XIX una nueva idea, la de imaginarse que la población y el territorio gobernados por aquel Estado poseían tradiciones, identidades y valores culturales comunes. En esa tarea, por lo menos, las élites económicas compartían intereses que le daban una base material a ese proyecto. En resumen, ya se había formado un Estado, ahora había que formar una nación, es decir, había que inventarse que se gobernaba a un pueblo cuya existencia era homogénea, pero también, en aquella sociedad, había que





garantizar la posibilidad de contar con unas instituciones que pudieran apoyar su bienestar, su sentido de pertenencia y su memoria común.

Con ese fin había que fabricar una ideología lo suficientemente fuerte como para que la gran mayoría de la población del territorio se identificara entre sí, al tiempo que la economía del país seguía buscando cómo conectarse con eficiencia a un mercado global que pudiera permitir a las élites económicas su inserción en el capitalismo industrial. Pero en medio de unas instituciones que seguían siendo muy débiles, esa tarea no iba a estar exenta de muchas tensiones: entre grupos socioeconómicos, entre regiones, entre Iglesia y Estado, entre sectores hegemónicos y minorías y, por supuesto, entre liberales y conservadores. De esta manera, nuestra primera idea de nación se formaba bajo dos constituciones —1863 y 1886— y bajo las profundas tensiones entre la tolerancia de algún aspecto de la diversidad del país y el intento por someter a toda la población a un concepto muy limitado de identidad común. Fue así como la idea poderosa y aún vigente de lo que entendemos como Colombia, una nación, nació en medio de esa misma dualidad de la guerra y la paz que pregonaba Rafael Uribe Uribe en su discurso de 1904.

## COLOMBIA EN 1863, BAJO EL SUEÑO FEDERAL

Convencido de la conveniencia del federalismo, el veterano de la Independencia Tomás Cipriano de Mosquera había vencido en 1861 a los conservadores que controlaban el Gobierno de

la Confederación Granadina. En la rebelión triunfante, Mosquera estaba secundado por una nueva generación de políticos liberales que desconfiaban de su ambición política, pero que también veían en el triunfo de la revolución la posibilidad de implantar un nuevo ciclo de reformas, aún más audaces que las emprendidas diez años antes. Así, el liberalismo de la Nueva Granada, a pesar de padecer tensiones internas que nunca resolvió, lograba la implantación definitiva de su primer programa político.

Los liberales se reunieron en 1863 en la población antioqueña de Rionegro, donde redactaron una nueva constitución para el país, que a partir de entonces se llamaría Estados Unidos de Colombia. El nombre mismo de la república ya anunciaba una declaración de principios: "Estados Unidos" señalaba una profundización del federalismo en evocación al modelo norteamericano, mientras que el nombre aún más perdurable de "Colombia", en alusión a la antigua república creada durante la Independencia, surgía como la última ruptura con el pasado colonial, eliminando la expresión "Nueva Granada" impuesta tres siglos atrás por los españoles. Las nueve entidades que integraban la federación eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, dentro de cuyos límites surgirían los actuales treinta y dos departamentos colombianos, en un territorio que iniciaba en las islas caribeñas de San Andrés y Providencia (a cuyo pueblo raizal se envió una copia en inglés de la nueva carta política) y terminaba en una ancha línea imaginaria que se extendía a los Llanos Orientales y la selva amazónica. Sin embargo, aquel





trazado no era reconocido por ningún país vecino, hecho que ha alimentado hasta el presente el mito de que Colombia perdió miles de kilómetros cuadrados cuando esas fronteras fueron finalmente negociadas.

Bajo la nueva Constitución, llevando al extremo los principios federales, cada estado podía tener sus propias leyes, su ejército y su sistema de elecciones, por lo que casi todas las actividades del Gobierno nacional quedaban sometidas a la inspección de los Gobiernos locales. El programa liberal, por su parte, garantizaría a los ciudadanos la libertad religiosa y de expresión, incluyendo la de imprenta, al tiempo que se mantenía la eliminación de la pena de muerte. Prolongando el conflicto con la Iglesia, se mantendrían las leyes sancionadas en 1861 por Mosquera, bajo las cuales se expropiaron las tierras, las casas y los edificios que en todo el país pertenecían a comunidades religiosas, al tiempo que se ordenaba el cierre de los conventos que desacataran la orden. Los diputados de Rionegro, por su parte, impulsarían una reforma a la educación, buscando eliminar la influencia de la religión católica. Aquellas audacias, sumadas a la exclusión de los conservadores en el diseño del nuevo orden, llamarían a nuevos conflictos en el futuro.

Mientras diseñaba un nuevo Estado, el liberalismo triunfante experimentaba su propio conflicto entre los seguidores de Mosquera y los que se mantenían independientes de su liderazgo. Temiendo que alrededor del general se estableciera un caudillismo similar al de otros países del continente, los últimos lograron imponer periodos presidenciales de apenas dos años, amplios obstáculos legales para reformar la nueva Constitución

y un poder muy limitado del presidente en los eventuales conflictos que ocurrieran entre los estados. Esa misma tensión se repetiría en 1867, cuando un Mosquera reelegido en la presidencia intentó cerrar un Congreso mayoritariamente opositor, por lo que fue finalmente retirado a la fuerza del gobierno, lo que dio inicio al fin de su carrera política. Los vencedores de aquel conflicto, llamados posteriormente liberales radicales, pretenderían afirmar desde entonces el proyecto de la Constitución de Rionegro, al tiempo que establecían un círculo cerrado de jefes políticos del centro del país liderado por el tolimense Manuel Murillo Toro, el boyacense Santos Gutiérrez, el bogotano Eustorgio Salgar y el santandereano Aquileo Parra, quienes, por su fama de inalcanzables, fueron llamados el "Olimpo Radical".

A pesar de las eventuales exclusiones y los conflictos locales, reinaba el optimismo. Se creía que la federalización del país marcaba una nueva era de madurez política, a través de la dudosa creencia de que la población de cada territorio se había adherido a los Estados Unidos de Colombia ejerciendo plenamente su soberanía. Cada año había conflictos políticos en al menos un estado, inducidos por la frecuencia de unas elecciones corruptas; sin embargo, la descentralización extrema hacía que las perturbaciones del orden no afectaran a todo el país, lo cual permitió evitar guerras civiles durante catorce años, el periodo más largo de paz de todo el siglo XIX. Bajo la relativa tranquilidad de la federación, se iba proyectando la idea naciente de una identidad cultural común, así esta fuera en un principio limitada a la cultura de las élites de la región Andina. Bajo esta paz se fundaron la Universidad Nacional y una breve Escuela





de Artes y Oficios en 1867, una Academia de la Lengua en 1871 y se impuso el 20 de julio como fiesta nacional en 1872, al tiempo que se establecieron las pautas de un "arte nacional" en la pintura de José María Espinosa, Ramón Torres Méndez y Epifanio Garay, en la creación literaria de Jorge Isaacs, Rafael Pombo y Soledad Acosta de Samper y hasta en los estudios sobre la lengua castellana elaborados por Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro. Era la imagen de una joven nación que se autoafirmaba a través de la referencia a Europa occidental, factor que dificultó el reconocimiento de su propia diversidad regional, étnica y cultural.

La creación de aquella nación también requería de una base material, para lo cual era necesaria la movilización de los intereses económicos concretos que fundamentan un proyecto político. No era fácil, pues al país seguía costándole insertarse con éxito en la economía global. El auge del tabaco terminó hacia 1875, haciendo que la riqueza nacional girara alrededor de los inestables mercados de la quina (planta medicinal usada para el tratamiento de enfermedades tropicales) y el añil (colorante natural de origen silvestre), pero los tres productos decayeron cuando británicos y holandeses consolidaron sus propias zonas de producción en la India e Indonesia. Como alternativa, en la selva amazónica se iniciaba desde 1885 una "fiebre del caucho", la cual puso a la región en los ojos de empresarios y colonos. Allí extraían de los árboles de hevea la materia prima con la que por entonces las industrias de Europa y Estados Unidos fabricaban aislantes para maquinaria industrial, objetos impermeables y neumáticos. La falta de tratados de límites con Perú y Brasil, más la desidia del

Gobierno nacional, generaron una campaña infame de esclavitud y exterminio sobre los pueblos indígenas de la zona por parte de los caucheros, la cual sería denunciada cuarenta años después por José Eustasio Rivera en su novela *La vorágine*.

En medio de esos desaciertos, un grano vendría a salvar la economía del país: el café. El milagro se inició en Santander, donde el sacerdote Francisco Romero promovía su cultivo en los alrededores de Pamplona y Bucaramanga hacia 1865. La extensión de las fincas cafeteras a Cundinamarca y Antioquia hizo que diez años después los sacos de café integraran la cuarta parte de las exportaciones del país, gracias al buen recibimiento del producto en los mercados internacionales. Así el país se vinculó de forma efectiva a la economía mundial y de paso se estabilizó buena parte de la economía campesina, por lo que al final del siglo, como lo recuerda el profesor Armando Martínez Garnica, se desarrollaron otras economías alrededor de los cafetales que involucraron a toda la sociedad: las granjas para la alimentación de los trabajadores de las fincas, suministrada por igual por hacendados, arrendatarios y pequeños propietarios; los establos que criaban mulas y caballos para el transporte de los sacos al río Magdalena, además de las familias de arrieros que se encargaban de esa tarea; y las casas de costura y talabarterías para surtir de insumos a las haciendas. Posteriormente se abrió la posibilidad de invertir las ganancias del café en vías de comunicación, en el desarrollo de la industrialización y en la formación de un mercado interno.

Mientras el café y sus economías anexas crecían, la expansión de la frontera agrícola seguía su marcha, influyendo en el





desarrollo de algunas ciudades y beneficiando a otras a través del comercio. La continuación de la Colonización Antioqueña permitió la fundación de Pereira y Armenia, mientras que la búsqueda de bosques para la extracción de quina y caucho desarrolló a Neiva y dio origen a Florencia, así como la introducción de la navegación a vapor por el río Cauca aportó al crecimiento de Cali y las nuevas rutas de ganaderos y comerciantes hacia los Llanos permitieron el poblamiento de Villavicencio.

Por su parte, la próspera ruta del río Magdalena contribuyó al desarrollo de Barranquilla, a donde llegó el ferrocarril por primera vez en 1871, en una experiencia que se repitió diez años después, cuando la misma novedad tecnológica apareció en las jóvenes poblaciones ribereñas de La Dorada, Girardot y Puerto Berrío. Siguiendo la misma vía del progreso, a los puertos marítimos llegaba el tren, como Buenaventura en 1882, Santa Marta en 1887 y Cartagena en 1894, generando la misma sensación de avance que pudieron experimentar Bogotá y Cúcuta cuando las primeras locomotoras partieron de ambas ciudades en 1889. Todos estos proyectos viales, a pesar de su prolongada materialización en un país inestable, tuvieron como su mejor símbolo la inauguración en 1893 del muelle de Puerto Colombia, en la costa Caribe. Eran también los días de la primera línea telegráfica submarina, diecisiete años después de haberse efectuado la primera comunicación terrestre en 1865, y de la posterior introducción de los servicios públicos en las grandes ciudades: acueducto, tranvías —por ahora impulsados por mulas—, energía eléctrica, con la que llegaría el alumbrado público, y, para unos pocos cuando se acabó el siglo, teléfonos y cine.

Esa entrada de la joven nación al capitalismo industrial fue un trabajo arduo, emprendido en medio de las dificultades del territorio, las limitaciones económicas y la desventaja del país frente a la mayor capacidad económica de las potencias e inversionistas extranjeros. Así, la emoción de los días en que llegaba una novedad tecnológica no significaba un inmediato arribo del progreso, pues aquel avance se pagaba mediante concesiones generosas al sector privado para hacer viable la infraestructura, pero también para acabar enriqueciendo a unos pocos. Dentro del empresariado colombiano que lograría beneficiarse de ese difícil negocio, estuvieron los bancos privados a partir de 1870, que controlaron desde entonces el mercado financiero. También, brevemente, lograrían fortalecerse quienes buscaban el desarrollo a través del hierro y el carbón, imitando el modelo industrial británico y estadounidense. A ese último campo pertenecen los sueños de tecnificación de la minería en Antioquia y la aparición de ferrerías e industrias anexas en Pacho, Amagá y Samacá, como también los avances mucho más estables en la producción de alimentos y bebidas, cuyo ejemplo más notable fueron las fábricas de cerveza aparecidas a finales de siglo.

## Colombia en 1886, bajo la ilusión del orden

Una dura consecuencia del ciclo de reformas liberales del siglo XIX que concluyó con la Constitución de Rionegro fue el debilitamiento del Estado y la Iglesia a raíz de sus conflictos y su estrechez económica. La paz en todo el país se mantuvo hasta 1876, cuando los conservadores se alzaron contra el gobierno





de Aquileo Parra para frenar su proyecto de educación laica, lo cual permitió una breve unión de las dos facciones del liberalismo para derrotar con facilidad el levantamiento. La guerra demostraba dos rasgos de lo que vendría en los años siguientes: primero, la extensión de las simpatías por cada bando entre todos los grupos poblacionales, reflejo de una nación entera permeada por la rivalidad de los dos grandes partidos; segundo, la crisis del sistema federal y del liberalismo que lo había creado.

El hecho de que cada estado tuviera sus propias leyes e instituciones llevó a la percepción de un profundo desorden administrativo, y, al mismo tiempo, el descenso de las exportaciones condujo a una grave crisis económica. La Iglesia, a cuyo control habían renunciado los liberales radicales, ahora estaba bajo dominio absoluto de los conservadores. La política de conceder absolutas libertades económicas a un empresariado débil había fracasado, pues era imposible para los capitales privados cualquier emprendimiento sin ayuda del Gobierno. Frente a esta situación, los liberales volvieron a dividirse y surgió un sector partidario de revisar la cuestión religiosa, la autonomía de los estados y la posibilidad de una participación conservadora en el Gobierno. Así, cada vez cobraba más fuerza la idea de un gobierno central fuerte que garantizara la esquiva estabilidad política y económica.

A eso respondió el político cartagenero Rafael Núñez, quien como presidente del Congreso en 1878 presionaba por reformas al presidente Julián Trujillo en su propia ceremonia de posesión —"Hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa

fundamental o catástrofe", sentenciaba en su discurso—. Dos años después el propio Núñez asumía la presidencia junto con otros liberales que, como él, habían abandonado la corriente radical y contaban con el apoyo de los conservadores, unidos por la preocupación de fortalecer el Estado, buscar una mayor cohesión social y, siguiendo el proyecto cultural de dos décadas atrás, homogeneizar su propia idea de nación. En recuerdo de la vieja frase de su líder, el nuevo régimen sería llamado la Regeneración.

Los radicales no solo serían excluidos de la presidencia, sino que también lo serían de los gobiernos locales que aún controlaban, por lo que en 1885 se levantaron en armas contra el régimen. Con el triunfo del Gobierno, los radicales quedaban por fuera del escenario político colombiano y su Constitución moría, al convocarse un Consejo de Delegatarios para redactar una nueva carta política, con representación de los liberales nuñistas y los conservadores. Eran dieciocho delegados, dos por cada estado de la agonizante federación en representación de cada grupo triunfante, elegidos a dedo por jefes políticos regionales a su vez nombrados por el presidente Núñez, recordarían sus detractores, pero con una autoridad aprobada por la mayoría de los concejos municipales, dirían posteriormente sus defensores.

Así, la Regeneración hizo su gran obra, la Constitución de 1886, cuya redacción fue liderada por el líder conservador Miguel Antonio Caro, lo cual hizo que esta terminara reflejando los principales postulados de su partido. El país se centralizó bajo el nombre de República de Colombia, los estados





se convirtieron en departamentos y sus gobernadores fueron desde entonces nombrados por el Gobierno nacional. El poder ejecutivo se fortaleció, obteniendo un peso mayor sobre el Congreso, y se estableció un periodo presidencial de seis años. Se tendieron relaciones más cercanas con la Iglesia, al proclamar a la religión católica como la oficial del país. Pero en su peor rasgo, se restringió la libertad de expresión y se le otorgó al Gobierno la facultad de cerrar periódicos, además de que se restableció la pena de muerte.

Para los defensores de la carta del 86, su proyecto respondía al urgente deseo de fortalecer las instituciones. Ese Estado fuerte se reflejaba en la creación en 1891 de la Policía Nacional y de una breve Escuela Militar, como reacciones no solo a la frecuencia de las guerras civiles, sino también a un principio de autoridad que sus promotores creían puesto en duda por manifestaciones de descontento popular, cuyas expresiones más violentas ocurrieron en los motines de artesanos de Bogotá en 1875 y 1893 y de Bucaramanga en 1879. Frente a la fragilidad del sector privado, el Estado ahora monopolizaba la emisión de dinero, hasta entonces abierta a la banca privada, garantizando así su capacidad de intervenir en la economía; sin embargo, las exageradas emisiones de billetes para financiar las guerras civiles provocaron el cierre de la banca central en 1894 y la peor inflación de la historia en 1902.

Por su parte, la nueva Constitución también buscaba afirmar una auténtica vocación nacional, supuestamente ajena a modelos extranjeros. Esa idea del nuevo régimen se planteaba a partir del Concordato de 1887, en el que, en acuerdo con el

Vaticano, Colombia declaraba que la religión católica era un elemento esencial de la identidad y el orden en el país, al tiempo que la Iglesia recibía el control del registro civil de la población, mediante el rito del bautizo, y de la educación, a través de los colegios abiertos en todos los departamentos por las comunidades religiosas. Una medida tal vez coherente para una sociedad en su gran mayoría católica, pero donde quedaba absolutamente excluida la posibilidad de un modelo cultural laico, como el propuesto por la generación de constituyentes de Rionegro. La oposición liberal reaccionaría afirmando el carácter político que tendría entonces la educación superior, fundando las universidades Externado y Republicana (antecedente histórico de la Universidad Libre). La naciente opinión pública iba mermando así su entusiasmo frente al nuevo sistema político, mientras bajo cualquier excusa se cerraban periódicos, se desterraban disidentes, se establecían obstáculos electorales imposibles de vencer para la oposición y en general se lesionaban las garantías democráticas.

Con la muerte de Núñez en 1894, el poder ahora estaba en manos de Caro, por lo que la Regeneración se convertía en un régimen exclusivamente conservador, cuestión a la que se opuso un sector de su propio partido cuyos integrantes, en defensa de los principios tradicionales de su colectividad, se harían llamar los "conservadores históricos". La represión también dividió al liberalismo, con la aparición de un sector partidario de derrotar al Gobierno por medio de una insurrección armada, frente a los círculos controlados por los jefes regionales del partido, quienes aún creían en la posibilidad de hacer oposición a través de la





prensa y la cátedra. Tras un pequeño levantamiento en 1895, rápidamente controlado por el Gobierno, la guerra definitiva vino cuatro años después, en medio de una grave crisis económica generada por los elevados impuestos a las exportaciones.

De ese modo iniciaba la guerra de los Mil Días, llamada así por los tres largos años en los que se desarrolló. Los liberales, agrupados en numerosos y desordenados ejércitos regionales, intentaron unificarse en Santander para asegurarse así el control del río Magdalena y el camino hacia Bogotá. A pesar de que el general Rafael Uribe Uribe logró avanzar en esa misión al tomarse el camino de Pamplona en 1899, el Gobierno siempre contó con mejores recursos económicos y mayor capacidad para armarse y reclutar soldados. Así, los liberales cayeron derrotados en cada punto estratégico que quisieron tomarse: perdieron sus barcos en Gamarra, les fue cortado el paso a los refuerzos venezolanos que esperaban en Cúcuta y, en mayo de 1900, pereció casi todo el ejército que se había atrincherado en los alrededores de Bucaramanga. Esta última acción, conocida como la batalla de Palonegro, es el combate más largo y violento de toda nuestra historia: durante dos semanas más de siete mil colombianos murieron o fueron heridos a balazos y golpes de machete, en una demencial muestra del daño que podía hacer el fanatismo político.

La notoria desventaja militar de los liberales recrudeció la guerra. De un enfrentamiento entre ejércitos regulares se pasó a una táctica de guerrillas en la que los ataques por sorpresa, el pillaje y la violencia permanente contra la población civil se hicieron comunes en ambos bandos. Solo la bahía de Panamá,

asediada por los generales Benjamín Herrera y Belisario Porras, parecía dar esperanzas de triunfo a los rebeldes, pero la presión militar estadounidense sobre el istmo, cuyo comercio no podía detenerse, también los hizo retroceder. Los conservadores históricos, por su parte, hacían su propia lucha al deponer al presidente Manuel Sanclemente en favor del vicepresidente José Manuel Marroquín en julio de 1900, logrando así recuperar el poder, pero no terminar el conflicto. Hubo que esperar dos años para que Uribe Uribe firmara la paz con el Gobierno en la hacienda Neerlandia, mientras que Herrera hacía lo propio a bordo del acorazado Wisconsin, uno de los barcos anclados por Estados Unidos frente a la costa panameña para defender su ferrocarril. El país se devastó, el Partido Liberal se debilitó como nunca y los conservadores aseguraron el control de la política del país.

En Panamá, en la misma bahía donde se había firmado la paz, se desarrollaría la consecuencia más visible de la guerra de los Mil Días. Aunque el istmo era un territorio geográfica y económicamente apartado del resto del país, su dirigencia política había resuelto unirse en 1821 a la Gran Colombia y luego mantenerse dentro de la Nueva Granada. La región era un estratégico punto de tránsito entre el Pacífico y el Caribe, rasgo que definía no solo la vocación comercial de sus élites, sino también la disputa que sobre esta ruta hacían las potencias extranjeras, los partidos colombianos y las facciones políticas panameñas, en medio de conflictos que no pocas veces se expresaron en intentos separatistas. La construcción del ferrocarril por parte de empresarios norteamericanos hizo que Estados





Unidos ejerciera un control permanente sobre la región cada vez que se vieran amenazados sus intereses. Fue así como los desembarcos de sus tropas, con el consentimiento de los Gobiernos de Bogotá y Panamá, se sucedieron desde 1856.

El istmo también era la región más rica del país, gracias a que su posición le permitió insertarse en la economía global sin los tropiezos del resto de la república, por lo que el deseo de autonomía de sus élites era un tema permanentemente negociado con los gobernantes colombianos. Pensando en esa prosperidad, en 1878 se contrató una compañía francesa para la construcción de un canal interoceánico. Tras el fracaso de este proyecto, se abrieron negociaciones con Estados Unidos para concretar la obra, por lo que en 1903 el Gobierno de Marroquín suscribió un tratado por medio del cual Colombia se comprometía a ceder a perpetuidad la zona del canal a Estados Unidos y sus autoridades. Ante la negativa del Congreso colombiano de aprobar el tratado, la clase dirigente panameña promovió la independencia de Panamá, con el apoyo de los barcos de guerra norteamericanos, que no permitieron el paso de tropas colombianas. De esta forma, la separación fue inevitable y los panameños adelantaron por su cuenta las negociaciones para construir el canal.

Así iniciaba un nuevo siglo para Colombia, con una enorme devastación política y económica, con un nuevo orden institucional tan polémico como reciente, pero sobre el cual había que recuperar al país en todos sus órdenes. Como sentenciaba el derrotado general Uribe Uribe al final de esta era, quedaba toda una nación por reconstruir.

**Para seguir aprendiendo**

Sobre la transformación política del país en el siglo XIX pueden citarse *Rojos contra azules* (1994) de Helen Delpar, la tesis de Frédéric Martínez *El nacionalismo cosmopolita* (2001), la colección de ensayos *El radicalismo colombiano del siglo XIX* (2006) y, más recientemente, *Paz en la República* (2019), editado por Carlos Camacho, Daniel Gutiérrez y Margarita Garrido. Por su parte, *Del poder y la gramática* (1993) de Malcolm Deas y *La clase más ruidosa* (2002) de Marco Palacios exploran este periodo desde sus múltiples ámbitos sociales, económicos y culturales.

Para entender la economía de la época se recomiendan *El café en Colombia* (2001) de Marco Palacios y *Economía colombiana del siglo XIX* (2010), editado por Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez; sobre la guerra de los Mil Días los clásicos son *Café y conflicto en Colombia* (1981) de Charles Bergquist y *Memoria de un país en guerra* (2001), editado por Mario Aguilera y Gonzalo Sánchez, mientras que acerca de la cuestión panameña se recomienda el ensayo *Estado, nación y clases sociales en Panamá* (1997) de Olmedo Beluche.

Las relaciones sociales de la época se pueden estudiar en *El bello sexo* (1993) de Suzy Bermúdez, sobre las mujeres; *Sociabilidad, religión y política* (1988) de Gilberto Loaiza, sobre las relaciones Estado-Iglesia, y en *Cabezas duras y dedos inteligentes* (1997) de Alberto Mayor Mora y *1892: un año insignificante* (2018) de Max Hering, sobre el artesanado urbano.

Desde lo audiovisual, el país de la época se puede explorar en el cortometraje *El páramo de Cumanday* (Gabriela Samper, 1965), disponible en bibliotecas públicas, al igual que en las series de televisión *Adiós al amigo* (La Contra Banda/ANTV, 2019) y *La loca Margarita* (Canal Capital, 2019), sobre la guerra de los Mil Días.



# 8.

# El primer gran tránsito capitalista (1900-1930)

En febrero de 1920 la historia cambiaba en Bello. Hasta hace poco, esa población era un sencillo pueblo andino cuyos habitantes dependían de la economía campesina y de los productos que llevaban a la vecina Medellín. En el siglo que empezaba, Bello era uno de los municipios más poblados del país, con una migración de obreros atraídos por la industrialización, situación en medio de la cual ocurrió un suceso inédito.

Betsabé Espinal, una mujer de veinticuatro años, se puso de pie ante una multitud de trabajadoras que se aglomeraban a la entrada de la Fábrica de Tejidos. La joven tomó la vocería de sus compañeras en una huelga en la que pedían igualdad salarial con los hombres, pues recibían la mitad de su sueldo, aunque ellas los cuadruplicaban en número; también pedían el cese de las multas constantes, protección en caso de enfermedad en medio de incomodidades como la obligación de trabajar descalzas y, aparte, denunciaban casos de abuso sexual

cometidos por algunos supervisores. Ese día las obreras antioqueñas avisaban que la exclusión social, económica y política de las trabajadoras no podía volver a tolerarse jamás en su pequeño mundo, el cual perfectamente podía reflejar situaciones parecidas que en su tiempo ocurrían en otros lugares de Colombia. Ellas aspiraban a cambiar su cotidianidad, aunque tal vez no supieran que sus reclamos cambiaban la historia de todo su país.

Y es que muchas cosas de ese mundo eran distintas a las de la Colombia del siglo XIX: ahora había una economía en la que las dinámicas urbanas, aunque aún minoritarias, lograban un impacto decisivo en la vida pública, y existía una naciente clase obrera que expresaba conflictos sin resolver contra un empresariado también inédito en el país. Ese fue, pues, el contexto en el que se dio aquel suceso en una próspera fábrica textil, levantada en lo que hasta hace poco era una pequeña comunidad agraria. Y a pesar de ser un incidente local, las posibilidades de resolver esta huelga reflejaban también el mundo político de su tiempo, movido entre la posibilidad de establecer una espontánea organización popular, el reconocimiento de las instituciones a la legitimidad de la protesta y la tentación que siempre tuvo el establecimiento de reprimir con violencia un movimiento que le resultaba completamente desconocido. En todo aquello, la modernización económica que en el siglo anterior se expandió por Europa occidental y Norteamérica a través de la industrialización se reflejaba ahora en Colombia con sus luces y sus sombras.

El país transitaba hacia una sociedad capitalista luego de los esfuerzos que en el siglo XIX naufragaron entre crisis





económicas y conflictos políticos. Así ocurría en un centro de producción textil que vendía su mercancía a otras regiones, en un mercado sostenido por la inversión de un naciente empresariado, local en unos sectores y extranjero en otros. Era un orden claramente dividido en clases sociales, al cual se sumaba un grupo de obreros asalariados. Era un tiempo en el que nuevas formas de racionalización productiva y a veces nuevas tecnologías llegaban a cambiar la economía de la ciudad y el campo. Eran también los años de concreción de una esquiva estabilidad institucional, en medio de la cual había gente que se sentía con el derecho de irse a la huelga sin ser perseguida por ello. Era el inicio del siglo XX en Colombia, de la necesidad de dirigentes y gobernados de responder a unas dinámicas políticas y económicas que cambiaron con una rapidez asombrosa no solo entre las jóvenes obreras de Bello, sino también entre los empleados públicos de Bogotá, los trabajadores portuarios de Girardot y Buenaventura, los recolectores de banano de Ciénaga, los importadores de maquinaria agrícola de Manizales y Cali y, por supuesto, entre congresistas, obispos o candidatos presidenciales. El país, como el siglo, era nuevo.

## Mandar y no mandar en una hegemonía

Luego de la devastadora guerra de los Mil Días, los conservadores controlarían el poder hasta 1930, poniendo en práctica buena parte de su proyecto, de ahí que este periodo sea conocido en la actualidad como la Hegemonía Conservadora. Se suele señalar dentro de los rasgos distintivos del régimen el

afianzamiento de la relación del Estado con la Iglesia católica, hecho que posibilitó la participación del clero en la política e incluso determinó su influencia en las elecciones y las decisiones del Gobierno. De igual forma, se desarrollaron políticas proteccionistas, encaminadas a limitar las importaciones mediante impuestos, las cuales contribuyeron al despegue de la industria nacional, el sector petrolero y la conversión del café en el producto de exportación por excelencia, tres procesos que se aceleraron debido al cierre de los mercados internacionales por la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la crisis económica que se desató en Europa luego del conflicto.

Sin embargo, la lectura de esta historia desde el antagonismo entre liberales y conservadores no permite hacernos una visión más detallada de esta época, pues el control conservador del Estado no fue absoluto, el programa político de este partido no fue rígido ni homogéneo y, en una muestra de cambios generacionales, también hubo alternativas al esquema bipartidista que marcaron una diferencia con la forma como se había ejercido la política en el siglo XIX. Las divergencias venían desde el tiempo de la Regeneración y mostraron su lado más agudo en 1900, cuando los "conservadores históricos" de José Manuel Marroquín depusieron al presidente Sanclemente, o en 1903, cuando el Senado dominado por Miguel Antonio Caro, jefe político de la facción depuesta, rechazó el tratado suscrito con Estados Unidos para la construcción del canal de Panamá, provocando la secesión del istmo.

Otra muestra más perdurable de estas diferencias de posiciones dentro de un régimen conservador supuestamente





homogéneo ocurrió a partir de 1904, cuando el general Rafael Reyes asumió la presidencia. Apartado de la actividad militar durante la última guerra civil, su gobierno representó un cambio drástico al modelo político de la Regeneración, al ofrecer una política de reconciliación con el liberalismo —en su apoyo diplomático, por ejemplo, estuvieron los generales liberales Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe— y al priorizar la recuperación económica del país por encima de las viejas disputas partidistas, bajo el lema de "menos política y más administración". El propósito de Reyes se logró impulsando una serie de reformas económicas para desarrollar la industria, las comunicaciones y el transporte, lo cual permitió la aparición de grandes fábricas textiles y de alimentos, además de la soñada extensión de la red de ferrocarriles. Al mismo tiempo, se logró la esquiva profesionalización del ejército con la creación de la Escuela Militar en 1907.

A pesar de su lema, no solo hubo política en su régimen, sino también nuevas formas de autoritarismo. Las diferencias de su gobierno con el Congreso lo llevaron a ordenar su cierre y a reemplazarlo por una asamblea constituyente a su medida y nombrada por él mismo, con una cuidadosa participación de los dos partidos. La persistencia del sectarismo también se dio en algunos sectores opositores a Reyes, como los que intentaron asesinarlo en 1906, lo que generó una dura represión. Su gobierno, previsto para durar una década, solo duró cinco años, debido a que en 1909 decidió iniciar negociaciones con Estados Unidos para que Colombia fuera reparada tras la separación de Panamá. La decisión, enormemente impopular

en una opinión pública aún dolida por el suceso, aumentó el desgaste del Gobierno y ocasionó la renuncia del presidente por telegrama, mientras se dirigía a Europa en barco.

Por su parte, la generación de jóvenes políticos que se opuso a Reyes también planteó una nueva forma de ejercer la política. Así, sectores moderados de ambos partidos conformaron la Unión Republicana, un intento de crear una tercera posición política que se declaró ajena a la hostilidad y los excesos que habían presentado los partidos tradicionales en el siglo XIX. Como prueba de su política, para 1910 fueron mayoría en la Constituyente, que tuvo presencia de todas las corrientes de la época. La mayoría republicana logró darle rasgos mucho más democráticos a la Constitución de 1886 al establecer la elección directa del presidente de la república, hasta ese momento efectuada por un colegio electoral. También se reformaron las elecciones para garantizarle a la oposición presencia en el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales; la Corte Suprema de Justicia recibió facultades para examinar la constitucionalidad de las leyes, y se abolió la pena de muerte. El periodo presidencial quedaría desde entonces reducido a cuatro años, con la prohibición de la reelección inmediata.

El nuevo mensaje sería un acuerdo de convivencia y coexistencia pacífica entre los partidos, personificado en la figura del presidente Carlos E. Restrepo, quien entregó el poder en 1914 a su adversario José Vicente Concha, líder del sector tradicional del conservatismo. Con este relevo se anunciaba una sucesión de dieciséis años de lo que ahora sí sería una auténtica hegemonía de partido, en la cual de nuevo la Iglesia influía en





la actividad política, en persona del arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo. Sin embargo, su control del Estado no fue absoluto, pues en más de una ocasión los conservadores debieron compartir el poder. Además, el arraigo del bipartidismo en los sectores populares hacía que la oposición pudiera ser numerosa en algunas asambleas y concejos, entidades que tenían una gran capacidad de control al Gobierno. Para la oposición era imposible acceder al poder, pero había un sistema que ofrecía garantías de pluralismo que jamás disfrutaron sus antecesores inmediatos.

La generación que dirigía este proceso desde las élites políticas se permitía por fin materializar la idea aplazada de una nación de instituciones estables. La primera tarea consistía en definir con claridad el territorio, estableciendo al fin los límites del país, mediante engorrosas negociaciones con los países vecinos: así fue como Nicaragua reconoció la soberanía sobre la región insular, Perú hizo lo propio con la salida colombiana al río Amazonas, a costa de unas escaramuzas armadas en 1911 y la cesión de Leticia en 1928, mientras que Colombia debió reconocer la prolongada presencia brasileña en las zonas que este país reclamaba desde mediados del siglo XIX. Por su parte, funcionarios de ambos lados de la frontera asumieron la ardua tarea de demarcar la línea pactada con Venezuela desde 1891. La división interior del mapa también cambió, al aparecer nuevos departamentos como expresión del desarrollo de centros urbanos emergentes (Atlántico, Caldas, Huila, Nariño y Valle del Cauca) y un nuevo concepto de administración de regiones periféricas por medio de las intendencias (Chocó, La Guajira,

Meta y San Andrés y Providencia) y las comisarías (Arauca, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Vichada).

En medio de la apertura democrática, surgían nuevos hitos en la formación partidista. Un ejemplo fue la coalición de jóvenes liberales, conservadores y republicanos en la candidatura presidencial de Guillermo Valencia en 1918, quienes luego influyeron en el juicio político que provocó tres años después la renuncia del presidente Marco Fidel Suárez. Para 1922, el Partido Liberal demostró su recuperación y se redefinió como una opción de gobierno, a pesar de que su candidato, el general Benjamín Herrera, perdió las elecciones contra un viejo adversario de la guerra de los Mil Días, Pedro Nel Ospina. En medio de las novedades políticas, también estuvieron los círculos obreros y artesanales que plantearon la creación de un minoritario Partido Socialista, el cual en 1921 logró elegir concejales en poblaciones industriales y un congresista en Antioquia. Incluso también a esa lista pueden sumarse los jóvenes del ala derecha del conservatismo que crearon en 1924 el grupo Los Leopardos. Al final de la década, el espacio ganado por la oposición se vio reflejado en las manifestaciones estudiantiles que, desde todas las tendencias, protestaron en Bogotá contra la corrupción en la administración de la ciudad y cuya presión logró la destitución de los funcionarios involucrados en las denuncias. La prensa, orientada por todas estas tendencias, gobiernistas u opositoras, se multiplicó y se mantuvo en el tiempo como nunca lo había hecho.

Sin embargo, en medio de la estabilidad persistieron algunas limitaciones de la vieja política o aparecieron otras nuevas. El





derecho al voto seguía limitado a varones que supieran leer y escribir o tuvieran una renta mínima, mientras que la influencia de párrocos, terratenientes o redes de manejo de los empleos públicos siguió siendo fuerte en muchas elecciones. De igual forma, la convivencia política no pudo evitar el asesinato de Rafael Uribe en 1914 —tras haber mantenido un agudo conflicto con sectores de ambos partidos—, cuyos móviles nunca se esclarecieron. La propia élite liberal local también supo perseguir a sus adversarios, como en el caso trágico del fusilamiento del abogado chocoano Manuel Saturio Valencia en 1907 —episodio al que luego se le atribuiría una persecución racial nunca comprobada—. De igual forma, los reclamos sobre fraude y falta de garantías empañaron la elección de Reyes en 1904 y llevaron al liberalismo a abstenerse de participar en las elecciones de 1926, ganadas sin contendor por Miguel Abadía Méndez.

En medio de ese ambiguo clima político, la esperada industrialización abrió paso a movilizaciones sociales perseguidas y reprimidas por un Gobierno amparado en las mayorías del Congreso, mientras el joven Partido Socialista Revolucionario se resistía a la clandestinidad ocasional a la que se condenaba y la mayoría de nuevos movimientos políticos se sometían al arraigo del bipartidismo en la población y a la estrategia electoral de liberales y conservadores. A pesar de la percepción de que el régimen era invencible, para 1930 el conservatismo concurrió dividido a las urnas, permitiendo un cambio de gobierno por la vía democrática, un positivo síntoma de estabilidad política que contrastaba fuertemente con los golpes de Estado y los regímenes totalitarios que por entonces emergían en buena

parte del resto del mundo. Por primera vez en cuarenta y cuatro años habría un presidente liberal.

## VIVIR Y MORIR EN EL CAPITALISMO

En 1910, veinte años antes de ese cambio de régimen, diferentes sectores del país celebraron el primer Centenario de la Independencia. Lo hicieron con ceremonias cívicas en las capitales de los departamentos, en las cuales se integraron las autoridades civiles y militares, la Iglesia, el sector privado, los trabajadores y los colegios. En un parque de Bogotá construido para la ocasión se celebró una pomposa exposición industrial, agropecuaria y artística; a lo largo del año, en ese y otros espacios públicos del país se inauguraron monumentos a la república y a sus fundadores; la recién fundada Academia de Historia editó un libro para la enseñanza obligatoria de su área entre los estudiantes de secundaria; los barrios de artesanos hicieron verbenas populares, y, desde Nueva York, los músicos de la Lira Antioqueña grabaron un "repertorio musical colombiano" que iba del himno nacional a canciones del folclor andino. Así, en medio de las limitaciones económicas, políticas y sociales, el país se redefinía para celebrar su primer siglo de vida republicana.

A pesar de la precariedad material, Colombia pretendía romper el viejo aislamiento regional por medio de la formación de un mercado interno y la aceleración de una migración cerrada a la población local, pues, con excepción de la minoría siriolibanesa y unas pocas familias de Europa occidental, Colombia nunca atrajo población extranjera, como ocurrió en





otros países del continente. El cambio demográfico también significó un desarrollo de las principales ciudades, reflejado en nuevos servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos; a su vez, la expansión urbana abrió paso a los primeros tranvías eléctricos. Iniciaba así una era industrial en un país mayoritariamente rural.

Las crisis del fin del siglo XIX habían aplazado ese sueño de la industrialización con la ruina de las pequeñas fábricas que existían en Cundinamarca, Boyacá o Santander, pero, para 1905, la mejora en los precios del café, controlado por productores locales, recuperó las esperanzas. Casi al mismo tiempo, se daría el auge de la explotación del banano en la región Caribe, dependiente en su mayoría de la inversión extranjera y de la empresa estadounidense United Fruit Company. Esa modernización de la economía rural, sumada a los excedentes que produjo y a la experiencia de la tradición artesanal, permitió el nacimiento de las grandes industrias. Con ellas apareció un fuerte grupo de empresarios en ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín, quienes promovían el fortalecimiento de un mercado interno, la inversión de capitales provenientes de las exportaciones y se mostraban partidarios de la inversión extranjera, especialmente la vinculada al sector petrolero. Era la época de la aparición de las licoreras locales luego de concentrar los derechos de producción en los departamentos, como también de la moderna industria del papel con Carvajal en 1904, del sector textil con Coltejer en 1908 o del innovador surgimiento de la aviación con Scadta en 1919.

Esa expansión de la industrialización y las economías rurales también significó el impulso de las retrasadas obras de

infraestructura que el país esperaba por medio siglo, muy modestas en comparación con el resto del mundo, pero urgentes para una economía ansiosa por insertarse en el capitalismo industrial. Durante la dictadura de Reyes se abriría la Concesión de Mares para la explotación petrolera y se construirían las plantas de El Charquito para surtir de electricidad a Bogotá y Guadalupe para Medellín, mientras que las líneas de ferrocarril finalmente conectarían las capitales con el río Magdalena a través de proezas como el Túnel de la Quiebra. El Ferrocarril del Pacífico por fin llegaba a Cali, mientras se ampliaba el puerto de Buenaventura, al igual que se inauguraba el de Bocas de Ceniza en el Caribe. Para 1919, la Zona Bananera y la isla de San Andrés se conectaban al interior del país por telegrafía inalámbrica, mientras que Manizales y Ocaña se abrían al mundo por medio de un ingenioso sistema de cables aéreos. La inversión en obras públicas hizo que durante la administración de Pedro Nel Ospina las exportaciones colombianas aumentaran, la industria incrementara su capacidad de producción y la población urbana iniciara una curva de crecimiento que persistiría durante todo el siglo.

Buena parte de la inversión pública fue resultado de la indemnización que Estados Unidos otorgó a Colombia en 1922 por la separación de Panamá, asunto que afectó durante dos décadas la política exterior colombiana, pero en el cual triunfó el pragmatismo de las élites colombianas, aconsejadas por la doctrina de "Mirar hacia el Norte" del presidente Marco Fidel Suárez. Aquella ganancia ocasional hizo necesaria la reorganización de las finanzas del Estado, con el objetivo de estabilizar





el comercio exterior y ofrecer seguridad a los inversionistas. Así se fundaron en 1923 el Banco de la República y la Contraloría General de la Nación, al tiempo que se impulsó la creación de sociedades anónimas y el endeudamiento público y privado. Era la "prosperidad a debe", como se le llamó en un debate entre el congresista opositor Alfonso López Pumarejo y el ministro de Hacienda Esteban Jaramillo.

Estos desarrollos también significaron cambios en el conocimiento, la tecnología y la vida cotidiana, pues, al igual que en otros lugares del mundo, la sociedad colombiana debió adaptarse a nuevas formas de producir, transportarse y consumir. La accidentada topografía del país permitió el rápido desarrollo de la aviación comercial, convirtiéndose esta en el medio de transporte que logró unificar el territorio colombiano durante el siglo XX; a su vez, el desarrollo petrolero convirtió a Barrancabermeja en un centro destacado del movimiento obrero, y el crecimiento de la industria cervecera afectó el mercado de bebidas tradicionales como la chicha. La influencia cultural inglesa indujo a que las élites establecieran los primeros clubes sociales, mientras que los sectores populares se interesaron por deportes como el fútbol y el béisbol, primero como parte de la incursión de la educación física en los colegios y luego como un espectáculo público, cuestiones que se integraron en 1928 con la inauguración en Cali de los primeros Juegos Nacionales, a imitación de los Olímpicos.

Mientras tanto, desde arriba se forjaba una idea de la "cultura nacional" a partir de la obra intelectual de Carlos Arturo Torres y Baldomero Sanín, la pintura de Andrés de Santa María,

el teatro de Luis Enrique Osorio, el cine de los hermanos Acevedo y la obra literaria de Guillermo Valencia, Julio Flórez y José Eustasio Rivera, pero también con las letras disidentes de José María Vargas Vila y José Asunción Silva, rehabilitado póstumamente tras su suicidio, que en 1896 avergonzó a las élites. Por su parte, la opinión pública tomaba una masificación sin precedentes a través de periódicos convertidos en prósperas empresas editoriales como *El Espectador, El Tiempo, El Colombiano* y *Vanguardia Liberal,* del desarrollo del periodismo gráfico en la revista *Cromos* y del humor político a través de las caricaturas de Ricardo Rendón.

La imagen de un país próspero, por supuesto, no estaba exenta de peligros, como el maremoto que en 1906 afectó a Timbiquí y Tumaco, el terremoto de 1917 que estremeció a Bogotá y destruyó a Villavicencio, los más de ochocientos capitalinos muertos con la llegada de la pandemia de gripe al año siguiente o el devastador incendio de Manizales en 1925. Esas emergencias imprevistas requirieron del aumento de profesionales en ciencias médicas, mientras que al crecimiento de ciudades y vías respondieron la arquitectura y la ingeniería civil, al igual que la propagación de nuevos hábitos alrededor de la salud pública, el aseo y la planeación urbana. Desde entonces el espacio público también empezó a considerarse como sitio de recreación, con la construcción de grandes parques, como aquellos en los que se celebró el Centenario. De igual forma, las élites se desplazaron del centro de las ciudades hacia zonas exteriores como Boston y El Prado en Barranquilla, Chapinero en Bogotá o Manga en Cartagena, una situación también





planeada para los trabajadores con la construcción del Barrio Obrero de Cali o de Villa Javier, La Perseverancia y el 20 de Julio en la capital.

En ese contexto también aparecieron nuevas formas de rebeldía. Para esta época un poco menos de la mitad de la población adulta sabía leer y escribir —cifra baja, aunque muy superior al lánguido diez por ciento de 1905—, al tiempo que la educación primaria lograba la paridad de niños y niñas; la emergente clase obrera, si bien era apenas el cinco por ciento del país, ocupaba áreas claves de la economía como manufacturas, infraestructura, agroindustria y minería. La ya mencionada huelga de Bello de 1920 era promovida por mujeres, cuya participación política les era negada por las leyes, a pesar de la contribución de su sexo a esa prosperidad de su tiempo como maestras, estudiantes, telegrafistas, mecanógrafas, secretarias, enfermeras, empleadas domésticas, niñeras, tenderas, artesanas y, por supuesto, obreras. Su causa expresaba una reacción generalizada en su tiempo ante la falta de leyes que regularan sus derechos.

Así fue como un nuevo fenómeno político, hasta entonces desconocido para el país, surgió con fuerza. Las movilizaciones de trabajadores, hombres y mujeres, urbanos y rurales, se hicieron recurrentes entre 1919 y 1929, con más de diez huelgas por año. Los sectores más movilizados venían de la industria petrolera en Barrancabermeja y del transporte fluvial y ferroviario del resto del país. Solían exigir la reducción de una jornada laboral que era de doce horas o más, el acceso a servicios de seguridad social —atención en salud y pensión en

caso de retiro o incapacidad—, el derecho a organizar sindicatos y sociedades de ayuda mutua, más el aumento de los salarios. Los movimientos campesinos también crecieron durante esta época, debido a los conflictos entre colonos y los propietarios de grandes extensiones de tierras. En el Cauca y el Tolima se destacó la movilización de indígenas, opuestos a la expansión de las haciendas y la ganadería sobre sus territorios colectivos, liderados por Manuel Quintín Lame, un hombre cuya rebeldía le costó prisiones permanentes, el odio de la vieja élite de Popayán y su recuerdo perdurable en la historia de las luchas agrarias.

Por influencia del movimiento obrero de Europa, la mayoría de estas organizaciones acogieron el socialismo. Mientras las luchas obreras y campesinas se hacían más frecuentes, algunos de estos grupos crearon en 1926 el Partido Socialista Revolucionario, liderado por Ignacio Torres Giraldo, Raúl Mahecha y María Cano. Su causa coqueteaba con la Revolución rusa y su abolición de las clases sociales y la propiedad privada, como lo demostró en 1929 la fracasada insurrección de "los bolcheviques" de Líbano, Tolima, y la radicalización del movimiento en 1930 con la creación del Partido Comunista Colombiano, apoyado por Moscú. Sin embargo, en la tradicionalista sociedad colombiana esos líderes obreros también proclamaban que sus objetivos eran "la verdad de Cristo" o "todo lo bueno que soñaron las religiones antiguas", mientras que la presión del bipartidismo hizo que sectores destacados del liberalismo absorbieran buena parte de la organización obrera y sus demandas.

Por su parte, la respuesta de los Gobiernos conservadores fue reprimir las movilizaciones obreras a través de la policía y





el ejército; la expresión más grave de ello ocurrió a finales de 1928 en Ciénaga, Magdalena. Allí, los trabajadores de la United Fruit Company se movilizaron en rechazo a sus condiciones laborales, en una región donde la gran mayoría de actividades económicas eran controladas por esa empresa. El Gobierno nacional, temiendo una insurrección en todo el país o una intervención norteamericana como en tiempos de la separación de Panamá, militarizó la zona para dispersar a los huelguistas. En una acción del ejército, la multitud, agrupada en la plaza del pueblo, fue atacada a tiros, mientras que otros trabajadores fueron perseguidos y encarcelados. Con lo que desde entonces se conoce como la masacre de las Bananeras, el régimen mostraba su incapacidad de responder políticamente a un nuevo orden social y económico, en una acción que fue hábilmente denunciada por los jóvenes congresistas Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán.

Año y medio después, el liberalismo aprovechó la división conservadora y ganó las elecciones con Enrique Olaya Herrera y un programa que acogía buena parte de las aspiraciones de aquellos sectores emergentes. Como nunca hubieran podido hacerlo sus antecesores, Olaya promovió su imagen ante los electores utilizando la aviación, el cine y una poderosa novedad que hace un par de meses se exhibía en los almacenes de Barranquilla y Bogotá: la radio. El siglo XX ya estaba presente con todos sus rasgos.

**Para seguir aprendiendo**

De libros recientes que ofrezcan una perspectiva general sobre este periodo, se destacan *Los límites del poder* (2002) de Eduardo Posada Carbó y *Colombia: La apertura al mundo* (2015), editado por dicho autor, al igual que *La hegemonía conservadora* (2018), editado por Rubén Sierra Mejía. Sobre el rol político y social de la Iglesia pueden leerse *El episcopado colombiano* (2003) de Ricardo Arias y *Religión, cultura y sociedad en Colombia* (2004) de Patricia Londoño Vega.

Para temas agrarios puede leerse la obra ya citada de Marco Palacios *El café en Colombia* y *Colonización y protesta campesina* (1988) de Catherine LeGrand. Sobre el proceso de industrialización desde las élites, una obra muy completa es *Empresas y empresarios en la historia de Colombia* (2002), compilada por Carlos Dávila con la Universidad de los Andes, mientras que para abordar el tema desde el enfoque de los trabajadores está el clásico de Mauricio Archila *Cultura e identidad obrera* (1991).

El contexto cultural de la época puede conocerse en la *Historia de la fotografía en Colombia* (1983) de Eduardo Serrano, el estudio *Ricardo Rendón* (1984) de Germán Colmenares y la *Historia social del cine en Colombia* (2014) de Álvaro Concha Henao. Sobre vida intelectual, la obra colectiva *Pensamiento colombiano del siglo XX* (2007-2013) de la Universidad Javeriana es el proyecto más completo disponible.

En cuanto a obras audiovisuales ambientadas o realizadas en la época, pueden verse la película *María Cano* (Camila Loboguerrero, 1990), sobre el movimiento obrero; la colección *Cine Silente Colombiano* de la Fundación Patrimonio Fílmico, sobre cultura, y los episodios dedicados a Alejandro Echavarría, Carlos E. Restrepo y Betsabé Espinal de la serie *Más allá del tiempo* (Teleantioquia, 2019).



# 9.

# La primera sociedad de masas (1930-1958)

Una defensa común de los procesos electorales consiste en reconocer su eventual capacidad de transformar la vida política de las sociedades y lograr radicales alternancias en el ejercicio del poder. En Colombia, de forma notable, eso sucedió en dos momentos claves de su historia política. El primero de ellos ocurrió el 9 de febrero de 1930, cuando, ante un conservatismo dividido, la oposición liberal logró elegir presidente a Enrique Olaya Herrera, lo cual puso fin a dieciséis años de un control casi absoluto del Estado por parte del Partido Conservador y más de cuatro décadas de dominio en la vida política del país por parte de esa colectividad. El triunfo liberal significaba una esperanza de cambio para sectores políticos que aspiraban a una reforma de las instituciones y su relación con la sociedad. Este evento electoral ocurría con una participación sin precedentes —más de ochocientos mil electores—, a pesar de que

para votar había que ser hombre y cumplir con requisitos de patrimonio o alfabetización.

Una generación después, el 1 de diciembre de 1957, la ciudadanía colombiana era consultada por primera vez en su historia para aprobar cambios a la vieja Constitución de 1886. A la cita se convocó a hombres y mujeres mayores de edad, sin excepciones, para participar en un plebiscito apoyado por los sectores mayoritarios de los dos partidos tradicionales, con el fin de promover un régimen de coalición y la pacificación del país luego de una década de inestabilidad, de ocho años y medio de no poder votar con plenas garantías y, de hecho, tras cuatro años de haberse suspendido las elecciones.

Entre uno y otro proceso hubo una compleja historia de violencia política, ejercida desde grupos a veces en el poder y otras afuera, además de un prolongado sectarismo que antecedió y acompañó las alteraciones del orden. Pero, casi al mismo tiempo, también hubo una historia de reformas, de modernizaciones y conquistas de derechos que transformaron al país. En ambos escenarios se abrieron las condiciones para alentar un papel más activo de las masas, es decir, del conjunto amplio de los diferentes grupos sociales. Las muchedumbres, hasta hacía poco tiempo sujetos pasivos en la conducción de la sociedad, se visibilizaban como nunca antes, al ser capaces de movilizar parte de la vida política y también como consumidoras en una economía transformada por la industrialización y el contexto internacional. Al tiempo, el conjunto de la sociedad se convertía en el receptor de nuevas formas de entender el país a través de una prensa en crecimiento, una cobertura





educativa ampliada y el potencial cultural de la radio, el cine y la publicidad.

Aquella, por lo tanto, no fue una generación que atestiguó pasivamente la República Liberal y la violencia bipartidista. Fue una sociedad que lideró y protagonizó buena parte de este proceso, como agente de cambio, como víctima, pero también y desde su cotidianidad como la manifestación viva de un país que en medio de sus traumas se hacía más moderno.

## Las masas y los partidos

Durante los dieciséis años posteriores a la elección de Enrique Olaya Herrera, en 1930, el país estuvo regido por gobiernos liberales, bajo los cuales se modernizaron el Estado y parte de la economía, en una ola de reformas que beneficiaron a grupos sociales en ascenso: obreros, campesinos, estudiantes y mujeres. Las políticas proteccionistas, heredadas del régimen conservador y extremadas bajo el cierre de mercados por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), prolongaron la estabilidad de la economía cafetera y contribuyeron a una segunda ola de industrialización, mientras que el plan de reformas sociales condujo en las ciudades a una creciente movilización de los simpatizantes liberales y a su transformación en el partido mayoritario. Además, y siguiendo los principios tradicionales del liberalismo, se limitó la intervención de la Iglesia en la educación y la cultura. La reforma constitucional de 1936, al consagrar la función social del Estado, fue la expresión más notable de todo este proceso.

Si bien al comienzo de su gobierno Olaya Herrera ofreció participación conservadora, las diferencias estallaron muy pronto por el control de unos cargos públicos reivindicados por los seguidores de un liberalismo excluido durante décadas. Con las elecciones de congresistas y concejales de 1931, en numerosos municipios ocurrieron choques armados con muertos y desplazamientos de militantes de ambos partidos, siendo particularmente grave el incendio de la ciudad de Montería. La coacción y manipulación de los votos por parte de jefes políticos locales también minó la concordia, especialmente entre la oposición conservadora que se abstuvo de participar en las elecciones nacionales a partir de 1933, permitiendo que Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos llegaran a la presidencia sin competencia. Por su parte, los viejos conflictos por el control de la tierra agudizaron una situación que también comprometió a instituciones como la Iglesia, al ponerse de parte de los conservadores, y la Policía, al reprimir las protestas en nombre del Gobierno. Los años 30 fueron así una antesala olvidada de la tragedia bipartidista que pronto se haría más intensa y que tuvo como epílogo la masacre de simpatizantes conservadores de Gachetá, Cundinamarca, en 1939.

Y no solo se trataba de una confrontación de militantes locales que se les habían salido de las manos a las élites en Bogotá, pues estas, gracias a la radio y a la expansión de la prensa, encontraron un contacto directo con sus electores. Así, el Congreso se convirtió en una tribuna de recriminaciones mutuas, e incluso de amenazas, como la que profirió Laureano Gómez si López Pumarejo se postulaba para la elección presidencial de





1942: "Haremos invivible la República". Ese mismo dirigente, desde el diario *El Siglo*, atacaba la corrupción de los funcionarios del Gobierno, pero también a los conservadores que aceptaban cargos públicos o tendía rumores sobre la legitimidad del sistema electoral. De la misma forma y en sintonía con los golpes de Estado de otros países del continente, un grupo de oficiales del ejército apresó en Pasto al presidente López en 1944. Los ministros Alberto Lleras y Darío Echandía usaron la radio para movilizar a los partidarios del Gobierno, aplacar a los golpistas y rodear a la totalidad de las fuerzas armadas, persuadiéndolos de que se trataba de una maniobra minoritaria de mandos medios. Sin embargo, el desgaste por las presiones de la oposición y la falta de apoyo de su propio partido llevaron a la renuncia de López.

Como reflejo de la crisis, los liberales se dividieron para las elecciones de 1946. Los disidentes se agruparon alrededor de Jorge Eliécer Gaitán, atraídos por su discurso antioligárquico y la posibilidad de profundizar, bajo su liderazgo, el programa reformista que consideraban había sido abandonado por el oficialismo del partido. Aunque el liberalismo ya movilizaba el sesenta por ciento del electorado, su partición llevó a la presidencia a los conservadores con Mariano Ospina Pérez. Al igual que en 1930, en sus inicios Ospina invitó a formar un gabinete bipartidista; sin embargo, la creciente violencia política en las zonas rurales alejó al liberalismo de cualquier colaboración. Gaitán lideraría esa oposición, al hacerse al control del Partido Liberal en las elecciones legislativas de 1947 y al movilizar a los obreros y campesinos que se tomaban las calles en protesta

por lo que ahora eran las amenazas del Gobierno conservador contra las masas liberales. Así llegó el 9 de abril de 1948, cuando Gaitán fue asesinado en Bogotá, atentado que no fue el inicio sino un punto culminante de una violencia que venía en aumento. La reacción de sus seguidores, quienes atribuyeron el crimen al Gobierno, se expresó mediante disturbios que dejaron un gran número de muertos y heridos, así como saqueos al comercio e incendios en edificios públicos. Aunque el episodio fue conocido en el mundo como "el Bogotazo", se manifestó con intensidad variable en casi todo el país, especialmente en el puerto petrolero de Barrancabermeja, donde los obreros establecieron un muy breve gobierno revolucionario.

Luego del 9 de abril los conflictos se recrudecieron. En numerosos pueblos ocurrieron masacres contra miembros de ambos partidos, especialmente en la zona andina. El Gobierno conservador estableció cuerpos vinculados a la policía bajo la excusa de mantener el orden público, pero que en la práctica se dedicaban a asesinatos masivos. Los liberales, por su parte, respondieron creando guerrillas en Antioquia, Cundinamarca, el Tolima y los Llanos Orientales, donde se establecieron las más numerosas. El Partido Comunista, hasta entonces en conflictos ideológicos con el gaitanismo, también fue perseguido por el Gobierno conservador y parte de su militancia se armó junto con las guerrillas liberales, situación en la que se pusieron de plano los conflictos por la propiedad de la tierra. La violencia —que la posteridad convirtió en el nombre para designar a toda una época— obligó a numerosos campesinos a trasladarse a las ciudades, acelerando el proceso de crecimiento urbano que





había sido alentado previamente por la industrialización. A su vez, las parcelas abandonadas fueron adquiridas por terratenientes de ambos partidos.

Al Congreso volvieron las recriminaciones, pero esta vez muy lejos del debate pacífico: en septiembre de 1949 una sesión de la Cámara de Representantes finalizó en una balacera entre algunos parlamentarios; dos meses después, el presidente Ospina cerró el Congreso tras la amenaza de que la mayoría liberal le adelantaría un juicio por su responsabilidad en la violencia. La oposición había aprobado adelantar las elecciones bajo el temor de que a un Congreso en receso le era imposible evitar el fraude; pero ya no importaba, sin el legislativo funcionando y con el retiro de la candidatura de Darío Echandía por el asesinato de su hermano, el conservador Laureano Gómez ganó las elecciones sin contendor y asumió la presidencia para 1950. El curso de la violencia no paraba con esa concentración del poder: en 1952 fanáticos incendiaron en Bogotá las casas de los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras, al igual que las sedes de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador*, mientras que el Gobierno preparaba una reforma constitucional inspirada en la dictadura de Francisco Franco en España que anularía dos décadas de apertura democrática. Fue así como un sector del conservatismo se desmarcó del régimen y apoyó que el comandante de las fuerzas militares, Gustavo Rojas Pinilla, asumiera la presidencia a la fuerza.

¿Cuáles pudieron ser las causas que llevaron al país a ese prolongado conflicto entre conservadores y liberales? Desde el siglo XIX, los partidos tradicionales funcionaban como

auténticas subculturas en casi todas las regiones del país, las cuales pusieron sus intereses de cuerpo por encima de proyectos políticos incluyentes o conciliadores. Si bien esa base social de los partidos conformó lazos muy primarios de integración nacional, también fue capaz de excluir a la mitad del país de su proyecto político. Para los años 30, ambas colectividades se consideraban el "partido del pueblo", pero también veían en el otro una amenaza, ya fuera a sus conquistas sociales o a su identidad. La propuesta de un enfoque social a la Constitución, un cambio en la política educativa o una reforma agraria por parte del liberalismo eran objeto del debate más encarnizado para la oposición conservadora, del que fácilmente tomaban partido sectores de la Iglesia y las élites económicas. Y cuando Laureano Gómez fustigaba al Gobierno, por ejemplo, la dirigencia liberal admitía cada provocación; de ahí deriva la agresividad que puede verse en muchos discursos de Gaitán, desde su movimiento, o de Gilberto Alzate Avendaño, en el contrario. Los editoriales de los periódicos regionales son hoy una fuente notable de ese lenguaje violento, encaminado a restringir el disenso.

Por su parte, cada proceso electoral, por la herencia centralista y presidencialista del sistema, se había convertido en una pugna por el control absoluto del Estado, en la que elegir a un presidente significaba hacerlo también sobre gobernadores, alcaldes, las mayorías en el Congreso y la composición de las Altas Cortes. Y a pesar de los intentos de transformar el sistema electoral, la sensación de falta de garantías para elecciones libres y transparentes era permanente, pues las manipulaciones del sistema por parte de grupos clientelistas fueron comunes,





desde el registro de los votantes hasta los escrutinios. Para los días del Bogotazo, el consenso entre partidos e ideologías, o mayorías y minorías, se volvió imposible.

Para entonces los partidos ya eran identificables como auténticos movimientos de masas, en un proceso de ampliación de derechos políticos de la ciudadanía y aumento de su participación en las urnas. La masificación también derivó, por todo lo dicho antes, en que la política colombiana tuviera expresiones recurrentes y espontáneas de intimidación armada y abusos de autoridad. Para las dirigencias de los partidos y las instituciones resultó incontrolable el caos que habían alentado. La ocurrencia de la violencia, además, eclipsó otros conflictos locales sin resolver eficientemente por el Estado, que iban más allá de un problema electoral o de la estructura del sistema político: la desigualdad en la tenencia de tierras y la expansión de la frontera agrícola, la discriminación hacia minorías, el control del sindicalismo, los intereses privados detrás de la planeación estatal o incluso el auge de la delincuencia común.

En medio de ese clima, el nuevo Gobierno de Rojas Pinilla invitó a la desmovilización de las guerrillas y en un principio se logró una etapa de pacificación del país. Sin embargo, los guerrilleros de orientación comunista permanecieron activos y fueron combatidos por el ejército, el cual se convertía en un nuevo actor de la violencia. Como reacción a este fenómeno, el Partido Comunista fue declarado ilegal y se reprimieron zonas en donde gozaba de apoyo. De igual manera, los sectores políticos que inicialmente respaldaban a Rojas le retiraron su apoyo ante los ataques del ejército a la población civil y

la censura de prensa. Los episodios más emblemáticos de aquel rechazo fueron la matanza de estudiantes en el centro de Bogotá en 1954, el cierre de los diarios liberales *El Tiempo* y *El Espectador* a principios de 1956 y la agresión de agentes del Estado al público en la plaza de toros de la capital ese mismo año. De esta manera, el régimen era criticado no solo como una dictadura militar, sino como una continuación de la represión de las administraciones anteriores. La Asamblea Constituyente, en principio convocada por Laureano Gómez, se convirtió en un instrumento que otorgaba sustento jurídico al régimen: declaró vacante la presidencia y legal la asunción de Rojas, mientras lo ratificaba en el poder por los cuatro años siguientes.

Sin embargo, la caída de los precios del café desde 1955 y la recesión posterior influyeron en la pérdida de respaldo del régimen, a lo que se sumaron las críticas del empresariado debido a su intervención en la economía privada. La última facción del conservatismo que respaldaba a Rojas, liderada por Mariano Ospina Pérez, le retiró su apoyo al tiempo que Laureano Gómez y Alberto Lleras pactaban un acuerdo bipartidista que estableciera la participación política y neutralizara la violencia. Entre las protestas de la oposición y la represión oficial, el 10 de mayo de 1957 un paro general puso fin al gobierno de Rojas, que fue reemplazado por una junta militar. A pesar de su composición, el mando ahora lo tenía la dirigencia de los partidos tradicionales, quienes impulsaron en diciembre de ese año un plebiscito que aprobó la distribución paritaria de ambas colectividades en las tres ramas del poder público.





Cumpliendo este pacto, ambos partidos apoyaron en 1958 la candidatura presidencial de Alberto Lleras. Bajo el miedo vencido de una tercería militar, por fin el devastador conflicto entre liberales y conservadores había terminado.

## Las masas frente a la cultura

Mientras se incubaba la violencia, la Colombia de los años 30 se insertó en la esfera de los gobiernos progresistas que se sucedieron en algunos países de América Latina y Occidente, amenazados por el crecimiento de los movimientos fascistas y totalitaristas que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial. Para el caso colombiano, a este impulso se sumaría el sentimiento de unidad nacional alentado por la corta guerra con Perú en 1932, derivada de la negativa entre la opinión pública del país vecino a aceptar la frontera que ambos Gobiernos habían pactado cuatro años antes y que había obligado a los peruanos a ceder a Colombia la joven ciudad de Leticia, en el Amazonas.

De esta manera, López Pumarejo se hizo afín al *New Deal* de Roosevelt en Estados Unidos, al nacionalismo revolucionario de Lázaro Cárdenas en México o al frente popular que gobernó España antes de su guerra civil. Era, en sus propias palabras, "La Revolución en Marcha". Parte de este proceso se había iniciado con la legalización de la actividad sindical y el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas, que abrieron la idea de que el Estado debía dejar de ser un represor del movimiento obrero para convertirse en un árbitro de los conflictos

laborales, situación que influyó en la creación en 1936 de la oficialista Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

En una era de crisis del capitalismo, que contrastaba con veinticinco años de crecimiento sostenido de la economía nacional, se consideró necesaria la protección al agro y su tecnificación, permitiendo que además del café, que seguía siendo la base de la economía nacional, crecieran sectores como la caña de azúcar, el arroz, el trigo, el cacao y la ganadería. También se haría necesaria una clarificación de las reglas de acceso al trabajo rural mediante la Ley 200 de 1936, la cual buscaba democratizar el campo, pero también establecer su control por parte del Estado, dándole a este último el poder de expropiar tierras incultas. No se hizo esperar el estigma, entre terratenientes e industriales, de que estas medidas amenazaban la propiedad privada.

Por su parte, la sustitución de importaciones alentada por la Segunda Guerra Mundial abrió paso a un Estado incentivador de la economía, a través de entidades como el Instituto de Fomento Industrial, los fondos nacionales del café y la ganadería, y del fortalecimiento de la Caja Agraria. Apareció también el Instituto de Crédito Territorial, enfocado en la construcción de barrios populares, en cumplimiento de la consagración constitucional del derecho a la vivienda. La guerra extranjera también indujo a la nacionalización de empresas con participación de ciudadanos alemanes, como la cervecería Bavaria, la aerolínea Avianca y entidades bancarias. Al mismo tiempo, el Estado demostraba su estabilidad con unos ingresos fiscales que ahora dependían más de la tributación directa, como los impuestos a la renta y al patrimonio, lo que implicó un desplazamiento





de los ingresos arancelarios e hizo que se dependiera mucho menos de los ciclos de la economía global.

A la anterior política también respondía el sector privado con la consolidación, a lo largo de los años 40, de gremios que reconfiguraron el mapa del poder económico del país, acabando con el dominio de los viejos hacendados del siglo XIX. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fueron los mejores ejemplos de aquel proceso. En contraste con los avances recientes, los movimientos obreros y agrarios disminuyeron su poder desde 1945, cuando el Gobierno les retiró su apoyo, lo cual de paso demostraba que su dependencia del Estado les acabaría por traer más perjuicios que beneficios. Al mismo tiempo, el sindicalismo se dividió debido a que liberales, conservadores y comunistas buscaron controlarlo mediante la creación de nuevas organizaciones afines.

A pesar de la apariencia de lentitud y timidez de los cambios de la época, estos respondían a un país en el que la vida urbana diversificaba su oferta de bienes y servicios. Por ejemplo, que resultara novedosa la eliminación del control del registro civil por parte de la Iglesia, en 1938, no se entiende sin el hecho de que un nuevo país exigía revisar una política creada medio siglo antes. Para entonces, ya la tercera parte de la población vivía en las ciudades, especialmente en los ejes económicos de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, crecimiento que fue acelerado aún más por la violencia. La situación indujo a nuevos proyectos urbanísticos, personificados en barrios para las élites, como Prado, en Medellín, y Teusaquillo, en una Bogotá que venía preparándose

para el cambio desde las celebraciones de su Cuarto Centenario. La migración también indujo a la aparición de nuevos focos de colonización rural en el Meta, el Caquetá y el Urabá antioqueño, en detrimento del aislamiento de la costa pacífica y la región amazónica, con las modestas excepciones de Buenaventura, Quibdó y Leticia. La continuidad de este proceso haría posible el programa de inversiones públicas del Gobierno de Rojas Pinilla, que se materializó, entre otras cosas, en el aeropuerto El Dorado, el Centro Administrativo Nacional, la Acería Paz del Río y la conversión de la isla de San Andrés en puerto libre.

Aquel país que podía acceder a esa modernidad encontraba una oferta cultural relativamente variada. Circulaban impresos que iban desde la popular cartilla para niños *Alegría de leer* hasta la literatura rebelde de José Antonio Osorio Lizarazo y Porfirio Barba Jacob, o la reivindicación de grupos sociales emergentes en los libros de Jorge Zalamea, Eduardo Caballero Calderón, Elisa Mújica o Arnoldo Palacios. Desde la cultura también se proyectaba una nueva valoración del país, por una generación que transitaba entre el realismo social, la exaltación del pasado indígena y la abstracción moderna, la cual encontró su espacio en el Salón Nacional de Artistas creado en 1940, con figuras como Débora Arango, Luis Alberto Acuña, Rómulo Rozo o los más jóvenes, Rodrigo Arenas Betancur y Alejandro Obregón. Mientras tanto, desde el Estado surgían entidades que encarnaban la nueva búsqueda de identidades, como la Radio Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Etnológico Nacional y la Escuela Normal Superior. Esta última, nutrida con profesores exiliados de Europa, fue central en este proceso como





formadora de muchos de los orientadores intelectuales del país en el siglo XX. Desde allí aparecieron los ensayos de Juan Friede, Luis Eduardo Nieto Arteta, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Germán Arciniegas y Jaime Jaramillo Uribe. La educación superior también se renovó al ser unificada en una misma sede la Universidad Nacional, que formó a un número creciente de profesionales venidos de todas las regiones del país y de una naciente clase media, mientras el sector privado aportaba con la creación de las universidades Javeriana y Bolivariana, del lado católico, y de los Andes, desde el laico.

Por entonces y para los sectores populares, también nacía una radio que formaba el gusto por los corridos mexicanos, el tango argentino, el bolero cubano y aires de la costa Caribe y la zona andina de Colombia, al tiempo que transmitía las sesiones del Congreso, las primeras radionovelas y las conferencias de unos jefes políticos que así se daban el lujo de llegar directamente al ciudadano. A ese impulso cultural respondía también la Iglesia con la creación de Radio Sutatenza, un novedoso sistema de educación para campesinos adultos. Por esa misma radio también se divulgaron nuevos espectáculos de masas que integraban las regiones del país y de paso distraían de la violencia política, como el primer campeonato profesional de fútbol, en 1948; el Concurso Nacional de Belleza, institucionalizado al año siguiente, o la Vuelta a Colombia en bicicleta, nacida en 1951. Al poco tiempo este proceso cultural recibía un nuevo aire, con la inauguración de la televisión por parte del Gobierno de Rojas Pinilla y con la proliferación de fiestas que nutrirían la identidad de las regiones, como el Desfile de Silleteros en

Medellín y las Ferias de Manizales y Cali, esta última creada como un acto solidario a la explosión de dinamita que mató a cuatro mil caleños en 1956.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria se fortaleció con la presencia de empresas multinacionales, especialmente estadounidenses, que abrieron una etapa de crecimiento al sector petrolero y a las telecomunicaciones. Aquel impulso transnacional se vio reflejado en la tutela norteamericana sobre el continente afianzada en Bogotá, cuando en 1948 se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) durante los trágicos sucesos del 9 de abril, situación que fue aprovechada para condenar a la Unión Soviética y para poner a la guerra fría como un nuevo motor de la violencia local. Luego y en esa misma línea, el presidente Laureano Gómez renunció a su vieja simpatía por el derrotado fascismo y pactó en 1951 el envío de tropas colombianas a la guerra de Corea.

Pero aquel ímpetu transformador de toda una generación había pasado sin que la mitad del país lograra obtener la plenitud de sus derechos políticos. Por eso esta historia también va de la mano de la larga lucha por los derechos de la mujer. Esos primeros movimientos feministas se habían visibilizado en apoyo al gobierno de Olaya en 1932, año en el que este impulsó la igualdad jurídica de la mujer, con el apoyo de lideresas como Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. Posteriormente, el Congreso legalizó el acceso a la universidad y se impulsó por primera vez la educación básica mixta, con el correspondiente rechazo de los sectores conservadores, no solo los del partido. Sin embargo, se aplazó el derecho al voto, por la absurda creencia entre los





liberales de que la manipulación de la Iglesia sobre las colombianas facilitaría el regreso de sus rivales al poder.

Para dificultar aún más las cosas, el crecimiento industrial hizo que en los años 40 disminuyera la participación de la mujer entre la clase obrera, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores; además, la agenda política de la violencia eclipsó esta aspiración en el Congreso. Sin embargo, la conciencia de que la lucha de las mujeres debía trascender los partidos dio un nuevo aire al movimiento con la creación de la Organización Nacional Femenina, bajo el liderazgo de Berta Hernández y María Currea. La agenda internacional de la posguerra, por su parte, puso al voto femenino en Europa occidental como protagonista en la lucha contra la expansión del comunismo, hecho que convenció en Colombia a algunos de los sectores más conservadores, incluyendo a la Iglesia. Luego y buscando ampliar el apoyo a su gobierno, Rojas Pinilla nombró a las sufragistas Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia como integrantes de la Constituyente, donde, en un intenso debate, ambas diputadas impulsaron el proyecto del derecho al voto, aprobado el 25 de agosto de 1954 y ratificado en el Plebiscito de 1957. El sufragio ahora sí sería universal, pero no como una concesión al régimen militar ni a ninguno de los partidos, sus viejas bases sociales o, mucho menos, sus conflictos.

Todos estos cambios reflejaban un país distinto, el cual distaba mucho del que prometía cambiar las cosas en la ya lejana elección presidencial de 1930. La paz y la modernización política y cultural traían esperanza, pero la forma en que ambas cosas se dieron iniciaría la historia de nuevas dificultades.

**Para seguir aprendiendo**

El contexto político, económico y cultural de la época puede apreciarse en la síntesis *Colombia: Mirando hacia adentro* (2015), editada por Malcolm Deas. Para enfatizar en la Violencia se recomienda *La destrucción de una república* (2017) de Francisco Gutiérrez Sanín. Este mismo tema, a partir de dos de sus personajes más destacados, se explora en *¡Mataron a Gaitán!* (1987) de Herbert Braun y *La modernización en Colombia: Los años de Laureano Gómez* (2001) de James Henderson. También se recomienda, por su aprovechamiento de archivos sonoros de la época, el proyecto *La voz del Poder* (2021) de Señal Memoria.

La bibliografía sobre el conflicto bipartidista es abundante, y en ella sobresalen los siguientes clásicos: *La Violencia en Colombia* (1963) de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna; *Violencia, conflicto y política* (1978) de Paul Oquist; *Los años del tropel* (1985) de Alfredo Molano; *Bandoleros, gamonales y campesinos* (1985) de Donny Meertens y Gonzalo Sánchez; *Orden y violencia* (1987) de Daniel Pécaut, y la colección de ensayos *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (1991).

Algunos ensayos sobre las particularidades socioculturales del periodo son *República Liberal, sociedad y cultura* (2009) de Rubén Sierra Mejía; *Historia, género y política* (1994) de Lola Luna y Norma Villarreal, sobre el movimiento feminista, y la obra colectiva *Medios y nación* (2003) del Museo Nacional, sobre cambios tecnológicos.

Entre la numerosa filmografía sobre el periodo, están disponibles en bibliotecas públicas los largometrajes clásicos *Canaguaro* (Dunav Kuzmanich, 1981) y *Cóndores no entierran todos los días* (Francisco Norden, 1984), mientras que la miniserie de televisión *El Bogotazo* (Promec, 1984) puede verse a través de RTVCPlay.



# 10.

# LAS PRIMERAS MAYORÍAS URBANAS (1958-1985)

En 1964 se hizo un censo que registró 17.484.508 colombianos, de los cuales el cincuenta y dos por ciento vivía en las ciudades. Por primera vez el país urbano aparecía numéricamente mayor al país rural. En los últimos quince años Medellín y Barranquilla habían duplicado su población, mientras que Cali y Bogotá estaban a punto de triplicarla (un millón y medio en la capital). Entre otros centros poblacionales en crecimiento, aparecían los jóvenes departamentos de Córdoba, Quindío, Risaralda, Cesar y Sucre, al tiempo que las antiguas intendencias de Chocó, Meta, La Guajira y Caquetá elevaron su categoría a departamentos, o lo harían pronto. Se trataba, por lo tanto, de una sociedad en transformación que igualmente exigía cambios acelerados en su vida política, económica, social y cultural.

Además del censo, otras cifras hablan de la época. Los 3.000 kilómetros de vías férreas, cuya construcción tomó un siglo, eran desplazados por 40.000 kilómetros de carreteras,

2.500.000 personas que viajaban al año en avión y cerca de 20.000 buses que recorrían las calles. Para entonces el país se comunicaba a través de 400.000 líneas telefónicas, diez veces más que las que había veinticinco años atrás, cuando apenas eran un lujo exclusivo de las poblaciones industrializadas. La base de la economía nacional seguía siendo el café, al componer dos tercios de las exportaciones, pero pronto el grano reduciría esa participación a la mitad.

Una década después, en 1973, la urbanización continuaba su aceleración: Bogotá superaba los 2.500.000 habitantes, Medellín 1.000.000 y Cali 900.000; ya el sesenta por ciento del país vivía en ciudades, mientras que la industria copaba la cuarta parte del mercado interno y la quinta parte de las exportaciones, al igual que el sector minero. Al año ya viajaban por avión tres millones de colombianos, mientras que seis millones se movilizaban al día en bus, los kilómetros de carreteras eran más de 60.000 y las líneas telefónicas superaban las 780.000. Pero las cifras sueltas pueden engañar, pues los contrastes de la calidad de vida eran enormes: la tercera parte de la población adulta del campo era analfabeta, mientras que en las ciudades lo era el diez por ciento, desequilibrios comparables con el acceso a agua potable (28 por ciento en la gente rural contra 86 en la urbana) y energía eléctrica (15 versus 87).

Aquel país era visitado por líderes mundiales como el presidente estadounidense John F. Kennedy y el papa Paulo VI, con cuyos nombres bautizaron dos barrios de Bogotá poblados por una creciente clase media. Ante ese mismo planeta, el país se enorgulleció de las hazañas de que los Juegos Panamericanos





de 1971 se celebraran en Cali y de que Gabriel García Márquez recibiera el Nobel de Literatura en 1982. Mientras tanto, la cultura local se redefinía al reconocer su diversidad en la modernidad: en las artes plásticas con Enrique Grau, Fernando Botero, Eduardo Ramírez Villamizar y Beatriz González; en la literatura con Manuel Zapata Olivella, Álvaro Cepeda Samudio y la rebeldía del nadaísmo y Andrés Caicedo; en las artes escénicas lo mismo hacían el TPB, La Candelaria y Los Maestros en el cine, al igual que los ensayistas Orlando Fals Borda, Marta Traba y Virginia Gutiérrez.

Se trataba, además, de unos cambios extendidos a la vida cotidiana y la cultura popular: son los años de las primeras políticas de planificación familiar; de la modernización de la industria con la rareza de los primeros computadores; de la masificación de nuevos gustos musicales con el auge de los elepés de rock, pop, salsa y vallenato; de nuevas identidades culturales que llegaron a través de los triunfos deportivos del boxeador Pambelé y el ciclista Cochise, o en general de la generación que descubrió la televisión. También eran tiempos de demostración de la fragilidad del crecimiento de nuestras poblaciones con tragedias como el incendio de Quibdó en 1966, el terremoto de Popayán en 1983 y muy especialmente la avalancha del nevado del Ruiz, que en 1985 sepultó a más de veinte mil habitantes de Armero y Chinchiná.

Esa era, a grandes rasgos, la Colombia de hace dos generaciones, una sociedad cuya transformación se resistía a tolerar el crítico modelo de confrontación política que habían dejado la Violencia y el régimen militar. Un país para el cual era necesario suscribir en 1957 un nuevo pacto, coherente y necesario para la

realidad de su tiempo, pero que pronto se quedaría muy corto, como lo atestiguaron los hechos del siguiente cuarto de siglo. Se trataba de una comunidad que se movía entre la estabilización de su economía y sus instituciones, al tiempo que veía surgir nuevos conflictos; de una sociedad que se transformaba de formas aceleradas, pero que a su vez experimentaba en ese desarrollo nuevos riesgos para su supervivencia y su seguridad; de una generación que atestiguaba la tensión entre unas prometedoras fuerzas de desarrollo y otras, amenazantes, de retroceso.

## La gloria y el desastre del Frente Nacional

En 1956 la continuación de la violencia y las múltiples limitaciones a la expresión política bajo el general Rojas Pinilla condujeron a que Laureano Gómez y Alberto Lleras promovieran un acuerdo para poner fin tanto al conflicto bipartidista como al gobierno militar. En un principio no se trataba de un pacto cerrado a dirigentes políticos, pues en la caída del régimen se agrupaban sectores de los más variados orígenes: las mayorías de los partidos Liberal y Conservador, empresarios, la Iglesia, la izquierda y los estudiantes, una composición que le daría el nombre a toda una época: el Frente Nacional.

Amparada en la popularidad de esas movilizaciones, la Junta Militar que reemplazó a Rojas tras su renuncia el 10 de mayo de 1957 convocó, con el apoyo del bipartidismo, a un plebiscito para diciembre, en el cual la ciudadanía aprobó la institucionalización de un nuevo modelo de representación política: la participación equitativa de liberales y conservadores en





cargos públicos y en la elección de cuerpos colegiados (Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales), independientemente de su resultado en las elecciones. A esta decisión se sumaban otro tipo de reformas, como la anulación de la mayoría de actos producidos por la Constituyente de Rojas, la ratificación del derecho de las mujeres al voto y la destinación del diez por ciento del presupuesto nacional a la educación.

Luego del plebiscito y buscando blindar el nuevo sistema, ambos partidos acordaron la obligación de postular a un candidato común para cada elección presidencial: Alberto Lleras en 1958, Guillermo León Valencia en 1962, Carlos Lleras en 1966 y Misael Pastrana en 1970, alternándose el partido de origen en cada cuatrienio y extendiendo el experimento por dieciséis años. En apariencia se trataba de un proyecto cerrado y excluyente, pero que proponía con este diseño una solución política a la vieja violencia bipartidista. Era una muestra de la creatividad puesta al servicio de la reconciliación política, comparable con las figuras propuestas por la Asamblea Constituyente de 1910 o, yendo hacia adelante, con el Acuerdo de Paz de 2016 y el Estatuto de Oposición aplicado desde 2018. Adicionalmente, no solo había que garantizar el derecho de los dos partidos tradicionales a participar en las decisiones del Estado, sino que también era necesario generar una transición a un régimen civil, en reemplazo del militar, y, de una forma menos evidente, hacer perdurable un modelo de desarrollo económico con una intervención moderada del Estado.

Sin embargo, no hubo necesariamente unanimidad frente al nuevo sistema. Los resentimientos entre opositores y

colaboradores del régimen militar dividieron por años a los conservadores, quedando sus decisiones electorales a merced de la voluntad de su viejo rival liberal. Y aunque el Frente Nacional lograra el objetivo de la paz, la idea del reparto equitativo del Estado también generó detractores, especialmente entre el ala derecha conservadora, la izquierda liberal y, por supuesto, una oposición al margen del bipartidismo cada vez más creciente. Aunque generalmente minoritarias, estas facciones se acabarían fortaleciendo gracias a otra medida del plebiscito, pues quien quisiera tener capacidad decisoria en el Congreso debía controlar las dos terceras partes de cada cámara, mayoría que el Frente Nacional solo pudo tener hasta 1966.

De este modo, apareció el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), un variado grupo político alrededor de Alfonso López Michelsen, hijo del expresidente López Pumarejo y de quien esperaban liderara la agenda social que el régimen temía impulsar. Las diferentes tendencias de izquierda, ocasionalmente integradas a la línea más radical del MRL, también se organizaron en movimientos que expresaban el descontento de sectores obreros, estudiantiles y campesinos, bajo el sentimiento de exclusión por parte de ese mismo orden civil que habían ayudado a restablecer. Al tradicional Partido Comunista se sumaron, entre otros, el Frente Unido, liderado por el sacerdote y sociólogo Camilo Torres, y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR).

De todos estos grupos, el de mayor respaldo electoral fue la Alianza Nacional Popular (Anapo), creada por el expresidente Gustavo Rojas Pinilla y sus seguidores, la mayoría disidentes de





los partidos tradicionales. Aprovechando el descontento social por la crisis económica y las divisiones en el conservatismo, los anapistas lograron desafiar a Misael Pastrana, candidato en 1970 de un Frente Nacional acostumbrado a triunfos holgados y predecibles. La hostilidad de una campaña en la que el Gobierno se parcializó, la incertidumbre por el resultado, las sospechas de que jefes políticos locales alterarían los resultados y el hecho de que los primeros boletines de la radio registraran una mayoría en favor de Rojas alentaron las acusaciones de fraude. La respuesta del presidente fue el estado de sitio, una vieja fórmula con la cual el Gobierno suspendía garantías constitucionales y delegaba facultades amplias a la policía y las fuerzas armadas. El triunfo de Pastrana, si bien fue aceptado por las diferentes facciones políticas hegemónicas, fue percibido como ilegítimo por sectores significativos de la opinión pública.

También, a pesar de que el Frente Nacional se enorgullecía de haber acabado con la vieja violencia, aparecieron otras formas de conflicto casi tan simultáneas como el pacto bipartidista. Primero fueron los rezagos de antiguos grupos armados liberales y conservadores, llamados "bandoleros" por el establecimiento como un modo de considerarlos delincuencia común, que a finales de los años 50 operaban en la zona andina, apoyados por comunidades rurales o terratenientes locales. En los años 60 aparecerían otros grupos armados, anteriormente afines a guerrillas liberales y comunistas, asentados en zonas de colonización campesina y cuya singularidad hizo que el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado los descalificara en el Senado como "repúblicas independientes". Al mismo

tiempo, un fenómeno de enorme influencia venía desde afuera: la guerra fría, el conflicto global entre las áreas de influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, que acentuó entre la clase dirigente el temor a que Colombia fuera amenazada por el bloque comunista, más cuando muy cerca, en Cuba, una rebelión armada había triunfado en 1959 y el país iniciaba su conversión a un régimen prosoviético. Inspirados en ese hecho, aparecieron pequeños bloques subversivos, entre los que se destacó el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC).

Con aquella lógica de la guerra fría, sumada al hecho de que el régimen había delegado a las fuerzas armadas el control casi absoluto de la seguridad interna, el Gobierno de Guillermo León Valencia optó por darle una solución militar a estos conflictos. El más recordado de estos episodios logró el desalojo de los principales grupos de autodefensa campesina del centro y el suroccidente del país en 1964, pero también su radicalización y su transformación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cercanas en este periodo al Partido Comunista. En aquel escenario, en 1965 también apareció el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por campesinos y líderes estudiantiles formados en Cuba, a los que luego se sumaron sacerdotes católicos como Camilo Torres, cuya muerte en combate dejó un vacío de liderazgo en los movimientos de izquierda que sería lamentado por años. A estos grupos se sumaba también el Ejército Popular de Liberación (EPL), inspirado en las revoluciones de China y Albania.

Estas formas de "oposición armada", sin embargo, tampoco trascendieron y llegaron a estar al borde de su disolución a finales





de los años 60 y principios de los 70. Sin embargo, un resurgimiento de la violencia insurgente se daría con la aparición del Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana de orientación nacionalista que tomó su nombre de las polémicas elecciones presidenciales de 1970 y cuyas acciones se vieron marcadas por un fuerte carácter propagandístico que llamó la atención de la prensa. Y, mientras hubiera guerrillas, el Gobierno justificaba la persistencia del estado de sitio, la libertad de maniobra de la fuerza pública y la decisión de armar civiles al servicio del Estado. Con los inevitables excesos de esas tres soluciones, la legitimidad de las autoridades quedaba en entredicho.

Con esta situación resulta difícil hacer un balance del Frente Nacional. Se logró, sin duda, una estabilidad institucional y económica que impidió las crisis políticas y las dictaduras que asolaron a la gran mayoría de países latinoamericanos. También se planteó una modernización del Estado a través del nacimiento de la tecnocracia económica, expresada en la aparición de entidades de planeación y fomento, además de los institutos autónomos creados principalmente bajo la reforma constitucional de 1968. La consolidación del Estado y el capitalismo, por su parte, permitió un crecimiento de la clase media, favorecida por el desarrollo previo de una industria de servicios y la profesionalización de una población que en su mayoría se había vuelto social y culturalmente urbana.

De la misma forma, los Gobiernos de Alberto y Carlos Lleras plantearon que no era suficiente la concordia entre los partidos tradicionales, sino que también había que frenar las tensiones que se imponían sobre las masas rurales, con

consecuencias también sobre las urbanas, cuyo reflejo más visible era el surgimiento de las guerrillas. La idea de fortalecer la economía campesina y frenar la migración a las ciudades chocaba con los intereses de los terratenientes y —de nuevo— la estigmatización de la guerra fría, ambos elementos fuertemente representados en el Congreso. Así, la violencia guerrillera se justificaba a sí misma en la idea de que las demandas sociales seguían bloqueadas por el establecimiento. Por su parte, la colonización campesina que sí pudo darse lo hizo en las zonas de frontera sin un acompañamiento efectivo por parte del Estado.

La paz de los partidos también los debilitó ideológicamente, ya que redujo el debate político a la fragmentación interna entre liberales y conservadores por unos cargos públicos que ya tenían asegurados, independientemente de los resultados en elecciones. Este fenómeno generó una negociación permanente entre el Gobierno y las estructuras clientelistas locales, las cuales incrementaron las prácticas corruptas a partir de la sensación de estar protegidas por el sistema. En buena parte, la candidatura presidencial de Rojas Pinilla en 1970 explotó por igual la lentitud del régimen en satisfacer las necesidades sociales, el descrédito de la clase política y el descontento de un electorado que se volvía cada vez más abstencionista. En resumen, había un Estado fuerte en su capacidad de modernización, como también en su capacidad de reprimir los movimientos que consideraba amenazantes; al mismo tiempo, era un Estado incapaz de fortalecer éticamente los liderazgos políticos que lo respaldaban y mucho menos podía evitar nuevas violencias.





## De la ilusión al horror

Desde 1974 se sucedieron elecciones donde contendieron los candidatos presidenciales de diferentes partidos, ya sin las ataduras del Frente Nacional. Sin embargo, los Gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978), Julio César Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986) mantuvieron la participación equitativa de liberales y conservadores en los cargos públicos, siguiendo una obligación establecida en la reforma constitucional del 68. Esta medida, ya sin ninguna razón práctica que la sustentara, terminó por prolongar las consecuencias negativas del acuerdo bipartidista: el aumento de la corrupción política y, posteriormente, de unos poderes locales asociados con la criminalidad, ya fuera financiándose con sus recursos o utilizando la violencia contra sus rivales. Esto se dio, además, en medio de una fuerte recesión económica, del auge de las economías clandestinas, del resurgir de los grupos armados ilegales y del fracaso de los proyectos políticos que sirvieran de alternativa al sistema (la Anapo entró en crisis tras las elecciones del 70 y la izquierda tuvo una participación residual en las elecciones, a pesar de agruparse en coaliciones como la Unión Nacional de Oposición y Firmes).

Una gran ventaja que tuvo el sistema político de los años 70 para mantenerse estable, a pesar de sus debilidades, era el apoyo de los sectores agrícolas, industriales y comerciales a los Gobiernos de turno y al establecimiento en general, en una década en la que los Gobiernos desmontaron la vieja estrategia de sustitución de importaciones. Es esta la etapa de desarrollo de la

minería a través de la explotación del carbón en La Guajira, de níquel en Córdoba y de oro en varios departamentos de la zona andina y la costa pacífica, al igual que de una agricultura que se tecnificó en sectores estratégicos como la caña de azúcar y las flores. También por entonces la industrialización se aceleró con el aumento en la producción de artículos para la exportación, al igual que con la aparición del ensamblaje de importaciones, especialmente en el sector automotriz. Era visible la aparición de un nuevo modelo de vocación productiva, en el cual no solo desaparecía el campesino tradicional, sino que el país se integraba de forma plena a los intereses económicos de Estados Unidos.

Este viraje aceleró aún más la urbanización del país, la cual llegó a ser de un sesenta y ocho por ciento en 1985, un fenómeno que también generó el deterioro en la calidad de vida derivado de un crecimiento urbano espontáneo, casi al margen del Estado. Así aparecieron localidades como Aguablanca en Cali, parte de la Zona Nororiental de Medellín y Ciudad Bolívar en Bogotá, los barrios La Chinita en Barranquilla, Solferino en Manizales y Cuba en Pereira, al igual que se hizo cada vez más frecuente la migración de colombianos a Venezuela y Estados Unidos. Para entonces, problemas urbanos como la pobreza extrema, el desempleo, la informalidad y la permanente amenaza de cooptación por parte de organizaciones criminales reflejaban una crisis social que se extendió en el país durante estos años.

Mientras tanto, la población rural no solo decreció, sino que fue desatendida al abandonarse los intentos de redistribución de la tierra y los incentivos a la colonización de los años 60. Fue





así como en 1972 el Gobierno de Misael Pastrana promovió, con apoyo de congresistas y líderes gremiales afines, el llamado Pacto de Chicoral, un freno a las políticas sociales enfocadas en el campesino raso, estigmatizadas como subversivas, y su sustitución por un estímulo a la producción y el mercadeo a gran escala, a cambio de compromisos tributarios por parte de los terratenientes. En consecuencia, el movimiento campesino se radicalizó y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), hija de los intentos previos de reforma agraria, se dividió entre partidarios y detractores del Gobierno. Esta última línea, establecida en su congreso de Sincelejo, optó por la invasión de tierras y acabó debilitada por diferencias internas y el acoso de agentes del Estado y sus aliados en la ilegalidad.

Era un breve intento de emprender una reforma agraria al margen del Estado, experiencia que tuvo mucho más éxito dentro del movimiento indígena, el cual aprovechó las inéditas garantías que empezaron a recibir para su autonomía y organización. De este esfuerzo nació en 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y, nueve años después, la Organización Nacional Indígena de Colombia, cuyas experiencias serían claves en la posterior conquista de los derechos políticos y culturales de dichas comunidades.

La crisis también abrió camino a un auge de la protesta urbana. Un hito fue el Programa Mínimo de 1971, con el cual los estudiantes universitarios, tras meses de movilización que les costaron muertos y detenidos, lograron consolidar la autonomía institucional, la renuncia de la injerencia de la Iglesia en su administración y los primeros intentos de cogobierno. Aún

mayor fuerza tuvo el descontento por una inflación desbordada y las expectativas incumplidas de reformas sociales por parte del Gobierno de López Michelsen, cuya principal expresión fue el paro cívico de 1977, en el que la desproporcionada represión del Gobierno terminó por marcar la época. Desde entonces los militares acentuarían aún más su presencia en la vida política del país y se harían cada vez más frecuentes los allanamientos, los consejos verbales de guerra a civiles y, por primera vez, las desapariciones forzadas.

Esa situación, sumada al aumento de la delincuencia común, también reflejaba que el conflicto armado se hacía cada vez más violento. La guerrilla se degradaba aumentando las extorsiones a industriales y terratenientes o el asesinato de personalidades políticas, como el líder sindical José Raquel Mercado y el exministro Rafael Pardo Buelvas. La situación fue un pretexto para que el Gobierno de Julio César Turbay decretara en 1978 el Estatuto de Seguridad, el cual otorgaba a las fuerzas armadas amplias facultades para combatir y juzgar a los grupos subversivos y también a quienes se consideraban sus aliados. A esa decisión el M-19 respondió con un publicitado robo de armas a un batallón del ejército en 1979 y con el asalto a la embajada de República Dominicana en 1980, en el que mantuvieron secuestrados a diplomáticos extranjeros durante sesenta y un días. El estatuto fue ampliamente criticado por las acciones emprendidas contra numerosos civiles (torturas, exilios y desapariciones), por lo que fue declarado inconstitucional en 1981; sin embargo, su experiencia normalizó la violencia contra la izquierda y las nacientes organizaciones de derechos humanos.





En esa misma Colombia de los años 70, un nuevo fenómeno económico, político y cultural entraba en escena: el narcotráfico, una economía clandestina tolerada por el Estado y el conjunto de la sociedad en general, la cual se beneficiaba de la corrupción política, las limitadas fuentes de empleo y la presencia poco efectiva del Estado en las regiones periféricas del país. Su primera manifestación fue la "Bonanza Marimbera", emprendida por bandas que se dedicaban a la producción de marihuana y su exportación a Estados Unidos; pero, de forma mucho más rentable y perdurable, apareció en los años 80 la cocaína y poco después la heroína. El aprovechamiento de las rutas del contrabando y el amplio control que ejercieron sobre la cadena de producción empoderó a estas nuevas estructuras criminales, conocidas como carteles, las cuales lograron dominar amplios sectores de la población: políticos que les aseguraban su apoyo, miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales que les brindaban seguridad, y comunidades campesinas y de la periferia urbana de donde tomaban mano de obra y lealtades.

La persecución a esta actividad por parte de un Estado colombiano presionado por Estados Unidos hizo que la judicialización y extradición de narcotraficantes fueran temas comunes en la agenda política y en los medios de comunicación. El símbolo de esta nueva lucha fue el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien denunció públicamente a Pablo Escobar, un hombre que, detrás de su fachada de excéntrico empresario con un corto paso por la Cámara de Representantes, había convertido a Medellín en el centro mundial de tráfico de

cocaína, con una red de producción y apoyos sociales y armados que se extendía por todo el resto del país. Comenzaba así otra guerra más: en abril de 1984 Lara Bonilla fue asesinado por dos adolescentes contratados por la mafia como sicarios, iniciándose con ello un trágico ciclo de atentados que aterrorizaron al país por años.

El narcotráfico también se convertiría en otro protagonista del conflicto político y social precedente, como fuente de financiación de unas guerrillas que por igual se fortalecieron y corrompieron más, al tiempo que transformó a los paramilitares que combatían a la subversión, cuando ya había caído en descrédito la fórmula de los años 60 de armar a la población civil. El primero de estos últimos grupos fue Muerte a Secuestradores (MAS), aparecido en 1981, el cual planteó tácticas que luego serían imitadas por otras estructuras criminales: asesinato de guerrilleros y sus familias, junto con la persecución a simpatizantes de partidos de izquierda y políticos o periodistas que criticaran sus acciones. Militares, policías y políticos participaron en la conformación de estas organizaciones, a tono con la corrupción y el lenguaje represivo que previamente se habían normalizado en el país.

Aquel recrudecimiento del conflicto planteó al Gobierno de Belisario Betancur la necesidad de hacer la paz con las guerrillas. A partir de 1982 se negociaron treguas y amnistías con las FARC y el M-19. Del trabajo con el primer grupo surgió la Unión Patriótica (UP), un partido legal que integró a diferentes organizaciones políticas y sociales, y que abriría campo a los guerrilleros para su reinserción; sin embargo, los grupos





paramilitares asesinarían a miles de sus miembros con participación de agentes del Estado. Por su parte, la vacilación del M-19 y el sabotaje por parte de detractores militares y civiles hicieron que estos diálogos también fracasaran. Como respuesta, el 6 de noviembre de 1985 un comando del "Eme" asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá y secuestró a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bajo la respuesta igualmente demencial del ejército, murieron 11 uniformados, 33 guerrilleros y 43 civiles —incluyendo a 10 magistrados—, además de que hubo 11 personas desaparecidas, algunas de las cuales fueron vistas saliendo con vida del palacio. Al final, un incendio destruyó el edificio y dejó acusaciones mutuas de haber sido provocado para ocultar investigaciones judiciales, ya fuera contra narcotraficantes o altos mandos militares.

La tragedia fue atestiguada por todo el país a través de la radio y la televisión, a pesar de los intentos de censura del Gobierno. Allí se expuso la inocultable crisis del pacto político que veintiocho años antes había pretendido restaurar la legitimidad de las instituciones ante su ciudadanía. Pero, como el Palacio de Justicia, esta legitimidad estaba convertida en cenizas.

**Para seguir aprendiendo**

Los textos sobre el Frente Nacional y los años que lo sucedieron son abundantes por el trabajo de testigos de la época y de ciencias sociales cuyo desarrollo coincidió con aquel periodo histórico. Una síntesis clásica de la época fue *Colombia hoy* (1984), dirigida por Mario Arrubla, mientras que en bibliografía reciente se recomienda *Colombia: La búsqueda de la democracia* (2016), coordinado por Jorge Orlando Melo.

El panorama institucional se analiza en *Crónica de cuatro décadas de política* (2006) de Daniel Pécaut, *¿Lo que el viento se llevó?* (2007) de Francisco Gutiérrez Sanín, el libro colectivo *Cincuenta años de regreso a la democracia* (2012) y *La paz olvidada* (2018) de Robert Karl; los movimientos sociales se estudian en *Idas y venidas, vueltas y revueltas* (2003) de Mauricio Archila, y, entre la abundante literatura del conflicto, está el trabajo de la Universidad Nacional *Nuestra guerra sin nombre* (2006), al que se suman los trabajos periodísticos *Las guerras de la paz* (1985) de Olga Behar y *A lomo de mula* (2016) de Alfredo Molano. Sobre tráfico de drogas, destacamos *Contrabandistas, marimberos y mafiosos* (1994) de Darío Betancourt y Martha García y *Análisis histórico del narcotráfico en Colombia* (2003) del Museo Nacional.

Parte de la diversidad social de la época se descubre en *Los de arriba y los de abajo* (1984) de Miguel Urrutia y *Los años sesenta* (2014) de Álvaro Tirado Mejía, mientras que en el libro digital *Nuestra memoria es para siempre* (2017) de Juan Camilo Rincón se estudia la historia de los medios.

Tres películas de muy distinta orientación pueden ilustrar muy bien la complejidad social y política del periodo: *Chircales* (Marta Rodríguez y Jorge Silva, 1972), *Camilo, el cura guerrillero* (Francisco Norden, 1974) y *Siempreviva* (Klych López, 2015).



# 11.

# EL ÚLTIMO CONTRATO SOCIAL (1985-2010)

En 1992 la maestra Lucila Díaz perdió su empleo en una escuela rural de Ventaquemada, Boyacá. Las directivas de la institución ordenaron su retiro luego de que les hubiera dado a sus estudiantes de tercero de primaria una lección sobre sexualidad humana. En respuesta, la profesora Díaz interpuso una acción de tutela, un mecanismo recién creado por la Constitución con el fin de proteger sus derechos fundamentales. Su caso fue evaluado por los magistrados de la Corte Constitucional, una nueva entidad que apenas llevaba seis meses de funciones, quienes no solo fallaron a favor de la maestra, sino que exhortaron al Gobierno nacional para que a partir de ese momento la educación sexual fuera obligatoria y abierta en todos los colegios del país, considerando los vacíos al respecto dentro de la política educativa del Estado. Un aparente incidente local, de una forma revolucionaria, se convertía en un modelo de las nuevas obligaciones que se le adjudicaban al Estado no solo para proteger a

una ciudadana, sino también para incentivar una política pública que beneficiaría a las nuevas generaciones.

En 2002 el horror llegó a Bojayá, una población de la selva del Chocó. Para asegurarse el control sobre el río Atrato, doscientos cincuenta paramilitares provenientes del Urabá invadieron la cabecera municipal, habitada en su gran mayoría por afrodescendientes, sin que se registraran incidentes con ninguna de las unidades del ejército que patrullaban el camino. Durante los días siguientes, delegados de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo alertaron al Gobierno sobre la posibilidad de que la población civil terminara en un fuego cruzado entre paramilitares y guerrilleros de las FARC, quienes permanecían en la zona rural del municipio. Una semana después, efectivamente, la guerrilla atacó el pueblo y forzó a sus habitantes a refugiarse en una iglesia cercana a las calles donde estaban replegados la mayoría de los paramilitares. Los guerrilleros dispararon cilindros de gas manipulados como proyectiles, uno de los cuales explotó en la iglesia, asesinando en el acto a setenta y nueve personas, mientras otras trece murieron en los días posteriores y seis más murieron de cáncer años después.

Ambos episodios, con diferentes nombres y circunstancias, volvieron a repetirse en otros lugares de Colombia durante las décadas de 1990 y 2000. Por un lado, eran las muestras de un país moderno y diverso, obligadas por una rápida adaptación de unas instituciones políticas que se habían comprometido a proteger a sus habitantes; por otro lado, eran las amenazas irresueltas a la tranquilidad de aquel país, reflejadas en un enorme





fracaso de esas mismas instituciones, unas veces ineficientes y otras corrompidas. Era el país que despenalizaba la eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación o riesgo crónico; el país donde por primera vez las mujeres eran mayoría en la población de profesionales; el país que reconocía la autonomía de las comunidades afro e indígenas en sus territorios colectivos; el país que en veinticinco años reducía el analfabetismo a más de la mitad (seis por ciento en 2010), aumentaba en seis años la expectativa de vida y multiplicaba de 3,3 a 40 por ciento la cobertura de la educación superior. Pero también era el país de ciento cincuenta mil muertes violentas entre 1985 y 2012, veinte mil secuestros perpetrados por las guerrillas, mil masacres hechas por los paramilitares, cinco millones de desplazados, diez mil víctimas de minas antipersona, mil setecientos casos de violencia sexual, veinticinco mil desaparecidos...

Era el país de las ilusiones que, en medio del horror de la violencia, despertaba la Constitución del 91; pero también era un país desilusionado porque aquellas fuerzas de desarrollo parecían mostrarse impotentes ante un conflicto que dejaba heridas cada vez más grandes. En esa ambigüedad vivió la generación de colombianas y colombianos que forjaron su último contrato social, es decir, el acuerdo de normas que establece la sociedad con sus instituciones con el fin de satisfacer sus necesidades y derechos. La que viene a continuación es una historia de episodios esperanzadores como el de Lucila y de fracasos vergonzosos como el de Bojayá.

## El 91: entre crisis y esperanzas

En los años 80 y 90, Colombia era un país que podía resultarle muy extraño a un observador imparcial. Experimentaba una estabilidad económica sobresaliente para el volátil contexto latinoamericano, mientras que la urbanización y el acceso cada vez mayor a los medios de comunicación masiva cohesionaban culturalmente a sus habitantes, a través de los ídolos de la música tropical y vallenata, los triunfos de los ciclistas en Europa y los goles que llevaron a su selección de fútbol a la Copa Mundial. El país también se unía con las festividades populares consolidadas a lo largo del siglo o las producciones de una industria de la televisión que vivió su edad de oro con un público fiel y masivo. Frente a esa integración cultural, una nueva generación tomaba conciencia de sus diversidades étnicas, políticas o culturales, haciéndolas cada vez más visibles e imposibilitando que los sectores hegemónicos siguieran dándose el lujo de ignorarlas. Era el país que se autodefinía mediante íconos como Joe Arroyo, el "Pibe" Valderrama, Shakira o Jaime Garzón. Lo sorprendente era que todo esto pasaba en medio de ciclos de violencia a extremos muy difíciles de manejar.

En los 80 el narcotráfico intensificaba su influencia en la sociedad rondando el cinco por ciento del producto interno bruto; las FARC y el M-19 experimentaban un crecimiento sin precedentes; el ELN y el EPL se reconstruían, y los grupos paramilitares hacían presencia en cada vez más lugares del país. Así, cuando Virgilio Barco fue elegido presidente en 1986, se hizo necesario fortalecer el rol del Estado como garante





de la paz, recuperando la autoridad y enfrentando las causas políticas y sociales del conflicto. Como parte de ese propósito, dos intentos por reformar la Constitución naufragaron en el Congreso, bajo la contradicción impuesta por el Plebiscito de 1957 de que solo el legislativo podía reformar la carta.

Mientras tanto, la política del Gobierno frente al conflicto parecía al fin transformarse. La ofensiva contra los carteles de la droga reemplazó al protagonismo de la guerrilla en la agenda de la fuerza pública, mientras se reanudaban las ilusiones de paz que habían quedado sepultadas en la toma del Palacio de Justicia y el imparable exterminio de los militantes de la UP. Por su parte, la crisis de participación política recibía un alivio con la primera elección popular de alcaldes en 1988 y la desmovilización del M-19 en 1990, junto con la dejación de armas, al año siguiente, del EPL y otros grupos guerrilleros menores.

Pero a pesar de estos logros, la violencia no cesó. Para las elecciones de 1990, Colombia tuvo el doloroso récord de tres candidatos presidenciales asesinados: el liberal Luis Carlos Galán, quien venía de personificar la lucha contra el narcotráfico; Bernardo Jaramillo, líder de la UP, luego de que Jaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido, de hacer explotar las sedes de los diarios *El Espectador* y *Vanguardia* y el edificio sede de la inteligencia estatal, además de ponerle precio a la vida de cientos de policías y jueces. Los objetivos de la mafia oscilaban

entre silenciar a voces críticas en la vida pública y presionar al Gobierno para que cesaran sus órdenes de captura o extradición. El saldo: más de seiscientos atentados en diez años.

El clima de violencia movilizó a ciudadanos de todas las tendencias políticas para impulsar en 1990 una asamblea constituyente. César Gaviria, sucesor de Galán, llegaba a la presidencia bajo el convencimiento generalizado de que se necesitaba un nuevo orden político contra la crisis. Por la parálisis impuesta por las propias instituciones, esa convocatoria se logró apelando al polémico estado de sitio de la vieja carta de 1886.

La Constituyente, por fin elegida, estuvo integrada por una diversidad inédita: liberales, conservadores, una izquierda repartida entre la UP y el M-19, junto con líderes indígenas y minorías religiosas. Esa amplitud se reflejó siete meses después en una carta política que consagró los derechos fundamentales, económicos y sociales de la población colombiana, al tiempo que estableció nuevos mecanismos de participación ciudadana, creó figuras de un enorme valor para proteger al ciudadano (la acción de tutela fue la más conocida) y nuevas entidades de control político y jurídico (principalmente la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional). La Constitución de 1991 también consolidó la descentralización, al establecer la elección popular de gobernadores y al crear los departamentos de Arauca, Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada, con los que se llegó a los treinta y dos actuales. El cambio electoral también se dio con la segunda vuelta en la elección presidencial y mayores garantías para la diversidad de partidos y movimientos políticos. Las comunidades





indígenas y afrodescendientes lograron espacios muy valiosos de reconocimiento mediante la creación de distritos electorales propios en el Congreso y derechos de autonomía política y cultural en sus territorios colectivos.

Así, el 91 fue la expresión de una sociedad moderna que ya no cabía en el modelo diseñado bajo el Frente Nacional, la cual iba desde la relación más cotidiana del ciudadano con el Estado hasta la necesidad de establecer una apertura democrática que hiciera frente a las causas del conflicto armado. La Constituyente era presidida por los líderes de sus tres fuerzas principales: el conservador Álvaro Gómez, el liberal Horacio Serpa y el exjefe del M-19 Antonio Navarro Wolff. Se creó la Fiscalía General de la Nación pensando combatir el crimen organizado con mayor eficiencia; se establecieron controles más estrictos al ejecutivo para la declaratoria de estados de excepción, poniendo fin al represivo estado de sitio; la justicia penal militar fue restringida a miembros de la fuerza pública, y se amplió el campo de acción de la rama judicial con la creación de la Corte Constitucional, cuyas sentencias aún hoy siguen materializando aquel esfuerzo modernizador. Era el Estado social de derecho, un concepto propio adoptado por la nueva carta para definir las amplias responsabilidades de las instituciones colombianas ante su ciudadanía.

El sistema parecía así legitimarse de nuevo. Las fuerzas regionales recuperaban su valor con la elección de alcaldes y gobernadores, en los que cada vez eran más importantes los movimientos políticos identitarios (étnicos, cívicos o religiosos), sumados a otros grupos que para atraer electores debieron

definirse como "independientes" o al margen de los partidos. Ese impulso permitió logros en la política local como los programas de cultura ciudadana, recuperación del espacio público y seguridad alimentaria, en Bogotá, o las obras de infraestructura y recuperación de la calidad de vida en Medellín, cuyo principal símbolo fue la inauguración del metro en 1995. De forma paralela, los partidos tradicionales seguían demostrando su fuerza a escala nacional con la elección del liberal Ernesto Samper en 1994 y el conservador Andrés Pastrana en 1998, si bien el fin definitivo del bipartidismo fue anunciado bajo la elección de Álvaro Uribe en 2002. Para sobrevivir, los remanentes de las viejas maquinarias bipartidistas operaron desde entonces como redes de apoyo autónomas que negociaban el poder con el candidato presidencial mejor posicionado. Así, el clientelismo sobrevivió, fortalecido además con la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo.

Las respuestas del nuevo sistema al narcotráfico también parecieron insuficientes. La eliminación de la extradición por la Constituyente, pensada para persuadir a los narcotraficantes de someterse a la justicia, fue ridiculizada con la fuga en 1992 de Pablo Escobar de una cárcel hecha a su medida, apenas un año después de su entrega, y cuyo poder desde la clandestinidad solo pudo cesar por la fuerza, cuando fue asesinado en un operativo policial en diciembre de 1993. El cartel de Cali, la estructura mafiosa que se había disputado el poder con Escobar, también fue desmantelado en 1996, no sin antes dejar al Estado en una grave crisis de legitimidad por haber financiado la campaña que llevó a Ernesto Samper a la presidencia. Esta crisis se agravó





con la decisión de la Cámara de Representantes de no acusar a Samper ante el Senado, mientras numerosos políticos eran investigados o condenados penalmente por haber recibido ese mismo dinero. Cuando esa crisis escalaba, el jefe conservador Álvaro Gómez era asesinado y Estados Unidos influía en la política del país con sanciones económicas, en represalia por el escándalo del gobierno Samper.

El conflicto, por su parte, llegaba a una etapa de recrudecimiento. El paramilitarismo ahora dirigía su violencia contra la descentralización y las nuevas autoridades locales, en su vieja complicidad con agentes del Estado, además de presionar el abandono de tierras y su posterior ocupación por terceros, mientras unificaba su estructura con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997. Su capacidad criminal puso en el mapa a localidades que padecieron sus masacres: El Aro, Mapiripán, La Gabarra, El Chengue, El Salado, Macayepo o hasta la cárcel La Modelo de Bogotá. Por su parte, se hicieron cada vez más frecuentes los ataques de las FARC y el ELN a cascos urbanos, a la infraestructura petrolera y energética o a bases militares: El Billar, Las Delicias, Patascoy, Machuca, Mitú, entre otros, fueron sus vergonzosos aportes al mapa de los atentados terroristas y los secuestros masivos. Volvía la sensación de ingobernabilidad de la década anterior, mientras que el conflicto se había vuelto parte de la cotidianidad y la cultura del país, pues ya no solo estaba presente en la agenda de medios y políticos, sino también como tema de reflexión en el cine, la música y la literatura, o como permanente fuente de financiación de la economía legal.

Este agridulce acontecer institucional se había dado en medio de una brusca transformación económica. Con la justificación de mejorar el aparato productivo y amparado en la libertad de gestión que ofrecía la nueva Constitución, el Gobierno de César Gaviria inició un proceso de reformas a tono con lo que se conoce como el Consenso de Washington, esto es, el ajuste de las economías del continente a las exigencias de la economía global, siguiendo los dictados de la banca multilateral. El control del déficit fiscal para estabilizar la economía, la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales de servicios públicos o de fomento al sector productivo, la igualdad de condiciones del capital extranjero o la desregulación de los mercados laboral y de capitales fueron algunas de las reformas que a partir de los años 90 caracterizaron la economía del país. En consecuencia, el sector privado, y principalmente el financiero, se convertiría en el motor de la urbanización y los servicios de salud y seguridad social, acelerando como nunca el aumento de su cobertura, pero también captando numerosos recursos del sector productivo.

El neoliberalismo, llamado así por su aparente semejanza con las ideas del siglo XIX de mínima intervención del Estado en la economía, pronto sería el foco de nuevas discrepancias. Las protagonizarían grupos sindicales y agrarios, temerosos del desmonte de las conquistas sociales y laborales obtenidas a lo largo del siglo XX y de la desprotección de un sector agropecuario que ya había sido golpeado por el conflicto armado. Principalmente, este recelo se basó en el brusco viraje del país hacia una economía centrada en el sector minero y en





el monocultivo, consolidando el fin del país cafetero, y en el hecho de que regiones afectadas por el desplazamiento forzado también se volvieron focos de desarrollo de estas economías.

## Otro siglo, ¿otro país?

Mientras en el resto del continente el fin de la guerra fría hacía a las viejas guerrillas integrarse al sistema democrático, Colombia sufrió una ofensiva guerrillera que por primera vez mostraba la limitada capacidad defensiva del Estado. Al mismo tiempo, la expansión paramilitar hacia zonas de economía extractiva y ganadera retrasaba aún más al campo y destruía las bases sociales de los sectores políticos alternativos que acababan de florecer con el 91. El nuevo siglo, por lo tanto, estimuló otras formas de abordar el conflicto.

La primera señal se dio cuando el Gobierno de Andrés Pastrana promovió nuevos diálogos de paz con las FARC, para lo cual se desmilitarizaron cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquetá. El ambiente era favorable, pues más de ocho millones de ciudadanos se habían manifestado en octubre de 1997 por una resolución pacífica del conflicto armado. Mientras se dialogaba en el territorio despejado, las hostilidades no paraban: la guerrilla aprovechó para continuar con su escalada de atentados y secuestros, alimentando la desconfianza de la ciudadanía, y justificándose en la desidia del Gobierno ante el crecimiento descontrolado del paramilitarismo. Los diálogos acabaron en febrero de 2002, cuando las FARC secuestraron un avión en Neiva que transportaba a un senador.

Por otro lado, el narcotráfico seguía teniendo un significativo poder económico, rondando el cuatro por ciento del PIB y motivando al Gobierno de Pastrana a suscribir con Estados Unidos el Plan Colombia, una estrategia de cooperación para erradicar la producción de estupefacientes y fortalecer la capacidad militar del Estado. En la práctica, también se convirtió en una táctica para fortalecer a la fuerza pública contra la subversión, luego de que las FARC demostraran su capacidad de atacar instalaciones militares y policiales, con el correspondiente secuestro de uniformados. El Plan Colombia, como señala el profesor César Torres, fue el primero de tres puntos de quiebre en la estrategia defensiva del Estado; el segundo vendría del exterior, con la campaña de "Guerra Contra el Terrorismo" promovida desde Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; el tercero fue la elección de Álvaro Uribe en 2002, con mayoría absoluta, en medio del descrédito de las conversaciones de paz.

El Gobierno de Uribe promovió una nueva concepción del conflicto a través de su "política de seguridad democrática", según la cual era necesario un Estado fuerte y legítimo, capaz de atraer la inversión extranjera y generar confianza en el sector privado, el cual se consideraba amenazado por un terrorismo internacional financiado por el narcotráfico, que obstaculizaba el desarrollo de las instituciones y de la economía. Según esta posición, el Estado se consideraba a sí mismo como víctima; y, de hecho, la expresión "conflicto armado" se asumía como una legitimación de la subversión. Bajo esta lógica, el Estado no podía ser denunciado por ningún tipo de extralimitación y, en la práctica, la defensa de los derechos humanos, las libertades





ciudadanas o los derechos de las víctimas quedaba relegada o vista con desconfianza por el Gobierno, sus partidos de coalición y medios de comunicación aliados.

Ante sectores muy significativos de la opinión pública, el propio accionar criminal de las FARC favorecía este viraje. Apenas finalizaron los diálogos con el Gobierno Pastrana, secuestraron a doce diputados del Valle del Cauca en plena sesión, con el fin de presionar un canje de guerrilleros presos, y los funcionarios fueron asesinados en cautiverio en 2007. En 2003 una bomba en un club social de Bogotá provocó la muerte de treinta y seis civiles; otro atentado a un barrio en Neiva mató a quince personas, la mayoría agentes de inteligencia, y en 2009 fueron masacrados veintisiete indígenas de la comunidad awá, horrores sumados al secuestro y asesinato de los gobernadores de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. Como respuesta, hubo golpes contundentes a las FARC en esa política de defensa financiada por el Plan Colombia, que los obligaron a replegarse, lo cual redujo las cifras de secuestros y atentados. El más visible de estos triunfos ocurrió en 2008, cuando se logró la liberación de cuatro policías, siete militares, tres contratistas estadounidenses y la candidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada hacía seis años.

Sin embargo, las críticas a esa concepción militarista del conflicto tampoco se hicieron esperar. Sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y académicos críticos se convirtieron en objeto de seguimientos ilegales por parte de agentes de inteligencia del Estado, algunos de los cuales también recibieron amenazas o atentados. De igual forma, se revelaron los "falsos

positivos", eufemismo para referirse al asesinato de más de seis mil civiles a manos de miembros del ejército para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. La doctrina de guerra preventiva, ligada a este nuevo lenguaje, también desató una crisis diplomática con Venezuela y Ecuador, donde se refugiaban unidades de las FARC, y luego de que a principios de 2008 el Gobierno colombiano ordenara un ataque del ejército a un campamento en este último país, en el cual murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. El Grupo de Río, un espacio continental de concertación política creado en 1986 bajo iniciativa de Colombia, evitó que esta crisis tuviera consecuencias mucho más graves para la paz del continente.

La estrategia del Gobierno Uribe también se tradujo en la desmovilización de buena parte de los grupos paramilitares y el fin de las AUC como la estructura que los centralizaba. Este proceso significó para los sectores opositores la posibilidad de presionar por un sistema de justicia transicional y la antesala para que se empezara a concebir un posconflicto que tuviera como elementos centrales la memoria y los derechos de las víctimas. Aunque la desmovilización acertó con el retiro de un actor ilegal con un enorme poder destructivo, también actuó a medias en el proceso de justicia y reparación a las víctimas, al priorizar los procesos por narcotráfico, especialmente cuando el Gobierno ordenó en 2008 la extradición de los principales comandantes de las AUC. Tres años antes, algunos de esos extraditados habían sido ovacionados en una sesión de la Cámara de Representantes, lo cual reflejó un nuevo escándalo: las alianzas que habían impulsado políticos locales con los paramilitares





para llegar al Congreso y a gobernaciones, en un sabotaje al proceso de apertura política diseñado por la Constitución del 91. Debido a que la mayoría de "parapolíticos" apoyaron la reelección de Uribe en 2006, los ataques de la inteligencia estatal también se dirigieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban esta alianza.

Al mismo tiempo, la convivencia de estos grupos armados con agentes del Estado demostraba estar aún viva. Así lo hacían ver las denuncias de participación paramilitar, desapariciones y desplazamientos durante la Operación Orión, bajo la cual la policía y el ejército desalojaron en 2002 a las guerrillas urbanas de la Comuna 13 de Medellín, o en el ataque concertado de paramilitares y una unidad del ejército a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2005. Tras el fin de las AUC, surgió un rearme de integrantes de los antiguos grupos de autodefensa, en alianza con narcotraficantes y delincuentes comunes. Estos grupos neoparamilitares, denominados por el Estado "Grupos Armados Organizados" (GAO), se convertirían en una nueva amenaza para la seguridad ciudadana a través de nombres como La Oficina, Clan del Golfo, Los Rastrojos, Águilas Negras y otros tantos que desde entonces ingresaron al lenguaje de los colombianos.

Todo esto también ocurría bajo un sorprendente consenso para establecer un sistema pluripartidista acorde con el espíritu de la Constitución del 91, el cual permitió la aparición de nuevas colectividades a partir de 2003. Del ala derecha del viejo liberalismo surgieron Cambio Radical y el Partido de Unidad Nacional, eje de la coalición que apoyó a Álvaro Uribe. De igual forma, los militantes de antiguos grupos de izquierda, independientes

o minorías religiosas se agruparon en el Polo Democrático, el Partido Verde o el movimiento MIRA. Con estos nuevos nombres surgía la esperanza de un sistema de partidos con agendas claras y una mayor responsabilidad ante la ciudadanía. El sistema fue rápidamente puesto a prueba: la mencionada parapolítica provocó la disolución de los partidos menores de la coalición uribista, como también su reciclaje en cambiantes "empresas electorales", mientras se hacían públicos los sobornos de funcionarios del Gobierno a algunos congresistas que votaron la reforma que permitió la reelección de Uribe en 2006. Mientras esto ocurría, políticos oficialistas y opositores protagonizaron en 2010 el Carrusel de la Contratación en Bogotá, multimillonarias comisiones en la licitación de obras públicas que llevaron a la cárcel al alcalde Samuel Moreno.

Pero el país no solo cambiaba en su traumático proceso político, lo hacía también en su cotidianidad. Para las décadas de los 90 y 2000, las mujeres se convertirían en la mayoría del mercado laboral y de la educación superior, mientras que la proporción de alumnos matriculados en educación primaria aumentaba del 62 al 83 por ciento y en secundaria del 32 al 63. Mientras la cultura legitimó por fin las formas de diversidad familiar que siempre habían existido, la fecundidad de los colombianos descendió, pasando de un promedio de cinco hijos por hogar en 1971 a tres en 1992 y a dos en 2009, a pesar de que el éxito de esa disminución no sería tan veloz entre las familias de menores recursos. El crecimiento urbano de la generación anterior pronto se extendió a las zonas metropolitanas de las ciudades principales, casi nunca con una política urbana





eficiente, pero ubicando a poblaciones otrora secundarias como Soledad, Soacha y Buenaventura entre los primeros veinte municipios del país. Diferentes hitos marcaron esa necesidad de replantear el desarrollo de la infraestructura urbana: desde la crisis energética de 1992 o el devastador terremoto de Armenia en 1999 hasta la expansión de redes de buses articulados por las avenidas de Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Cali o Barranquilla. Las dinámicas de la economía y del conflicto también siguieron acelerando la migración, sumando más de tres millones de colombianos residentes en el exterior para el año 2000 y un millón más en la siguiente década.

Aquel país urbano y diverso aceleraba sus cambios culturales a través de los medios: la radio desplazó a la prensa como el principal formador de opinión pública y la televisión vivió un admirable desarrollo industrial, con el despegue de los canales regionales y el aumento de la cobertura de los canales nacionales, poco antes de que el control de su mercado pasara en 1998 al duopolio de las productoras Caracol y RCN. Al mismo tiempo, una lenta revolución tecnológica iniciaba en los años 80 con la importación de microcomputadores, abriendo paso a un mercado informático que, aunque pequeño, permitió la conexión oficial del país a internet en 1995. Las entidades educativas y poco después los hogares de las ciudades harían por fin del computador un objeto de uso doméstico y, para 2010, la red ya era un medio imprescindible en nuestra vida política, económica, cultural y social.

De esta manera, un país hijo de los aciertos y deudas del 91 asumía una serie de desafíos que le permitieran soñar con un tercer siglo de vida republicana pacífico y estable.

**Para seguir aprendiendo**

Existen estudios de este periodo con un gran valor testimonial, como *1989* (2019) de María Elvira Samper; *Memorias para la democracia y la paz* (2012), sobre la Constituyente; *Suma de ideales para Colombia* (2022) de María Teresa Garcés y Marcela Romero, sobre la Constituyente y la Constitución del 91; *Tras las huellas de la crisis política* (1996), editado por Francisco Leal; *Adiós a la política, bienvenida la guerra* (2002) de León Valencia, y *La culebra sigue viva* (2020) de Luz Margarita Cardona.

Sobre historia del conflicto, se destacan la obra colectiva *Nuestra guerra sin nombre* (2006), el informe *¡Basta ya!* (2013) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y *Caminos de guerra, utopías de paz* (2021) de Gonzalo Sánchez. Otros grandes estudios sobre temas del conflicto son *Violencia pública en Colombia* (2012) de Marco Palacios; *Guerras recicladas* (2014) de María Teresa Ronderos; *Aquí no ha habido muertos* (2018) de María McFarland; *Detrás de la guerra en Colombia* (2019) de Ariel Ávila, y, sobre narcotráfico, *Víctima de la globalización* (2012) de James Henderson.

Dos colecciones destacadas sobre diversidad cultural son la *Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia* (2010) y la *Biblioteca de Literatura Afrocolombiana* (2010) del Ministerio de Cultura, trabajos notablemente precedidos por la *Geografía Humana de Colombia* (1998) del ICANH y la serie documental *Yuruparí* (1983-1986).

En cuanto a series de televisión, está la síntesis *Colombia vive* (Caracol TV/*Semana*, 2007), que puede complementarse con *Constitución, 30 años en el futuro* (Señal Colombia, 2021). Y en obras de cine sobre el conflicto, se destacan los documentales *Pequeñas voces*





(Jairo Carrillo, 2011) y *El testigo* (Kate Horne, 2018), al igual que las películas dramáticas *Retratos en un mar de mentiras* (Carlos Gaviria, 2010), *Los colores de la montaña* (Carlos Arbeláez, 2010) y *Violencia* (Jorge Forero, 2016).

# 12.

# Los desafíos contemporáneos

Hagamos un viaje imaginario al Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el equipo colombiano de fútbol disputa sus juegos de local. Llenemos sus 46.000 sillas con una población que represente la diversidad y los contrastes de los cincuenta millones de habitantes que hoy, más o menos, tiene el país. Tendríamos que sentar en las tribunas a 23.500 mujeres y a 22.500 hombres; 7.000 de ellas y 5.000 de ellos serían menores de catorce años, mientras que 1.500 mujeres y 2.000 hombres serían mayores de sesenta y cinco. 11.000 asistentes vendrían del campo y entre 500 y 1.000, muy mal contados, habrían nacido en la hermana Venezuela. Algo más de 7.000 asistentes vivirían en Bogotá, otros 7.000 se repartirían entre Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, mientras que apenas 650 vendrían de la región amazónica y 59 de las islas de San Andrés y Providencia, de los que 32 serían raizales. Cerca de 2.000 sillas estarían ocupadas por indígenas, alrededor de

4.700 por quienes se reconocerían como afrodescendientes y 4 por el pueblo rom.

1.200 espectadores estarían identificados por el Estado con alguna condición de discapacidad y tal vez 600 podrían declarar una orientación sexual o identidad de género diversa. Si nos atenemos a las últimas encuestas de creencias religiosas, 28.000 afirmarían ser católicos, un poco más de 9.000 de alguna otra denominación cristiana, algo menos de 2.000 podrían ser agnósticos o ateos, 9 musulmanes y 3 judíos.

En 26.000 sillas del Metropolitano, más de la mitad, no habría conexión a internet, 10.000 las ocuparían personas sin acceso a alcantarillado, 6.000 espectadores no tendrían acueducto en sus casas, ni 1.700 energía eléctrica. Si se enfermaran, 2.000 no podrían recibir asistencia médica por falta de dinero; de 34.000 mayores de quince años, 1.500 no sabrían leer ni escribir. Cerca de 20.000 asistentes tendrían que vivir durante un mes con menos de 100 dólares, lo que cuesta ir y volver en avión de Bogotá a Barranquilla en los días en que juega la selección; dentro de ese número, 6.800 vivirían con menos de 50 dólares al mes, el precio en la vida real de dos entradas a la tribuna más barata. Uno de cada diez asistentes, es decir 4.600, concentraría el sesenta y cuatro por ciento de la riqueza producida en todo el estadio. 124 sillas estarían vacías, la proporción de quienes murieron de covid entre 2020 y 2022...

Estos números, a pesar de ser visibles en muchos aspectos de nuestra cotidianidad, no siempre hacen parte del país que percibimos a diario en nuestra mente o mucho menos del país que, para volver a este censo imaginario, vemos por televisión





en esas mismas tribunas del Estadio Metropolitano. Esa es la generación de colombianas y colombianos que vivió el inicio del siglo XXI, sin duda mucho más consciente de su diversidad que hace treinta años, mucho menos arrastrada al fanatismo político que hace ochenta años o con un acceso a sus necesidades básicas muchísimo mayor que el de hace siglo y medio. Pero también es un país que, en el comprensible límite de su propia cotidianidad, desconoce las necesidades y urgencias de una respetable franja de su población y de su territorio, bajo amenazas que también lo afectan, aunque no las perciba a diario.

Eso sí, es una sociedad diversa que ha sabido visibilizarse en la última década, ya sea por la fuerza de los acontecimientos o de su propia conciencia. Así, se ha forjado, en medio de la incertidumbre y la controversia de los cambios, un país que le apuesta a mirarse con otros ojos, a superar la violencia y otros problemas estructurales que no se han atendido de forma eficiente durante generaciones, al tiempo que el entorno nos recuerda que no podemos seguirnos mirando solos, ni como individuos, ni como nación, ni como especie. Así es como va, por ahora, nuestra marcha en este siglo.

## La utopía de la paz

El profesor Gonzalo Sánchez afirma en uno de sus más recientes ensayos que el discurso de la paz se desvalorizó en Colombia durante la primera década del siglo XXI, debido al aumento de la violencia y al desgaste de los antiguos procesos de negociación. Las guerrillas venían de la carrera demencial de fortalecerse

hasta convertirse en un ejército regular; sin embargo, y como lo estudió Ariel Ávila, el Estado logró un fortalecimiento militar capaz de frenar ese objetivo y de desalojarlas de los epicentros de la economía legal, especialmente de las ciudades. Ambas partes del conflicto, sin embargo, confiaban en su propia fuerza y se daban el lujo de aplazar cualquier iniciativa de paz.

No solo la confianza de la propia fuerza, infundada o no, era la que aplazaba esta posibilidad. Las experiencias de los 80 y 90 enseñaron que, tras cada proceso de paz, se produjeron etapas de recrudecimiento de la guerra, con la correspondiente zozobra de quienes le habían apostado a la solución política del conflicto y el peligro de que los espacios abandonados por un grupo armado ilegal fueran ocupados por otro. Pero tarde o temprano, el lenguaje de la paz tenía que volver, como una materialización de aquella promesa de profundización democrática de la Constitución del 91.

En medio de esa encrucijada, en 2012 el país recibió la noticia de que el Gobierno de Juan Manuel Santos iniciaba una nueva negociación de paz con las FARC. Era el ministro de Defensa de la segunda fase de la Seguridad Democrática, quien además se había presentado a las elecciones de 2010 luego de que la Corte Constitucional derogara la convocatoria de un referendo que pretendía que Álvaro Uribe pudiera postularse a un tercer periodo presidencial. Por lo tanto, quien era considerado el sucesor de Uribe sorprendió al país con ese anuncio, como ya lo había hecho poco antes al normalizar relaciones con Venezuela y Ecuador. Pero, aunque la opinión pública se hubiera sorprendido y el uribismo indignado, los diálogos con





las FARC eran una consecuencia previsible del rumbo que había tomado el conflicto: el Estado había logrado debilitar enormemente a las guerrillas en lo militar y desacreditarlas en lo político, pero le era imposible lograr su rendición, mientras que las causas socioeconómicas que alimentaban la guerra siguieran vivas. También era urgente para el mismo Estado acabar con un conflicto sin par en el mundo y que obstaculizaba cualquier proceso de legitimación de las instituciones y un afianzamiento de la economía legal.

El nuevo mensaje era tan sugestivo como ambicioso: los diálogos le pondrían fin al conflicto, se harían en el exterior, contrariando las presiones políticas de las conversaciones de paz del pasado, y, recordando la presión de sectores de la sociedad civil frente a los diálogos con las AUC, habría un enfoque prioritario en las víctimas. En 2016 el Acuerdo de Paz fue finalmente firmado en Cartagena por Santos y Rodrigo Londoño, el comandante de las FARC que sustituyó a Alfonso Cano, muerto en un operativo del ejército cinco años antes. El sometimiento de las FARC a las reglas del Estado iría de la mano de la promesa del Estado mismo de reformar sus políticas rurales y de drogas, de ofrecer garantías de reinserción y participación política a los excombatientes y de acciones de verdad, justicia y reparación a las víctimas. El Gobierno, buscando legitimar el acuerdo, sometió su cumplimiento a un plebiscito dirigido a una ciudadanía volcada al abstencionismo y en la que sectores significativos de la opinión desconfiaban de la voluntad de paz de la extinta guerrilla. El resultado puso en peligro el acuerdo, pues el sesenta y dos por ciento de la ciudadanía no votó y,

contra el optimismo del Gobierno, una reducida mayoría de los votantes lo rechazó.

La incertidumbre obligó a una veloz renegociación del Gobierno, primero con la oposición y luego con las FARC, en la que se hiciera explícito que no habría cambios en el sistema económico, se establecieran compromisos más claros de reparación por parte de la guerrilla y se garantizara imparcialidad en la satisfacción política y judicial de las víctimas. El primer objetivo, desarmar a las FARC y reincorporar a sus integrantes a la vida civil, se logró finalmente en 2017. Pero el cumplimiento pleno del acuerdo quedó sin quienes lo condujeran dentro del Estado. La experiencia del plebiscito empoderó al uribismo, que para las elecciones de 2018 lideró una coalición de opositores al acuerdo y logró poner en la presidencia a Iván Duque, un hombre recién llegado a la vida pública, desconocido dentro y fuera del país, y decidido contradictor de la implementación. Era una contraparte que imitaba la estrategia que permitió en 2014 la reelección de Santos, al unir en su momento a defensores de las negociaciones de paz. Era también una vieja lección que otros países del mundo contemporáneo con heridas como las nuestras ya conocían: los procesos de paz no siempre unen a las sociedades que los atestiguan.

El acuerdo se ha convertido, por lo tanto, en la repetición de algunos logros frágiles del proceso constituyente de 1991: un admirable esfuerzo de pacificación de la sociedad y profundización democrática, cuyo cumplimiento ha sido más de una vez aplazado por la priorización de otros asuntos políticos, además de un nuevo diseño institucional (en este caso, de sistemas de





verdad histórica y justicia transicional) permanentemente deslegitimado por sectores políticos significativos. Aún falta, por supuesto, pensar en procesos de negociación que incluyan a todos los grupos armados, falta que la opinión pública atestigüe el desarrollo de los procesos de justicia y reparación de víctimas y, en un proceso de reinserción social mucho más visible que la reinserción política, hay que vencer una estigmatización que hizo que, para 2022, a los colombianos les pareciera normal el asesinato de más de trescientos firmantes del acuerdo.

Esta tragedia, ignorada por la mayoría del país, ha sido uno de los varios reflejos de lo que el analista Francisco Gutiérrez Sanín calificó en 2021 como un nuevo ciclo de violencia. Ya no hay un conflicto entre insurgencia y contrainsurgencia, sino una fragmentación de conflictos en distintas regiones del país, donde aparecen y desaparecen grupos armados que acuden al lenguaje del pasado reciente, pero cuya única disputa radica en el control de las economías del narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales (madereros y principalmente mineros). El cese de las políticas voluntarias de sustitución de cultivos ilícitos, pero también el aumento de la demanda mundial de cocaína, han allanado el terreno para que estas estructuras criminales, locales y extranjeras, se hagan al control de un mercado que no solo es tan grande como en el pasado, sino que sigue vivo en la agenda de seguridad del Estado.

La nueva guerra la protagonizan disidencias de las FARC, remanentes de la insurgencia con el ELN y lo que queda del EPL, grupos neoparamilitares y agentes del Estado que ocasionalmente se alían con cualquiera de los anteriores. El resultado

en 2022 era el registro desde la firma del acuerdo de más de doscientas masacres en veintitrés departamentos, más de trescientos eventos de desplazamiento y el asesinato de más de mil líderes y lideresas sociales, que en las regiones cumplen roles estratégicos en la defensa de los derechos humanos o el medio ambiente. Queda allí visible la tragedia de comunidades a las que no solo no había llegado la paz, sino a las que ni siquiera llegó el Estado tras la marcha de la guerrilla, en territorios donde sucede el ochenta por ciento de las muertes violentas que se dan al año en Colombia.

Como en el pasado reciente del Frente Nacional y del 91, la paz ha demostrado ser frágil mientras no se trabaje por resolver las causas del conflicto. Al igual que en generaciones anteriores, la clase dirigente ha sido inferior a su responsabilidad histórica, pues en su mayoría ha dado la espalda a procesos que restauren la confianza en las instituciones entre las comunidades más amenazadas por la nueva violencia, y., además, ha sido incapaz de replantear el nuevo lugar de Colombia ante una comunidad internacional que sí ha tenido el consenso de creer en el acuerdo y de salvar parte de su implementación.

En esa misma mirada de un pasado sin resolver se han desarrollado otros procesos políticos. La década de 2010 vivió un resurgimiento del movimiento campesino, sumado a las movilizaciones indígenas que llamaron la atención del país desde 2008, como expresión de un conflicto estructural que no se quiso resolver en el siglo pasado: la reforma rural, enfrentada a los intereses de los grandes propietarios de la tierra. Con un espíritu similar, el decenio inició con un movimiento estudiantil





de un volumen que no se veía desde hace cuatro décadas, al cual se sumaron desde 2019 las aspiraciones de ciudadanías diversas, en su mayoría jóvenes insatisfechos por la desigualdad, el desempleo, el desmonte del Acuerdo de Paz, el asesinato de líderes sociales y, desde 2020, la incertidumbre por la crisis económica y social que acompañó la pandemia de covid.

Esta democracia callejera, como nos lo recuerda el profesor Rodrigo Uprimny, también se ha expresado dentro de una sociedad polarizada, en la que hay un profundo descrédito de las instituciones y del liderazgo de los gobernantes (no importa si es un presidente de derecha, alcaldes opositores o un sucesor presidencial de izquierda), en una situación que se exacerba aún más con los bloqueos de las vías, el vandalismo de algunos manifestantes y la represión injustificada y desproporcionada de las autoridades que ha costado muertes, torturas y exilios. Durante su gobierno, Duque se movió entre la ampliación de la participación democrática de unos y las tentaciones violentas de otros, donde seguía vivo el sentimiento de exclusión múltiple y sistemática de millones de ciudadanas y ciudadanos.

Al iniciar la tercera década del siglo, Colombia se encontraba en una enorme incertidumbre política. Unas instituciones en crisis, administradas bajo un discurso represivo, una política de seguridad ineficaz y un gobierno sostenido por el clientelismo de la vieja clase dirigente, liderado por un uribismo que veinte años atrás había llegado al poder prometiendo todo lo contrario. La mayoría de los partidos que, también dos décadas atrás, prometieron reorganizarse en estructuras fuertes y modernas son hoy empresas que distribuyen sus votos al mejor postor,

mientras las opciones a la presidencia prefieren competir al margen de ellos, buscando seducir a una ciudadanía que no quiere relacionar a sus candidatos con esas estructuras, aunque terminen negociando con ellas. Eso sí, en un gesto positivo de madurez democrática, las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 abrieron paso a un pluralismo y a una alternancia sin precedentes en la historia política reciente. Por lo tanto, la posibilidad de enfrentar los desafíos con éxito por parte de quien esté en la presidencia, sin importar su tendencia ideológica, depende de una enorme capacidad de concertación.

Hay, en medio de la incertidumbre, mensajes de convivencia. También tenemos un país a la vanguardia en América Latina en la afirmación plena de derechos de comunidades LGBTI, de mujeres o de población en condición de discapacidad, gracias al esfuerzo de las organizaciones ciudadanas que las representan. Enfrentándose a los prejuicios o la indiferencia de la mayoría, temas como el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva o el derecho a la muerte digna hoy son objeto de legislación y políticas públicas. Otra forma de entender la administración de nuestras instituciones y su relación con sus ciudadanos es posible.

Y, para sorpresa nuestra, la comunidad internacional sigue mirando con admiración esas posibilidades de reconciliación, de la misma forma como los revolucionarios extranjeros hace dos siglos creían que nuestra naciente república era una esperanza para la humanidad.





## LA UTOPÍA DEL BIENESTAR

Estamos también, por supuesto, en un país que produce bienes y servicios. En un país que, al igual que en muchas otras partes del mundo, este proceso se ha enmarcado en un debate prolongado y permanente sobre el papel del Estado en la economía. Según un diagnóstico de José Antonio Ocampo, esta discusión se zanjó en la Colombia de los últimos treinta años con una liberalización de la economía que coincidió con un crecimiento del Estado.

Lo primero, según Ocampo, se tradujo en un descenso de la agricultura y la industria, frente a un crecimiento de sectores muy diversos de servicios: entre otros, el Estado, las telecomunicaciones y el sistema financiero. La tercerización laboral, es decir, cuando los trabajadores no son contratados directamente por las empresas sino por terceros, se convirtió en norma y resultado de este proceso, llegando a ocupar el sesenta y cuatro por ciento del empleo en la década del 2010. Por otro lado, si bien las últimas generaciones campesinas experimentaron un mayor acceso rural a los servicios sociales y públicos, especialmente en los años 80 y 90, estas políticas se debilitaron con los recortes presupuestales posteriores.

De ahí que desde la última década el sector agropecuario, políticamente diverso, haya sido uno de los ejes de la protesta social, especialmente la que se dio durante el gobierno Santos. La excepción a esa situación en el sector se dio bajo el crecimiento del monocultivo asociado a la exportación y las políticas de apoyo a los biocombustibles a partir del gobierno

Uribe, en sectores como la caña de azúcar y la palma aceitera. Al mismo tiempo la ganadería extensiva se vio beneficiada por el abandono de sectores productivos y por la falta de controles a la deforestación, particularmente en la región amazónica. Y al lado de todo esto, reina el incierto impacto del narcotráfico, pues, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga (UNODC), Colombia produjo el setenta por ciento de la cocaína que se consumió en 2018 en el mundo, a pesar de que cuatro de cada diez kilos que se intentan sacar del país son incautados por las autoridades.

Por su parte, el sector primario, el dedicado a la extracción directa de recursos naturales y materias primas, redujo a la mitad su participación en el mercado laboral: de un treinta y cinco por ciento en 1978 pasó al diecisiete por ciento en 2014. Volviendo al examen de Ocampo, el sector industrial también se vio perjudicado al ser insuficientes las proyecciones al mercado externo prometidas por la apertura económica de los 90. Así llegaron las sucesivas crisis de los sectores textil, tabacalero, metalmecánico y manufacturero. Pensando en la actualización del aparato productivo, la inversión pública y privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación ha sido mínima, pues no alcanza a ser ni la mitad del uno por ciento del PIB, a pesar de los esfuerzos aislados que dentro del Estado han buscado estimular al sector.

El otro proceso, el del crecimiento del Estado, también se enfrentó a dificultades. De acuerdo con Salomón Kalmanovitz, la consecuencia fue la aparición de un Gobierno estructuralmente desfinanciado y cooptado por algunos sectores que jamás





abandonaron los antiguos vicios de la política (clientelismo, desperdicio de recursos y corrupción). El crecimiento del Estado, no solo el central sino el de las entidades locales multiplicadas con el esfuerzo democratizador del 91, exige una mayor carga tributaria. Sin embargo, la tributación se ha enfrentado a la evasión y al bajo recaudo de renglones claves como la propiedad de la tierra. En general y como reflejo de esa inestabilidad, el país ha debatido trece reformas tributarias en lo que va del siglo, cinco en el gobierno de Juan Manuel Santos y tres en el de Iván Duque. Todas estas dificultades se han traducido en un mínimo de servicios sociales, infraestructura y seguridad en las comunidades más vulnerables. De hecho, las cifras sorprendentes del inicio de este capítulo son principalmente debidas a esa desigualdad en el campo: allí el analfabetismo cuadruplica el de las ciudades, la falta de acceso a electricidad es dieciséis veces mayor y la falta de agua potable se multiplica por veinte.

Por supuesto que la mejora histórica de la calidad de vida en los sectores urbanos es innegable, como lo refleja la tendencia de caída de la pobreza experimentada entre 2005 y 2020, cuando la clase media llegó a calcularse como la cuarta parte de la población. Sin embargo, los retos de una economía y una vida política frágiles y la parálisis de numerosos sectores debido a la pandemia de covid han creado nuevas amenazas a la economía de la población. A principios de 2022 así lo advirtió un controvertido informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según el cual la inseguridad alimentaria en Colombia venía en aumento por las amenazas de inestabilidad y la crisis migratoria derivada

del desplazamiento interno y de las oleadas de población proveniente de Venezuela (a lo que hay que sumar los riesgos de estigmatización y xenofobia de una Colombia muy poco acostumbrada a la inmigración extranjera).

Recogiendo las preocupaciones de la FAO, la Asociación de Bancos de Alimentos ha advertido que, luego del peor ciclo de la pandemia, veintiún millones de colombianos no cuentan con recursos para comprar una canasta básica de alimentos y que además otros cinco millones sufren o han sufrido desnutrición crónica en su primera infancia y hoy padecen sus consecuencias, es decir que la pandemia ha venido a visibilizar una crisis incubada por años. El reto, volviendo a José Antonio Ocampo, está en hallar fórmulas que aceleren un crecimiento económico que a pesar de algunos aciertos ha sido modesto e insuficiente para emergencias como las que vive hoy el mundo. De ahí que los colombianos del presente debamos poner sobre la mesa el debate de la reindustrialización y la diversificación productiva, ojalá apostando a sectores asociados a las nuevas tecnologías.

La experiencia del país con este último sector, precisamente, es la que más refleja el rezago y la inequidad a través de amplios sectores de nuestra sociedad que padecen la falta de acceso a los medios digitales que hoy gobiernan la comunicación del planeta. De acuerdo con un informe de Dejusticia, la falta de acceso al espacio digital es un problema estructural: hay falta de conectividad y el tiempo es escaso para conectarse a internet; hay mala calidad del servicio, como también conocimientos y habilidades escasos de aprovechamiento de tecnologías, determinados por edad, nivel de ingresos o la región donde se habite. Y entre más





grande sea la pobreza, menor la posibilidad de reducir esa brecha, lo cual es alarmante en un momento en el que la pandemia aceleró el uso de internet para acceder a servicios educativos, a recursos del Estado o a todo tipo de trámites.

Las dificultades, por lo tanto, no solo han sido grandes, sino que han terminado por invisibilizar los progresos innegables que el país ha sabido experimentar en muchos órdenes. De acuerdo con un reciente estudio del economista Eduardo Lora, es importante visibilizar esa estabilidad financiera, esas mejoras en el nivel de vida de sectores muy significativos y esas experiencias de mayor acceso a servicios básicos y derechos fundamentales. Pero para eso sería necesario un esfuerzo común del Estado y las fuerzas productivas; de lo contrario, esos avances se seguirán desperdiciando en medio de la evasión de impuestos, las amenazas de la violencia, la corrupción, la desigualdad, la ineficiencia de los sectores público y privado y, algo no menos importante, las contingencias de un medio ambiente cuya fragilidad hemos ignorado en medio de nuestra propia tendencia a la depredación.

La principal de todas esas contingencias ambientales ni siquiera ha sido la pandemia de covid que tanto nos afectó, sino el impacto de nuestra actividad en los ciclos climáticos que experimenta la Tierra. Si seguimos desconociendo los riesgos derivados del cambio climático, ningún proyecto ligado al desarrollo económico o al bienestar social será viable en el largo plazo, como nos lo recuerdan las profesoras Diana Rodríguez Franco y Helena Durán Crane. La paz también hay que hacerla con un medio ambiente cuyos recursos creímos inagotables, como

ilimitada nuestra capacidad para consumirlos. En Colombia, el aumento de la temperatura afectará los ciclos de las cosechas en las tierras cálidas, subirá el nivel del mar en las ciudades costeras que crecieron ganándole terreno, disminuirá la vida en ríos y ciénagas que han garantizado el sustento de miles de pescadores, igual que los bosques, páramos y glaciares que proveen de agua a todo tipo de comunidades y, por supuesto, se amenazará esa biodiversidad tantas veces relegada a discursos que enorgullecen a un país que todavía no tiene la suficiente claridad de por qué aquello es un motivo de orgullo.

Las preguntas están abiertas para nuestra generación: ¿Cómo acceder al agua garantizando la conservación de las fuentes que la surten? ¿Cómo producir alimentos sin malgastar recursos ni destruir ecosistemas? ¿Por qué insistir en centrar el crecimiento económico en la explotación a gran escala de combustibles fósiles, en un mundo que tiende a la transformación energética? ¿Cómo hacer crecer la economía en el largo plazo retribuyendo con políticas de bienestar y sostenibilidad? Una gran lección en ese sentido nos la dieron las comunidades que aprovecharon el mecanismo constitucional de la consulta popular para hacer valer su posición ante la expansión de proyectos mineros y de hidrocarburos, a pesar de la ambigüedad de las leyes que regulan aquellos procesos electorales. Mientras el Estado lo permitió, diez poblaciones de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Quindío, Tolima y Santander votaron contra la megaminería entre 2013 y 2018.

Este no es, necesariamente, un escenario de terror al que estemos destinados, ni en lo político, ni en lo socioeconómico,





ni en lo ambiental. La historia de la presencia humana en el territorio que llamamos Colombia es enormemente rica en experiencias de vida de las que hoy podemos aprender. La lucha por abrir espacios en la vida pública es una continuación de los esfuerzos de reconciliación de las últimas seis décadas, como también de los reconocimientos sociales que el país se obligó a ver como necesarios hace un siglo. Las comunidades, hegemónicas o minoritarias, hacen uso de su conciencia participativa, tal como hace doscientos años hubo hombres y mujeres de orígenes muy variados que participaron activamente de la revolución que atestiguaban. El presente nos exige inventar formas de resistencia y renacimiento, como esas comunidades de todos los colores que hace cuatro siglos se encontraron con un sistema violento y un medio social colapsado, mucho peor que el nuestro. Debemos poner nuestra inteligencia en estrategias de administración de recursos, igual que los agricultores y artesanos que vivían aquí hace más de quinientos años. Podemos reconocer que no estamos solos y fortalecer por igual las solidaridades y los aprendizajes del medio que nos rodea, con sus certezas y peligros, tal como lo hicieron esos seres humanos que hace veinte milenios pisaron por primera vez este rincón del mundo.

De muchas formas nuestro propio pasado nos ha enseñado a sobrevivir y convivir. Espero que estos doce capítulos nos ayuden a recordarlo.

**Para seguir aprendiendo**

La literatura sobre la Colombia contemporánea está en permanente construcción, por lo que esta bibliografía puede ser provisional. Un balance de reflexiones sobre temas variados disponible en línea es *Futuro en tránsito* (2021), una serie editada por la Comisión de la Verdad, establecida por el Acuerdo de Paz. Entre otras colecciones se destacan *Los retos de la Colombia contemporánea* (2017), editada por Mauricio Nieto, y *¿Cómo mejorar a Colombia?* (2018), editada por Mauricio García Villegas.

Sobre retos de la construcción de paz se recomiendan *Cambiar el futuro* (2017) de Eduardo Pizarro, *Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia* (2020) de Francisco Gutiérrez Sanín y el pódcast *Irrepetible* (2022) de la Comisión de la Verdad. Entre las monografías sobre los desafíos políticos y sociales del presente, pueden verse *Levantados de la selva* (2019) de Estefanía Ciro y *Parar para avanzar* (2020) de Sandra Borda. Unos muy buenos manuales sobre temas socioeconómicos son *Economía esencial de Colombia* (2021) de Eduardo Lora y *Descifrar el futuro* (2021) de Fedesarrollo, que pueden complementarse desde la perspectiva ambiental con *Nuestro desafío ambiental* (2021), editado por Nicolás Wild Botero, y *Antropoceno: la huella humana* (2022) de Ernesto Guhl.

Sobre el contexto del acuerdo se recomiendan los documentales *El silencio de los fusiles* (Natalia Orozco, 2017) y *Ciro y yo* (Miguel Salazar, 2018), al igual que la película *Oscuro animal* (Felipe Guerrero, 2016) y la serie de televisión *La niña* (CMO/Caracol, 2016). Diferentes problemas sociales se abordan en los documentales *Sumercé* (Victoria Solano, 2020), *Los Chavista* (Paola Andrea Rey, 2020), *Tierra mojada* (Juan Sebastián Mesa, 2021) y *Del otro lado* (Iván Guarnizo, 2021), disponibles en RTVCPlay.



# BIBLIOGRAFÍA

## OBRAS GENERALES DE HISTORIA DE COLOMBIA

Aprile-Gniset, Jacques. *La ciudad colombiana.* Cali, Universidad del Valle, 1997.

Barbosa, Eric y López, Mabel Paola. *Historia de Colombia: Lo que necesitas saber.* Bogotá, Paidós, 2021.

Borja, Jaime y Rodríguez, Pablo (editores). *Historia de la vida privada en Colombia.* Bogotá, Taurus, 2009.

Burgas, Manuel; Garrido, Margarita y Lumbreras, Luis (editores). *Historia de América Andina.* Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 1999.

Bushnell, David. *Colombia: Una nación a pesar de sí misma.* Bogotá, Planeta, 1993.

Castro, Beatriz (directora). *Historia de la vida cotidiana en Colombia.* Bogotá, Norma, 1996.

Kalmanovitz, Salomón. *Breve historia económica de Colombia.* Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2015.

LaRosa, Michael y Mejía Pavony, Germán. *Historia concisa de Colombia.* Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2013.

Melo, Jorge Orlando. *Historia mínima de Colombia.* Bogotá, Océano, 2018.

Ocampo, José Antonio (editor). *Historia económica de Colombia.* Bogotá, FCE, 2015.

Palacios, Marco y Safford, Frank. *Colombia: País fragmentado, sociedad dividida.* Bogotá, Universidad de los Andes, 2002.

Pernett, Nicolás. *Presidentes sin pedestal: Una historia cínica de los gobernantes de Colombia.* Bogotá, Ediciones B, 2022.

Tirado Mejía, Álvaro (editor). *Nueva Historia de Colombia.* Bogotá, Planeta, 1989-1997.

_____. *Una historia política de Colombia: Del siglo XIX al Frente Nacional.* Bogotá, Debate, 2022.

Velásquez, Magdala (directora). *Las mujeres en la historia de Colombia.* Bogotá, Norma, 1995.

## PERIODO PREHISPÁNICO

Arocha, Jaime y De Friedemann, Nina. *Herederos del jaguar y la anaconda.* Bogotá, Carlos Valencia, 1982.

Botero, Clara Isabel. *El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia.* Bogotá, ICANH, 2006.

_____ y Langebaek, Carl. *Arqueología y etnología en Colombia: La creación de una tradición científica.* Bogotá, Universidad de los Andes, 2009.





Bray, Warwick. *Cruzando el tapón del Darién: Una visión de la arqueología del istmo desde la perspectiva colombiana.* Bogotá, Banco de la República, 1991.

Castaño Uribe, Carlos. *Chiribiquete: La maloka cósmica de los hombres jaguar.* Bogotá, Villegas Editores, 2019.

Duque Gómez, Luis. *Introducción al pasado aborigen.* Bogotá, Industria Continental Gráfica, 1990.

Gnecco, Cristóbal y Piazzini, Emilio. *Arqueología al desnudo: Reflexiones sobre la práctica disciplinaria.* Popayán, Universidad del Cauca, 2003.

Gómez, Ana María (editora). *Muiscas: Representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria.* Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

González, Víctor (editor). *Arqueología en el área intermedia.* Bogotá, ICANH, 2011.

Herrera, Leonor (editora). *Caminos precolombinos: Las vías, los ingenieros y los viajeros.* Bogotá, ICANH, 2000.

Instituto Colombiano de Antropología. *Introducción a la Colombia amerindia.* Bogotá, Ministerio de Educación, 1987.

Instituto Etnológico Nacional. *Boletín de Arqueología.* Bogotá, EIN, 1945-1951.

Labbé, Armand. *Colombia antes de Colón.* Bogotá, Carlos Valencia, 1988.

Langebaek, Carl. *Antes de Colombia: Los primeros 14.000 años.* Bogotá, Debate, 2021.

_____. *Arqueología colombiana: Ciencia, pasado y exclusión.* Bogotá, Colciencias, 2003.

_____. *Los muiscas: La historia milenaria de un pueblo chibcha.* Bogotá, Debate, 2019.

Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. *Arte de la tierra.* Bogotá, Banco Popular, 1992.

Museo del Oro. *Boletín del Museo del Oro.* Bogotá, Banco de la República, 1978-2021.

_____. *Museo del Oro.* Bogotá, Banco de la República, 2008.

Patiño, Víctor Manuel. *Historia de la cultura material en América Equinoccial.* Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993.

Ramos, Elizabeth. *Más allá de la forma y la función: Artefactos de hueso prehispánicos en Colombia.* Bogotá, Universidad de los Andes, 2009.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo. *Arqueología de Colombia.* Bogotá, Presidencia de la República, 1997.

Rodríguez, José Vicente. *Las enfermedades en las condiciones de vida prehispánica.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006.

## Conquista y Colonia

Avellaneda, José Ignacio. *La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada al Mar del Sur y la creación del Nuevo Reino de Granada.* Bogotá, Banco de la República, 1995.

_____. *La expedición de Sebastián de Belalcázar al Mar del Norte y su llegada al Nuevo Reino de Granada.* Bogotá, Banco de la República, 1992.

Barona, Guido. *Legitimidad y sujeción: los paradigmas de la "invención de América".* Bogotá, Colcultura, 1993.





Barrera, Eduardo. *Mestizaje, comercio y resistencia: La Guajira durante la segunda mitad del siglo XVIII.* Bogotá, ICANH, 2000.

Becerra, Virgilio y Vignolo, Paolo (editores). *Tierra firme: El Darién en el imaginario de los conquistadores.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011.

Bernard, Olivier y Zambrano, Fabio. *Ciudad y territorio: El proceso de poblamiento en Colombia.* Bogotá, Instituto Francés de Estudios Andinos, 1993.

Borja, Jaime. *Los ingenios del pincel: Geografía de la pintura y la cultura visual en la América colonial.* Bogotá, Universidad de los Andes, 2021.

Ceballos, Diana Luz. *Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada: Un duelo de imaginarios.* Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 1994.

Colmenares, Germán. *Cali: terratenientes, mineros y comerciantes.* Cali, Universidad del Valle, 1976.

_____. *Historia económica y social de Colombia.* Medellín, La Carreta, 1978.

Díaz, Rafael. *Esclavitud, región y ciudad: El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de Bogotá.* Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2002.

Garrido, Margarita. *Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada.* Bogotá, Banco de la República, 1993.

Hernández Cassiani, Rubén. *Genealogía de la identidad cultural palenquera.* Cartagena, Fuimzo, 2014.

Herrera, Marta. *El conquistador conquistado: Awás, cuayquer y sindaguas en el Pacífico colombiano, siglos XVI-XVIII*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2016.

_____. *Ordenar para controlar: Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos*. Bogotá, ICANH-Academia Colombiana de Historia, 2002.

López, Mercedes. *Tiempos para rezar, tiempos para trabajar: la cristianización de las comunidades muiscas durante el siglo XVI*. Bogotá, ICANH, 2001.

McFarlane, Anthony. *Colombia antes de la Independencia: Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón*. Bogotá, Banco de la República, 1997.

Mejía Pavony, Germán. *La ciudad de los conquistadores*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2012.

Melo, Jorge Orlando. *El establecimiento de la dominación española*. Bogotá, Presidencia de la República, 1997.

Muñoz, Santiago. *Costumbres en disputa: Los muiscas y el Imperio español en Ubaque*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2015.

Quevedo, María Piedad. *Un cuerpo para el espíritu: Mística de la Nueva Granada*. Bogotá, ICANH, 2007.

Ramírez, María Himelda. *De la caridad barroca a la caridad ilustrada: Mujeres, género y pobreza en la sociedad de Santafé de Bogotá*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006.

Restall, Mathew. *Los siete mitos de la Conquista*. Barcelona, Paidós, 2004.

Rodríguez, Pablo. *Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada*. Bogotá, Ariel, 1997.





Saldarriaga, Gregorio. *Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de Granada*. Bogotá, Universidad del Rosario, 2011.

Vargas Lesmes, Julián. *La sociedad de Santafé colonial*. Bogotá, Cinep, 1990.

## Ilustración e Independencia

Castro Gómez, Santiago. *La Hybris del Punto Cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

Chicangana, Yobenj y Ortega, Francisco (editores). *Del dicho al hecho: 200 años de independencia y ciudadanía*. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2010.

Gaviria, Radomiro; Saldarriaga, Óscar y Ramos, Aristides (editores). *El Nuevo Reino de Granada y sus provincias*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010.

Gutiérrez, Daniel. *1819: Campaña de la Nueva Granada*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.

Gutiérrez Ramos, Jairo. *Los indios de Pasto contra la República*. Bogotá, ICANH, 2007.

König, Hans-Joachim. *El camino hacia la nación: Nacionalismo en el proceso de formación del Estado en la Nueva Granada*. Bogotá, Banco de la República, 1994.

Lasso, Marixa. *Mitos de armonía racial*. Bogotá, Universidad de los Andes-Banco de la República, 2013.

Meisel, Adolfo (coordinador). *Colombia: Crisis imperial e independencia*. Barcelona, Taurus, 2012.

Múnera, Alfonso. *El fracaso de la nación: Región, clase y raza en el Caribe colombiano.* Bogotá, Banco de la República, 1998.

Nieto, Mauricio. *Remedios para el Imperio: Historia natural y apropiación del Nuevo Mundo.* Bogotá, Universidad de los Andes, 2000.

Phelan, John. *El pueblo y el Rey: La revolución comunera en Colombia.* Bogotá, Carlos Valencia, 1980.

Raisbeck, Daniel (editor). *Bicentenario de la Independencia de Colombia.* Bogotá, Banco de la República-Vicepresidencia de la República, 2019.

Rodríguez, Pablo. *Historia que no cesa: La Independencia de Colombia.* Bogotá, Universidad del Rosario, 2010.

Silva, Renán. *Los ilustrados de la Nueva Granada: Genealogía de una comunidad de interpretación.* Medellín, Universidad Eafit, 2002.

Thibaud, Clément. *República en armas: Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia.* Bogotá, Planeta, 2003.

## REPÚBLICA SIGLO XIX

Aguilera, Mario y Sánchez, Gonzalo (editores). *Memoria de un país en guerra: Los Mil Días.* Bogotá, Planeta, 2001.

Appelbaum, Nancy. *Dibujar la nación: La Comisión Corográfica en la Colombia del siglo XIX.* Bogotá, FCE-Universidad de los Andes, 2017.

Beluche, Olmedo. *Estado, nación y clases sociales en Panamá.* Panamá, Editorial Portobelo, 1997.





Bergquist, Charles. *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: La Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias.* Bogotá, Banco de la República, 1981.

Bermúdez, Suzy. *El bello sexo: La mujer y la familia durante el Olimpo Radical.* Bogotá, Universidad de los Andes, 1993.

Camacho, Carlos; Gutiérrez, Daniel y Garrido, Margarita (editores). *Paz en la República: Colombia siglo XIX.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019.

Castro, Beatriz (coordinadora). *Colombia: La construcción nacional.* Barcelona, Taurus, 2012.

Cortés, José David. *La batalla de los siglos: Estado, Iglesia y religión en Colombia en el siglo XIX.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2016.

Deas, Malcolm. *Del poder y la gramática: Y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas.* Bogotá, Tercer Mundo, 1993.

Delpar, Helen. *Rojos contra azules: El Partido Liberal en la política colombiana.* Bogotá, Procultura, 1994.

Fals Borda, Orlando. *Historia doble de la Costa.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.

González, Fernán. *Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado-nación en Colombia.* Medellín, La Carreta, 2006.

Hering, Max. *1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo.* Bogotá, Crítica, 2018.

Jaramillo Uribe, Jaime. *El pensamiento colombiano en el siglo XIX.* Bogotá, Temis, 1982.

Loaiza Cano, Gilberto. *Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.

López Bejarano, Pilar. *Un Estado a crédito: Deudas y configuración estatal en la Nueva Granada*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2015.

Martínez, Frédéric. *El nacionalismo cosmopolita: La referencia a Europa en la construcción nacional en Colombia*. Bogotá, Banco de la República, 2001.

Mayor Mora, Alberto. *Cabezas duras y dedos inteligentes*. Bogotá, Colcultura, 1997.

Meisel, Adolfo y Ramírez, María Teresa. *Economía colombiana del siglo XIX*. Bogotá, FCE, 2010.

Museo Nacional de Colombia (editor). *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia: Desde la marginalidad a la construcción de la nación*. Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002.

Ocampo, José Antonio. *Colombia y la economía mundial*. Bogotá, Siglo XXI, 1984.

Palacios, Marco. *La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia*. Bogotá, Norma, 2002.

Romero, Dolcey. *Esclavitud en la provincia de Santa Marta*. Santa Marta, Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, 2008.

Sierra Mejía, Rubén. *El radicalismo colombiano del siglo XIX*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006.

Tovar, Hermes. *Que nos tengan en cuenta: Colonos, empresarios y aldeas (Colombia, 1800-1900)*. Bogotá, Colcultura, 1994.

Valencia Llano, Albeiro. *Colonización antioqueña y vida cotidiana*. Bogotá, Banco de la República, Universidad de Caldas, 2019.





## República siglo XX

Archila, Mauricio. *Cultura e identidad obrera: 1910-1945*. Bogotá, Cinep, 1991.

_____. *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia*. Bogotá, ICANH, 2003.

Arias, Ricardo. *El episcopado colombiano: Intransigencia y laicidad*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2003.

Arrubla, Mario (director). *Colombia hoy*. Bogotá, Siglo XXI, 1984.

Behar, Olga. *Las guerras de la paz*. Bogotá, Planeta, 1985.

Betancourt, Darío y García, Martha. *Contrabandistas, marimberos y mafiosos: Historia social de la mafia en Colombia*. Bogotá, Tercer Mundo, 1994.

Braun, Herbert. *¡Mataron a Gaitán! Vida pública y violencia urbana en Colombia*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

Caballero Argáez, Carlos; Pachón, Mónica y Posada Carbó, Eduardo (compiladores). *Cincuenta años de regreso a la democracia: Nuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2012.

Castro-Gómez; Santiago; Flórez Malagón, Alberto; Hoyos, Guillermo y Millán, Carmen (editores). *Pensamiento colombiano del siglo XX*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2007-2013.

Colmenares, Germán. *Ricardo Rendón: Una fuente para el estudio de la opinión pública en Colombia*. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1984.

Concha Henao, Álvaro. *Historia social del cine en Colombia.* Bogotá, Black María, 2014-2020.

Dávila, Carlos (editor). *Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX y XX.* Bogotá, Cepal-Norma-Universidad de los Andes, 2002.

Deas, Malcolm (coordinador). *Colombia: Mirando hacia adentro.* Barcelona, Taurus, 2015.

Garcés, María Teresa y Romero, Marcela. *Suma de ideales para Colombia: El país soñado por la Constitución de 1991.* Bogotá, Debate, 2022.

González Posso, Camilo (compilador). *Memorias para la democracia y la paz: veinte años de la Constitución Política de Colombia.* Bogotá, Alcaldía Mayor, 2012.

Gutiérrez Sanín, Francisco. *La destrucción de una república.* Bogotá, Taurus-Universidad Externado de Colombia, 2017.

_____. *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia.* Bogotá, Norma, 2007.

Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. *La Violencia en Colombia.* Bogotá, Tercer Mundo, 1963.

Henderson, James. *La modernización en Colombia: Los años de Laureano Gómez.* Medellín, Universidad de Antioquia-Universidad Nacional de Colombia, 2001.

_____. *Víctima de la globalización: La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia.* Bogotá, Siglo del Hombre, 2012.

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. *Nuestra guerra sin nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia.* Bogotá, Norma-Universidad Nacional de Colombia, 2006.





Karl, Robert. *La paz olvidada: Reforma, violencia y la formación de una Colombia contemporánea.* Bogotá, Lerner, 2018.

LeGrand, Catherine. *Colonización y protesta campesina.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1988.

Londoño, Patricia. *Religión, cultura y sociedad en Colombia.* Bogotá, FCE, 2004.

Luna, Lola y Villarreal, Norma. *Historia, género y política: Movimiento de mujeres y participación política en Colombia.* Barcelona, Universidad de Barcelona, 1994.

Meertens, Donny y Sánchez, Gonzalo. *Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la violencia en Colombia.* Bogotá, El Áncora, 1985.

Melo, Jorge Orlando (coordinador). *Colombia: La búsqueda de la democracia.* Barcelona, Taurus, 2016.

Molano, Alfredo. *A lomo de mula: Viajes al corazón de las Farc.* Bogotá, Aguilar, 2016.

_____. *Los años del tropel: Crónicas de la violencia.* Bogotá, Cinep, 1985.

Museo Nacional de Colombia. *Medios y nación: Historia de los medios de comunicación en Colombia.* Bogotá, Ministerio de Cultura, 2003.

Oquist, Paul. *Violencia, conflicto y política en Colombia.* Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978.

Palacios, Marco. *El café en Colombia: Una historia económica, social y política.* México, El Colegio de México, 2008.

_____. *Violencia pública en Colombia: 1958-2010.* Bogotá, FCE, 2012.

Pécaut, Daniel. *Crónica de cuatro décadas de política en Colombia.* Bogotá, Norma, 2006.

_____. *Orden y violencia: Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953*. Bogotá, Norma, 2001.
Posada Carbó, Eduardo (coordinador). *Colombia: La apertura al mundo*. Barcelona, Taurus, 2015.
Rincón, Juan Camilo. *Nuestra memoria es para siempre*. Señal Memoria RTVC-Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2017.
Sáenz Rovner, Eduardo. *Conexión Colombia: Una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90*. Bogotá, Crítica, 2021.
Samper, María Elvira. *1989*. Bogotá, Planeta, 2019.
Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compiladores). *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Medellín, La Carreta, 1991.
Señal Memoria. *La voz del Poder: El discurso presidencial en Colombia*. Bogotá, RTVC Sistema de Medios Públicos, 2021-2022.
Serrano, Eduardo. *Historia de la fotografía en Colombia*. Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1983.
Sierra Mejía, Rubén (editor). *La hegemonía conservadora*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2018.
_____ (editor). *República Liberal, sociedad y cultura*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009.
Tirado Mejía, Álvaro. *Los años sesenta: Una revolución en la cultura*. Bogotá, Debate, 2014.
Torres, César. *Colombia siglo XX: Desde la Guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010.
Urrutia, Miguel. *Los de arriba y los de abajo*. Bogotá, Cerec, 1984.





## Procesos contemporáneos

Ávila, Ariel. *Detrás de la guerra en Colombia*. Bogotá, Planeta, 2019.
Borda, Sandra. *Parar para avanzar: Crónica del movimiento estudiantil que paralizó a Colombia*. Bogotá, Planeta, 2020.
Cardona, Luz Margarita. *La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia*. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2016.
Centro Nacional de Memoria Histórica. *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, El Centro, 2013.
Ciro, Estefanía. *Levantados de la selva: Vidas y legitimidades en los territorios cocaleros del Caquetá*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2019.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. *Futuro en tránsito*. Bogotá, La Comisión, 2021.
Fedesarrollo. *Descifrar el futuro: La economía colombiana en los próximos diez años*. Bogotá, Debate, 2021.
García Villegas, Mauricio (editor). *¿Cómo mejorar a Colombia?* Bogotá, Ariel, 2018.
Guhl, Ernesto. *Antropoceno: la huella humana*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2022.
Gutiérrez Sanín, Francisco. *Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia*. Bogotá, Debate, 2020.
Leal, Francisco (editor). *Tras las huellas de la crisis política*. Bogotá, Tercer Mundo, 1996.
Lora, Eduardo. *Economía esencial de Colombia*. Bogotá, Debate, 2021.

McFarland, María. *Aquí no ha habido muertos*. Bogotá, Planeta, 2018.

Nieto, Mauricio (editor). *Los retos de la Colombia contemporánea: Miradas disciplinares diversas en las ciencias sociales*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2017.

Pizarro, Eduardo. *Cambiar el futuro: Historia de los procesos de paz en Colombia*. Bogotá, Debate, 2017.

Ronderos, María Teresa. *Guerras recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, Aguilar, 2014.

Sánchez, Gonzalo. *Caminos de guerra, utopías de paz*. Bogotá, Crítica, 2021.

Valencia, León. *Adiós a la política, bienvenida la guerra: Secretos de un malogrado proceso de paz*. Bogotá, Intermedio, 2002.

Wild Botero, Nicolás. *Nuestro desafío ambiental*. Bogotá, Rocca, 2021.

## ARTÍCULOS DE PRENSA USADOS COMO FUENTE DEL CAPÍTULO 12

"Año turbulento". Francisco Gutiérrez Sanín. *El Espectador*. Bogotá, 14 de enero de 2022.

"Aún no sabemos toda la relación entre narcotráfico, conflicto y poder regional". *El Espectador*. Bogotá, 26 de enero de 2022.

"Colombia: quiénes son y cuánto poder tienen los grupos que se resisten a la paz". *BBC Mundo*. Londres, 12 de octubre de 2021.





"Colombia se encuentra en riesgo de sufrir de hambre aguda según la FAO". *Semana*. Bogotá, 28 de enero de 2022.

"El año económico en perspectiva". José Antonio Ocampo. *El Tiempo*. Bogotá, 18 de diciembre de 2021.

"El clima nos cambió para siempre". *El Tiempo*. Bogotá, 16 de octubre de 2016.

"Falta de acceso a internet, una trampa de la desigualdad". *El Espectador*. Bogotá, 4 de septiembre de 2021.

"Rodrigo Uprimny: 'Colombia está viviendo una primavera democrática'". *El País*. Madrid, 17 de mayo de 2021.

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.»

Emily Dickinson

# Gracias por tu lectura de este libro.

En **Penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

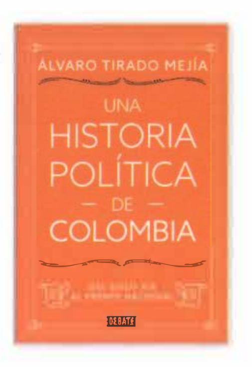
Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.



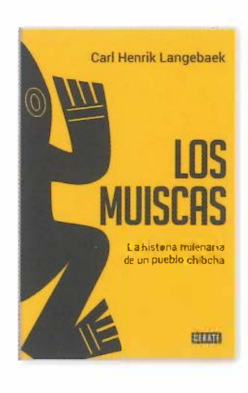
Penguinlibros.club



## OTROS LIBROS DE DEBATE




**UNA HISTORIA POLÍTICA DE COLOMBIA**
ÁLVARO TIRADO MEJÍA




**LOS MUISCAS**
CARL HENRIK LANGEBAEK




**SUMA DE IDEALES PARA COLOMBIA**
MARÍA TERESA GARCÉS
Y MARCELA ROMERO